

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q/BOL/1

IP/Q2/BOL/1

IP/Q3/BOL/1

IP/Q4/BOL/1

13 de febrero de 2002

(02-0729)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: español

## EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

BOLIVIA<sup>1</sup>

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria planteada por la delegación de Bolivia, las preguntas que le fueron formuladas y las correspondientes respuestas con motivo del examen de la legislación que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 2 a 5 de abril de 2001.<sup>2</sup>

### I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

#### A. GENERAL

A Bolivia le es grato señalar, en esta ocasión, que el país está cumpliendo plenamente con los compromisos que derivan del Acuerdo sobre los ADPIC. En efecto, en los últimos años han habido grandes avances en esta materia, más allá de normas internas bolivianas que en algunos casos se remiten a años anteriores a la suscripción del Acuerdo sobre los ADPIC, actualmente contamos con un cuerpo normativo mucho más completo y preciso. Como es de conocimiento de este Consejo, Bolivia es un Miembro activo y pleno de un proceso de integración subregional latinoamericano, cual es la Comunidad Andina. Este proceso está caracterizado por tener una normativa y un derecho de integración muy avanzado, lo que determina que las normas que de él se derivan tengan una aplicación automática y con primacía de la norma interna de cada uno de sus países. Dentro del ámbito de este proceso de integración, el tema de la propiedad intelectual ha merecido gran atención y logros importantes. En este sentido se destacan las Decisiones relativas a Derechos de Autor, a Obtentores Vegetales, a Propiedad Industrial y a Acceso a Recursos Genéticos. Este conjunto de Decisiones nos permite señalar entonces que contamos con una normativa totalmente completa para poder cumplir con los compromisos derivados del Acuerdo sobre los ADPIC. Demás está decir, que el Acuerdo sobre los ADPIC también forma parte de nuestra normativa interna al haber sido nuestra participación en la OMC y los Acuerdos que en ella se inscriben, ratificados por nuestro Parlamento Nacional.

---

<sup>1</sup> Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados por Bolivia en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/BOL/1; IP/N/1/BOL/C/1 a 6 y 8; IP/N/1/BOL/G/1; IP/N/1/BOL/I/1 y 2; IP/N/1/BOL/P/2 a 6 e IP/N/6/BOL/1.

<sup>2</sup> El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/30.

Pero más allá de ello, Bolivia está tramitando, con miras a tener muy pronto en vigencia, un Código de Propiedad Intelectual boliviano. El mismo traslada toda la normativa andina, la ratifica, incluso la complementa, puesto que establece una serie de otros campos normativos en materia administrativa y en materia de la observancia. Entonces, desde el punto de vista normativo podríamos señalar que estamos cumpliendo plenamente con los compromisos del Acuerdo sobre los ADPIC. Igualmente lo estamos haciendo desde el campo administrativo puesto que es de reciente creación el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), entidad que está en puertas a independizarse de un órgano del ejecutivo descentralizarse, cuyas características y mayores detalles de su funcionamiento se señalaran más adelante.

Asimismo quisiera destacar, con respecto a la forma en que Bolivia está honrando los compromisos del Acuerdo sobre los ADPIC, la materia judicial, para señalar que tenemos en vigencia el Código de Comercio, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, normas que en conjunto establecen una serie de disposiciones que nos permiten tener una previsión de una observancia cabal de los derechos de propiedad intelectual. En el Código Penal se establecen sanciones y penalidades específicas para quienes violen los derechos de autor, quienes incurran en delitos informáticos, quienes incurran en actos contra los privilegios de la industria, las patentes y quienes incurran en delitos contra la industria y el comercio. El Código de Procedimiento Penal recientemente puesto en vigor hace que los delitos de propiedad intelectual constituyan delitos de orden público y determina sanciones que van desde sanciones pecuniarias hasta la privación de la libertad.

En lo que se refiere a la observancia que el ciudadano boliviano hace de los compromisos de preservar los derechos de propiedad intelectual, debemos señalar que estamos ingresando en un proceso de concienciación de manera tal que el pueblo boliviano tome conciencia de que ésta es una vía de poder desarrollar nuestro país, de poder atraer inversiones y de poder tener una inserción en el contexto internacional acorde con todas las disciplinas que hemos negociado.

Sin embargo, y en esto quiero detenerme, debemos reconocer que hay un grado importante de informalidad en mi país, fruto de las circunstancias del desarrollo de países como Bolivia, pequeños, en los que se verifican importantes índices de pobreza. En consecuencia, se verifica esta informalidad que evidentemente hace dificultoso el trabajo para una aplicación totalmente plena de los compromisos que hemos asumido. Esto se señala principalmente con la intención de destacar ante ustedes, la forma en que países como Bolivia, para honrar sus compromisos en el marco de la OMC y fundamentalmente en este tema, tienen que asumir costos económicos, políticos y sociales, que muchas veces, y es el caso de mi país, no encuentran correspondencia con los beneficios que pueda obtener del sistema internacional. En otro orden de ideas, puedo destacar ante ustedes que Bolivia es uno de los países que aplica una política de apertura muy amplia, que no incurre en acciones de distorsión del comercio, que no discrimina ningún sector, que no da ningún apoyo, subvención u otra modalidad que pueda generar condiciones de competencia desleal. Con ello está contribuyendo al fortalecimiento del sistema internacional de comercio, pero muchas veces nos preguntamos cuál es el rédito de ello, y muchas veces nos asombramos cómo en esta Organización Mundial del Comercio no se verifican clara y nítidamente acciones contundentes que vayan en orden a, cada vez más, perfeccionar ese sistema internacional del comercio.

En el caso de la propiedad intelectual, es claro y evidente que el costo de abatir la informalidad en mérito a aplicar, cada vez más, esa normativa a la que me estoy refiriendo es muy grande. En resumen, estos son los esfuerzos que Bolivia ha venido realizando en los últimos años, que nos permiten tener la satisfacción de ahora señalarles que estamos en un muy buen camino en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, que hemos realizado una serie de avances y que aspiramos a que ellos estén haciendo eco de la Declaración del ECOSOC entre la vinculación de los derechos de propiedad intelectual y los derechos humanos. Con ello está contribuyendo al fortalecimiento del sistema internacional de comercio, pero muchas veces nos preguntamos cuál es el rédito de ello

Aspiramos a que nuestros esfuerzos encuentren un equilibrio en la identificación de vías más certeras para promover nuestro desarrollo. Asimismo, aspiramos a que el cumplimiento que estamos dando a los compromisos del Acuerdo sobre los ADPIC encuentren un equilibrio con acciones que preserven nuestro patrimonio genético y biológico y con normas que igual y claramente protejan nuestro patrimonio en conocimientos tradicionales.

En lo que se refiere al Plan Económico y de Desarrollo Social de Bolivia, trazado para el período 1997-2002, el mismo contempla en su pilar institucional el desarrollo de las bases normativas necesarias para asegurar la pronta, eficiente y calificada administración de la justicia. En este sentido, brindar condiciones de seguridad jurídica que logre la inserción de nuestro país en el avance de la ciencia y la tecnología, y en el desarrollo tanto cultural como económico. La protección de los derechos de la propiedad intelectual constituye por lo tanto, un deber ineludible del Estado. El Viceministerio de Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en cumplimiento con su misión institucional y de conformidad con el Plan de Desarrollo ya mencionado, ha promovido la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC creando los mecanismos y las instituciones necesarias para su realización. En este sentido, se ha creado el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que en este instante realiza los esfuerzos máximos para concienciar, mejorar y llevar adelante esta tarea prioritaria.

#### B. EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)

En el actual proceso de trascendentales acontecimientos políticos progresistas y económicos positivos en la estructura social de las naciones, y conscientes de que en el mismo han aparecido como factores imprescindibles, la generalización del afán participativo de innumerables sectores, con los frutos de su trabajo, volcado en invenciones, en frutos de la imaginación humana creativa, en investigaciones metodológicas y en eficiencias tecnológicas, creemos que ha llegado el momento, de que las naciones consoliden institucional y orgánicamente la función de la defensa, preservación y estímulo del papel de la propiedad intelectual, a niveles asociados y universales, que comprometan el buscado desarrollo integral de nuestros pueblos.

En este sentido el Gobierno boliviano a través de la ley LOPE de 1997, y ratificando su institucionalización mediante decreto supremo de septiembre de 1998, instituyó el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI.

Esta instancia es la encargada de la administración de la propiedad intelectual en el país, dentro de unas estudiadas políticas y acciones encaminadas hacia una mayor protección jurídica del esfuerzo creativo de sectores y personas de nuestra colectividad, que hasta el momento dichos esfuerzos y sus resultados, siguen siendo vilipendiados, ultrajados y saqueados por la acción conjunta y despiadada de aquellos intereses de capitales tenebrosos que abarcan desde los que usufructúan el flagelo de las drogas, el contrabando, y el lavado de los dólares, deshonorando el respeto humano debido, a los creadores en todo campo de la actividad, con el asalto cobarde de la piratería contra la propiedad intelectual de los habitantes de nuestros países.

Permítasenos aclarar que ésta, nuestra posición, deviene del conocimiento que tenemos, no sólo nosotros, los habitantes de esta nación, sino también quienes, desde D'Orbigny, y tantos otros sabios que visitaron nuestro país, de la enorme potencialidad creativa de los habitantes bolivianos, y que ahora encuentra, la suficiente comprensión de los gobernantes, para contribuir y ofrecer la disposición de medios y condiciones que permitan el ejercicio a nuestros pueblos de esa potencialidad, con lo que a tiempo de lograrse, y brindar los frutos de esa creatividad de producción tanto artística como inventiva al servicio de la industria: se obtendrá, la gran ayuda para nuestro desarrollo integral del agregado valioso de una cohesión espiritual y política tan indispensable, al esfuerzo comunitario de una modernización en todos los sentidos.

Se puede afirmar que la Propiedad Intelectual en Bolivia se configura en la época republicana. Durante la Colonia rigieron las Ordenanzas del Virrey Fuentes Clara de 1746 relacionadas con el "arte de la platería" la cual debía estar debidamente "quintada y marcada" y el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias de 12 de octubre de 1778 que preveía que las mercaderías embarcadas para Indias, deberán ir provistas de sus "respectivas y legítimas marcas". Estas normas dejaron de tener aplicación con las luchas emancipadoras en América.

En los primeros años de vida republicana y luego de la vigencia de las principales normas jurídicas del país, tales como el Código Civil de 1832, el Código Mercantil de 1834, se introdujo en la Constitución Política del Estado de 1843 la protección de los privilegios exclusivos y temporales.

Finalmente es importante señalar que Bolivia, se incorpora en la modernidad de la Propiedad Intelectual mediante su adhesión a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mediante Ley de 12 de febrero de 1993, y asimismo adopta una medida trascendental dentro de su Sistema de Propiedad Industrial al ratificar el Convenio de la Unión de París mediante Ley N° 1482 de 6 abril de 1993; y el Convenio de Berna mediante Ley 1439 del 8 de febrero de 1993; la puesta en práctica de estos instrumentos legales es -sin lugar a dudas- de un gran valor para el desenvolvimiento de las actividades de la propiedad intelectual en Bolivia y que sirven como verdaderos instrumentos para ampliar los mecanismos de protección de la propiedad industrial y por ende para el desarrollo del comercio y la industria en Bolivia como lo establece el Acuerdo sobre los ADPIC.

Dentro el proceso de modernización que ha implementado el Gobierno boliviano en materia de protección de la propiedad intelectual, desde el mes de septiembre de 1999, se ha procedido oficialmente a la institucionalización del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) dando cumplimiento al Decreto 25159, con el nombramiento del director de esta unidad y un equipo asesor especializado.

Este Servicio tiene a su cargo fundamentalmente la administración de las oficinas nacionales de Derecho de Autor y Propiedad Industrial. El primero dependía funcionalmente del Viceministerio de Cultura y el segundo de Industria y Comercio Interno. Con la nueva estructura ambas instancias tienen dependencia directa del SENAPI, instancia descentralizada que tiene autonomía de gestión y dependencia funcional y lineal del Viceministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Desarrollo económico.

#### C. DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA

##### 1. Propiedad industrial

<b>Norma legal</b>	<b>N° de instrumento jurídico</b>	<b>Fecha de vigencia</b>
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial(CUP)	Ley N° 1482	6 de abril de 1993
Ratificación de la Decisión 344 concerniente al Régimen Común sobre Propiedad Industrial	Decreto Supremo N° 24038	4 de septiembre de 1996
Decisión 486 - Régimen Común Andino de Propiedad Industrial		15 de septiembre de 2000
Ley de Privilegios Industriales		12 de diciembre de 1916

<b>Norma legal</b>	<b>Nº de instrumento jurídico</b>	<b>Fecha de vigencia</b>
Ley general sobre marcas y registros industriales y comerciales		15 de enero de 1918
Código de Comercio sobre competencia desleal: arts. 66-71; sobre Nombre Comercial: arts. 470-474; sobre Marcas: arts. 475-483	Nº 168333	19 de julio de 1979
Código Penal; sobre delitos contra la industria y el comercio: arts. 232-237	Nº 10426	23 de agosto de 1972
Ley General de Aduanas	Ley Nº 1990	28 de julio de 1999

2. Derecho de autor

<b>Norma legal</b>	<b>Nº de instrumento jurídico</b>	<b>Fecha de vigencia</b>
Convención Universal sobre Derecho de Autor		22 de diciembre de 1989
Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas	Ley Nº 1439	8 de febrero de 1993
Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión	Ley Nº 1476	2 de abril de 1993
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos		21 de diciembre de 1993
Ley de Derecho de Autor	Nº 1322	13 de abril de 1992
Decreto Supremo Reglamentario de la Ley de Derecho de Autor	Nº 23907	7 de diciembre de 1994
Resolución Secretarial que dispone el funcionamiento de la Dirección Nacional de Derecho de Autor	Nº 042/96	5 de junio de 1996
Decreto Supremo que reglamenta el Soporte Lógico o Software	Nº 24582	25 de abril de 1997
Decreto Supremo que crea el Comité Interinstitucional de la Propiedad Intelectual	Nº 24581	25 de abril de 1997

<b>Norma legal</b>	<b>Nº de instrumento jurídico</b>	<b>Fecha de vigencia</b>
Ley del Cine	Nº 1302	20 de diciembre de 1991
Reglamentario de la Ley del Cine	Decreto Supremo Nº 23493	7 de mayo de 1993
Ley de Telecomunicaciones	Nº 1632	5 de julio de 1995
Decreto Supremo Reglamentario de la Ley de Telecomunicaciones	Nº 24132	27 de septiembre de 1995
Ley de modificaciones al Código Penal	Nº 1768	10 de marzo de 1997

3. Variedades vegetales

<b>Norma legal</b>	<b>Nº de instrumento jurídico</b>	<b>Fecha de vigencia</b>
Convenio Internacional sobre Variedades Vegetales, UPOV (Adhesión al Acta de 1972 - 1978)	Nº L. 1968	24 de marzo de 1999
Decisión 345 – Régimen Común de protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales		21 de octubre de 1993
Creación del Consejo Nacional de Semillas que regula la certificación y fiscalización de semillas en Bolivia	Decreto Supremo Nº 23069	28 de febrero de 1992
Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento sobre Fiscalización de la Producción de la Semilla	443/86	12 de diciembre de 1986
Aprobación de la Reglamentación General de Aplicación del D.S. 23069 y establece la Protección de Variedades mediante el otorgamiento de Títulos de Propiedad	Resolución Secretarial Nº 79/95	3 de agosto de 1995
Resolución Secretarial que regula la Dirección y el Programa Nacional de Semillas		3 de agosto de 1995
Reglamento general sobre certificación y fiscalización de semillas	Resolución Secretarial Nº 64/96	9 de agosto de 1996

4. Biodiversidad

Norma legal	Nº de instrumento jurídico	Fecha de vigencia
Decisión 391, Régimen Común sobre acceso a recursos genéticos	Decisión Nº 391	2 de julio de 1996
Reglamento sobre Bioseguridad	Decreto Supremo Nº 2012	
Convenio sobre Diversidad Biológica	Ley Nº 1588	25 de julio de 1994

5. Acuerdos internacionales generales

Norma legal	Nº de instrumento jurídico	Fecha de vigencia
Convenio que establece la OMPI	Nº 1438	12 de febrero de 1993
Acuerdo sobre los ADPIC	Nº 1637	5 de julio de 1995
Tratado de Libre Comercio Bolivia – México	Decreto Supremo Nº 23933	23 de diciembre de 1994
Tratado de Libre Comercio Bolivia - Estados Unidos		4 de diciembre de 1991
Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico	D.S. Nº 20521	21 de septiembre de 1984

6. Oficina nacional competente

Norma legal	Nº de instrumento jurídico	Fecha de vigencia
Ley de Organización del Poder Ejecutivo	Nº 1788	16 de septiembre de 1997
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual	Decreto Supremo Nº 25159	4 de septiembre de 1998

7. Oficina nacional competente de variedades vegetales

Norma legal	Nº de instrumento jurídico	Fecha de vigencia
Consejo Nacional de Semillas	Decreto Supremo Nº 23096	28 de febrero de 1992

## El SENAPI

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, cuya sigla es SENAPI, es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico, con competencia de alcance nacional, estructura administrativa propia, dependencia lineal del Ministerio de Desarrollo Económico y dependencia funcional del Viceministerio de Industria y Comercio Interno (art. 2 D.S. N° 25159/septiembre de 1998).

El SENAPI tiene como misión institucional administrar el régimen de propiedad intelectual, aplicando las normas de Propiedad Industrial y Derecho de Autor, a cuyo efecto se constituye en autoridad nacional competente en esta materia (art. 3 D.S. N° 25159/septiembre de 1998).

Las funciones y competencia del SENAPI son las siguientes:

- a) otorgar derechos de exclusiva, brindar protección y seguridad jurídica a los titulares de derechos de propiedad intelectual;
- b) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convenios internacionales en materia de propiedad intelectual y su protección;
- c) recibir, procesar, registrar, conceder o demás derechos de propiedad intelectual;
- d) llevar y mantener los registros nacionales de derecho de propiedad intelectual;
- e) coordinar la ejecución de las estrategias, políticas, planes y programas para el desarrollo de la protección de los derechos de propiedad intelectual;
- f) representar al país, por encargo del Gobierno, en todas las negociaciones nacionales e internacionales sobre la materia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
- g) publicar todas las solicitudes de registro, notificaciones y resoluciones sobre propiedad intelectual en la Gaceta Oficial de Bolivia; y
- h) elaborar y proponer proyectos normativos relativos a la propiedad intelectual.

En el ámbito de la Comunidad Andina, Bolivia participó activamente en las jornadas de modificación de la Decisión 344, habiendo sido aprobada por consenso el pasado 14 de septiembre una nueva Decisión Andina; conocida como la 486 que comprende 16 Títulos, 280 artículos y tres disposiciones transitorias, vigente en nuestro país a partir del 1° de diciembre de 2000.

Los diversos tratados y convenios internacionales administrados por la OMPI que responden a procesos coyunturales imprescindibles en el desarrollo de la propiedad intelectual en general permiten reconocer al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que entró en vigor el 24 de enero de 1978 con un primer grupo de 18 Estados en relación a 115 adheridos hasta la fecha, como un instrumento normativo mundial que fue discutido ampliamente en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia en junio de 2000, en el Seminario Regional Avanzado OMPI - OEP - OEPM - SENAPI sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para Países de América Latina.

En este aspecto nuestra posición contempla la buena posibilidad de que la sensibilidad que debe caracterizar a todos quienes buscamos universalizar la preservación y defensa de los derechos de la propiedad intelectual, logre que aquellos países que por su mayor desarrollo, disponen de medios y



recursos, se dispongan a recorrer un camino de solidaridad con aquellos países que como el nuestro necesitan contar con apoyos de ellos, a través de aportes, a los países en proceso de desarrollo, para así lograr las vías que nos permitan acceder a las tecnologías, como así mismo acelerar el proceso de acceso de nuestras industrias y de los demás sectores interesados en la información relacionada con las invenciones. Todo ello abrirá cauce a nuestros grandes propósitos de preservación del capital humano, que abarca el fruto de la creatividad en todo sentido.

El Gobierno de la República de Bolivia, decidió por lo tanto, iniciar los trámites necesarios de acuerdo a la legislación nacional, para la adhesión al Tratado del PCT.

Además como uno de los pilares fundamentales en la tarea de modernización del Estado boliviano, referente a la propiedad intelectual, se encuentra actualmente en el Congreso de la Nación, el nuevo Proyecto del Código de Propiedad Intelectual. En la actualidad, este proyecto se encuentra para su aprobación en la Cámara de Senadores.

Esta norma contendrá recomendaciones y contenidos mínimos de los acuerdos regionales e internacionales suscritos, como prioridad para garantizar las correctas y oportunas medidas de observancia, con la consiguiente seguridad jurídica.

El narcotráfico, no logró poner a Bolivia de rodillas y los corsarios de la piratería intelectual no lograrán jamás hacer de nuestro país su santuario, pues prevalecerá en nuestra Nación, el imperio de la ley.

## **II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ**

**1. Tenemos entendido que el proyecto de legislación sobre propiedad intelectual está todavía pendiente de aprobación por el Congreso de Bolivia.**

**a) ¿Para cuándo se prevé su aplicación efectiva?**

Sí será efectivamente implementado, una vez sancionado por el poder legislativo, promulgado por el poder ejecutivo y publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, entrará en vigencia inmediata con carácter obligatorio.

**b) ¿Cuáles son las mejoras fundamentales que introduce dicho proyecto de legislación con respecto a las obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC?**

El objetivo de este anteproyecto es reforzar y compatibilizar la legislación boliviana con las normas multilaterales, entre ellas fundamentalmente el Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>3</sup>

**2. Se ruega que describan de qué manera se han aplicado las obligaciones en materia de observancia (artículos 41-61 del Acuerdo sobre los ADPIC).**

A fin de que el Gobierno del Canadá cuente con la información solicitada, se adjunta la respuesta de Bolivia a la Lista sobre cuestiones de observancia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> El anteproyecto es reproducido en el anexo (sólo en español).

<sup>4</sup> Véase el documento IP/N/6/BOL/1.

**3. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su país?**

El artículo 3 de la Ley N° 1322 de Derecho de Autor de Bolivia, dispone que se amparan los derechos de todos los autores bolivianos, de los extranjeros domiciliados en el país y las obras de extranjeros publicadas por primera vez en el país. Los extranjeros no domiciliados en el país, gozarán de la protección de esta Ley en la medida que les corresponda en virtud de los convenios y tratados internacionales en los que Bolivia sea parte. En su defecto, estarán equiparados a los bolivianos, cuando éstos a su vez lo estén a los nacionales en el país respectivo.

Para los efectos de esta Ley los autores apátridas, refugiados o de nacionalidad controvertida, serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.

**4. ¿Cuáles son las mejoras fundamentales que introduce la Decisión 486 sobre la propiedad intelectual, que entró en vigor el 1° de diciembre de 2000, con respecto a las obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC?**

La Decisión 486 de la Comunidad Andina "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", cubre las siguientes formas de propiedad intelectual:

- patentes de invención
- los modelos de utilidad
- los esquemas de trazado de circuitos integrados
- los diseños industriales
- las marcas
- lemas comerciales
- las marcas colectivas
- las marcas de certificación
- nombres comerciales
- rótulos o enseñas
- indicaciones geográficas
- marcas notorias
- secretos empresariales
- medidas en frontera
- competencia desleal
- acciones por infracción de derechos.

**5. a) ¿Se establecerán en las revisiones de su legislación penal procedimientos penales y sanciones en cumplimiento del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC?**

Actualmente está vigente el Código Penal: capítulo X, artículos 362 y 363 y capítulo XI, artículos 363*bis* y 363*ter*. Además en el Código de Procedimiento ya se han calificado a los delitos contra la propiedad intelectual de orden público. Estas previsiones están vigentes.

**b) ¿Cuándo se prevé que se aplicará dicha legislación?**

Por otra parte, es importante destacar que en el Título Final del nuevo Código Penal se aplica el artículo 364 (abrogatoria de leyes penales).

### **III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS**

#### **A. DISPOSICIONES GENERALES**

**1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Toda la legislación de carácter económico y social actualmente vigente en Bolivia tiende a promover y realizar el interés público y el bienestar general de la nación. No es posible identificar ninguna ley en particular en los términos de la pregunta planteada, pues velar por el interés público es un principio de carácter general, inherente a la función del Estado.

Sin embargo, podrían citarse a título de ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual, las disposiciones del artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prevén la posibilidad de conceder licencias obligatorias por razones calificadas de interés público.

Las disposiciones especiales contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC (partes II a VII) están sujetas a las Disposiciones generales y principios básicos contenidos en la parte I del Acuerdo, incluyendo su artículo 8. La disposición del artículo 8 del Acuerdo prevé ciertos principios, y reconoce la facultad que tienen los Miembros de la OMC de salvaguardar esos principios en su legislación interna.

La coherencia de las eventuales disposiciones contenidas en la legislación nacional respecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC estaría asegurada por lo previsto en el artículo 8 de ese Acuerdo, que legitima las medidas que se pudiera tomar un Miembro de la OMC conforme a sus disposiciones.

#### **B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

**2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).**

El artículo 4 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, establece que se protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas o artísticas. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento comercial o industrial.

El artículo 6 de la citada Ley, dispone también que se protegen los derechos de los autores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo o la forma de expresión empleado y cualquiera sea su destino.

En el artículo 14 de la Ley 1322, se hace referencia a los derechos morales, estableciendo que el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para:

- Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos relativos a la utilización de su obra.
- Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra.
- Conservar su obra inédita o anónima. Después del fallecimiento del autor, no podrá divulgarse su obra si éste lo hubiera prohibido por disposición testamentaria, ni podrá revelarse su identidad si aquél, por el mismo medio, no lo hubiera autorizado.

Estas mismas normas están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, el artículo 15 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, se refiere a los derechos patrimoniales, estableciendo que el autor de una obra protegida o sus causahabientes tendrán el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir cualesquiera de los actos siguientes:

- a) reproducir su obra total o parcialmente;
- b) efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier transformación de la obra;
- c) comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio de difusión.

El artículo 13 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, amplía este concepto con los siguientes puntos:

- a) la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- b) la importación al territorio de cualquier país Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho.

La Ley de Derecho de Autor 1322 de Bolivia, se ajusta estrictamente a las normas contenidas en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, incluyendo el artículo *6bis*, referido a los derechos de autor y derechos conexos.

### **3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases de datos o compilaciones de datos.**

En el artículo 6, inciso 1, de la Ley de Derecho de Autor, se especifica que están protegidos los programas de ordenador o computación, (soporte lógico o software) bajo reglamentación específica.

Posteriormente a la Ley, se dictó el D.S. 24582 de 25 de abril de 1997 que aprueba el Reglamento del Soporte Lógico o Software, el cual en su artículo 1 dispone, expresamente, que los programas de ordenador y las bases de datos serán protegidas como obras literarias. Asimismo, la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, establece en su artículo 23 que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas de aplicación, sea en forma de Código Fuente o Código Objeto.

Para reafirmar la protección del software como obra literaria, el artículo 4 del D.S. 24582, dispone que los autores de soporte lógico están protegidos por el artículo 14 de la Ley de Derecho de Autor. Por la vía de excepción, y sin vulnerar los derechos morales, este Reglamento, amparado por el artículo 6, inciso 1, de la Ley 1322, permite modificaciones y mejoras al soporte lógico y al banco de datos.

En lo que se refiere a los derechos patrimoniales, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, solamente los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o prohibir toda forma de explotación de los mismos, en particular, su comercialización, arrendamiento, difusión, reproducción, adaptación, modificación, mejoras, traducción, transformación e importación.

**4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso afirmativo, las obras abarcadas por éste.**

El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra el derecho de distribución a favor del autor con respecto a su obra, el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.

La legislación en Derecho de Autor, prevé derechos de alquiler para los productores de fonogramas y los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos. El artículo 54 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo II, De los Productores de Fonogramas, dispone que el productor fonográfico tiene, respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación al público, inclusive la distribución por cable, emisión por satélite o cualquier otro medio de utilización.

En lo que se refiere a los derechos patrimoniales, el Decreto Supremo 24582 de 25 de abril de 1997, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Soporte Lógico o Software, en su artículo 5 dispone que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, solamente los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o prohibir toda forma de explotación de los mismos, en particular, su comercialización, arrendamiento, difusión, reproducción, adaptación, modificación, mejoras, traducción, transformación e importación.

**5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su legislación.**

Los artículos 34 a 36 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena reconocen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.

Los artículos 37 y 38 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena reconocen los derechos de los productores de fonogramas.

Los artículos 39 a 41 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena reconocen los derechos de los organismos de radiodifusión.

La Ley 1322 de Derecho de Autor, en su artículo 53, dispone que los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos.

En el mismo artículo se dispone que los derechos reconocidos a los artistas intérpretes y ejecutantes tendrán una duración de cincuenta años, contados desde el 1º de enero del año siguiente al de la fijación, o al de la interpretación o ejecución.

El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación.

A su fallecimiento y durante el plazo de los veinte años siguientes, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.

El artículo 54 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo II, De los Productores de Fonogramas, dispone que el productor fonográfico tiene respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación al público, inclusive la distribución por cable, emisión por satélite o cualquier otro medio de utilización.

El artículo 55 de la Ley 1322, dispone que cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilice con autorización para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor de fonogramas. El productor de fonogramas o su licenciado y los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, podrán convenir la forma de percibir los derechos de comunicación al público. A falta de dicho acuerdo, la percepción del derecho será hecha por el productor de fonogramas o sus licenciados y la distribución de la suma recibida será realizada por mitades entre los artistas, intérpretes y ejecutantes por una parte y el productor de fonogramas por la otra.

En cuanto se refiere a los organismos de radiodifusión, éstos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Derecho de Autor, gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los siguientes actos:

- a) la retransmisión de sus emisiones;
- b) la fijación de sus emisiones de radiodifusión;
- c) la reproducción de una fijación de sus emisiones.

**6. Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El artículo 34 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, dispone que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

Asimismo, el artículo 42 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, establece que en los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los países Miembros, podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el capítulo X, de los Derechos Conexos.

El artículo 21 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, da estricto cumplimiento al artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC al disponer que:

"las limitaciones y excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante legislaciones internas de los países miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos".

**7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.**

La Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena estipula los siguientes plazos de duración para los derechos de autor y los derechos conexos:

- Derechos de autor: la vida del autor más 50 años después de su muerte. Cuando la titularidad del derecho corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a 50 años a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso (artículo 19). El plazo de protección se contará a partir del 1º de enero del año siguiente al de la muerte del autor, o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso (artículo 20).
- Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes: al menos 50 años contados a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o la fijación, según el caso (artículo 36).
- Derechos de los productores de fonogramas: al menos 50 años contados a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que se realizó la fijación (artículo 38).
- Derechos de los organismos de radiodifusión: al menos 50 años contados a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que se realizó la emisión (artículo 41).

En el artículo 53 de la Ley 1322, se dispone que los derechos reconocidos a los artistas intérpretes y ejecutantes tendrán una duración de 50 años, contados desde el 1º de enero del año siguiente al de la fijación, o al de la interpretación o ejecución.

El artículo 19 de la Ley 1322, establece que el término de protección para los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión es de 50 años, computados desde el día 1º de enero del año siguiente al de la muerte o al de la fijación, transmisión o creación de la obra.

**8. Se ruega describir en qué forma y en virtud de qué disposiciones la legislación de su país otorga protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.**

El artículo 59 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena da aplicación inmediata a sus disposiciones, estipulando que los plazos de protección menores a los previstos en la Decisión que estuviesen corriendo quedarán automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazos dispuestos en la Decisión.

Además, el artículo 60 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena estipula que los derechos sobre obras que no gozaban de protección conforme a la ley nacional anterior a la Decisión, gozarán automáticamente de la protección reconocida por la Decisión, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

**9. Sírvanse describir cómo y en virtud de qué disposiciones prevé la legislación boliviana un derecho de arrendamiento de conformidad con el artículo 11 y el párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC y, en tal caso, las categorías de titulares del derecho y las obras a las que se aplica.**

El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra el derecho de distribución a favor del autor con respecto a su obra, el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.

La legislación en Derecho de Autor, prevé derechos de alquiler para los productores de fonogramas y los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos. El artículo 54 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo II, De los Productores de Fonogramas, dispone que el productor fonográfico tiene, respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación al público, inclusive la distribución por cable, emisión por satélite o cualquier otro medio de utilización.

En lo que se refiere a los derechos patrimoniales, el Decreto Supremo 24582 de 25 de abril de 1997, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Soporte Lógico o Software, en su artículo 5 dispone que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, solamente los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o prohibir toda forma de explotación de los mismos, en particular, su comercialización, arrendamiento, difusión, reproducción, adaptación, modificación, mejoras, traducción, transformación e importación.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

**10. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.**

El artículo 134 de la Decisión 486 otorga una definición y presenta las condiciones de registrabilidad de una marca señalando que: constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y sea susceptible de representación gráfica.

Por otra parte, expresa que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

**11. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la legislación sobre marcas de su país. Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales. Se ruega indicar si puede otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.**

Conforme a la definición de marca contenida en el artículo 134 de la Decisión 486, los servicios son protegidos.

A su vez, el artículo 190 de la misma Decisión consagra la protección del Nombre Comercial. Es decir, protege a cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.

Pueden registrarse como marcas los signos sonoros, olfativos y plásticos (tridimensionales), siempre que cumplan con la condición de ser representables gráficamente y suficientemente distintivos. Sin embargo, respecto de los perfumes conviene señalar que los principios del derecho de marcas exigen que el signo que pretenda protegerse como marca consista en un elemento que se aplique o agregue al producto que se va a distinguir. La marca debe percibirse como un elemento



diferente y separable (física o idealmente) del producto al cual se aplica. En tal sentido, tratándose de productos consistentes en una fragancia o perfume, la marca no podría consistir en la fragancia misma, pues en tal caso la marca se confundiría con el producto que debe distinguir.

**12. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el registro de una marca de fábrica o de comercio. Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.**

El artículo 166 de la Decisión 486, entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación de registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Asimismo, el artículo 167 de la Decisión 486, establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro y para demostrarse el uso de la marca, se tomarán en cuenta las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Por otra parte, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de personas interesadas, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres primeros años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

El mantenimiento de registro de una marca también estará limitado por el incumplimiento de las renovaciones respectivas (1<sup>ra</sup> Renovación; transcurridos 10 años desde la fecha de concesión). Sin embargo, a efectos de la renovación la prueba de uso no será exigida.

**13. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.**

El registro de la marca es indefinidamente renovable en períodos sucesivos de diez años, en la medida que el titular del registro o quién tuviere legítimo interés, solicite la renovación de registro ante la Oficina Nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o goce del período de gracia de seis meses más contados a partir de la fecha de vencimiento del registro. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

**14. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.**

El artículo 166 de la Decisión 486, entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

**15. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.**

El artículo 135 inciso l) de la Decisión 486, en las causales de irregistrabilidad, establece que no podrá registrarse como marca el signo que: "consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique".

Además, el artículo 135 inciso j) estipula que no podrá registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

**16. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la legislación de su país.**

En el artículo 201 del Título XII, capítulo I, de la Decisión 486, se establece que: "Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiera a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

**17. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.**

En la definición de denominación de origen contenida en el artículo 201 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se concreta el vínculo entre las cualidades y características que particularizan un producto y su origen geográfico o zona geográfica que involucra su denominación. Ese artículo establece que se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

**18. Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para los vinos y bebidas espirituosas. Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan, abarcados por esa protección adicional.**

La legislación otorga protección adicional para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 215 de la Decisión 486.

Dicho artículo, señala: "Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas."

Los países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo país Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Igualmente, el artículo 216 indica que: "La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión."

Por su parte, el artículo 217 establece que: "De oficio o a solicitud de parte, la Oficina Nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión."

Consecuentemente, el artículo 218 manifiesta que: "Las Oficinas Nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen."

El artículo 219, indica que: "Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las Oficinas Nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen."

Finalmente, el artículo 220 expresa que: "Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen."

**19. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción. Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.**

La Decisión 486 recoge las siguientes excepciones permitidas por el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC: El artículo 215, segundo párrafo, de la Decisión 486, recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 202 inciso b) de la Decisión 486, recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 6, primera oración, del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 223 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 8 del Acuerdo. El artículo 219 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 9 del Acuerdo.

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

**20. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos guiándose básicamente por consideraciones técnicas o funcionales. Se ruega explicar de qué modo se protegen los dibujos y modelos textiles.**

Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador, no serán registrables como diseño industrial, según se establece en el artículo 116 inciso b) de la Decisión 486.

Los diseños textiles son protegidos en virtud de la definición prevista en el artículo 113 de la Decisión 486, que señala: "Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto", en la medida en que se incorpore un aporte arbitrario del diseñador.

**21. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.**

La protección de estos derechos está prevista en el artículo 129 de la Decisión 486, que señala:

"El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta."

**22. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.**

La Decisión 486 no contempla la figura de licencia obligatoria para los diseños industriales.

**23. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a los dibujos y modelos industriales.**

Según el artículo 128 de la Decisión 486: "El registro de un diseño industrial tiene una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro".

F. PATENTES

**24. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de: novedad, invención y aplicación industrial.**

Según el artículo 16 de la Decisión 486, la noción de novedad se define de la siguiente manera.

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida ..."

El artículo 18 de la Decisión 486, establece que: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

La noción de aplicación industrial, está definida en el artículo 19 de la Decisión 486, que indica que: "Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios."

**25. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se otorgan sin ningún tipo de exclusión. En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.**

Las exclusiones a la patentabilidad están especificadas en los artículos 15 y 20 de la Decisión 486.

**26. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad basándose en el *orden público* o la moralidad. En ese caso, les rogamos expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación. Desearíamos también saber si éste se ha aplicado en la práctica.**

La exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 20 inciso a) de la Decisión 486, que señala que no serán patentables: "las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo debe impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación".

No existen experiencias prácticas en Bolivia al respecto.

**27. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están excluidos de la patentabilidad en su legislación. Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente de su legislación así como su formulación.**

Esta exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 20 inciso d) de la Decisión 486, que señala que no serán patentables: los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

**28. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y esencialmente los procesos biológicos están o no excluidos de la patentabilidad en su legislación. En caso afirmativo, les rogamos aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.**

Esta exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 20 inciso c) de la Decisión 486, que señala que no serán patentables "las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos".

**29. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las obtenciones vegetales están protegidos en su legislación. Sírvanse explicar a este respecto los artículos pertinentes de su legislación.**

Los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos se pueden proteger mediante patentes de invención en razón que la Decisión 486 señala que "Los microorganismos serán patentables hasta tanto no se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC."

En el marco de lo establecido por el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que señala: "... los Miembros otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y ésta", Bolivia al adherirse al Acta 78 de la UPOV adoptó un sistema *sui generis* para la protección de las obtenciones de variedades vegetales. Por otro lado, en el ámbito de la Comunidad Andina desde 1993 se cuenta con un Régimen Común sobre Variedades Vegetales aprobado mediante la Decisión 345.

**30. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una invención patentada.**

El artículo 52 de la Decisión 486, señala: "La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos :

- a) cuando en la patente se reivindica un producto:
  - i) fabricar el producto
  - ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para algunos de estos fines; y
- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
  - i) emplear el procedimiento; o
  - ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

**31. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la referencia jurídica.**

Según el artículo 14 de la Decisión 486: "Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

**32. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.**

En virtud del artículo 14 de la Decisión 486, los procedimientos que entrañen novedad, actividad inventiva y aplicación industrial sí son patentables.

Conforme al artículo 52 inciso b) de la Decisión 486, una patente de procedimiento confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar los actos de comercio o de industria ahí especificados respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.

**33. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a material genético o consentimiento previo a su utilización). Si esas condiciones adicionales existen, indíquese la legislación pertinente y describanse las condiciones adicionales detalladamente.**

La Decisión 391 de la Comunidad Andina, que establece un Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos, en su Tercera Disposición Complementaria señala que:

"Las Oficinas Nacionales competentes en materia de Propiedad Intelectual exigirán al solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, cuando tengan certeza o indicios razonables de que los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países Miembros es país de origen."

Con lo establecido en el artículo 26(h) de la Decisión 486, se da cumplimiento a la Tercera Disposición Complementaria de la Decisión 391. Asimismo, con dicho requisito que exige información complementaria, se verifica el país de origen del material genético a partir del cual se han obtenido o desarrollado productos o procesos que sean objeto de la solicitud de patente, lo cual permite además comprobar el cumplimiento de las disposiciones relativas al consentimiento fundamentado previo para el acceso al recurso genético de acuerdo a nuestra normativa nacional sobre acceso a recursos genéticos.

El artículo 29 párrafo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que: "Los miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes." En este contexto, se enmarcan el artículo 26(h) de la Decisión 486 y la Tercera Disposición Complementaria de la Decisión 391.

En consecuencia el requerimiento al solicitante se realiza con el fin de facilitar la información que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa.

**34. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias obligatorias. En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones en las cuales puede concederse una licencia obligatoria. Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.**

La legislación prevé licencias obligatorias en el capítulo VII, Régimen de licencias obligatorias de la Decisión 486, desde el artículo 61 al 69.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Artículo 62.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.

La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Artículo 63.- A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 64.- El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

Artículo 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Artículo 67.- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:



**35. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos en un período de tiempo razonable. En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo razonable"? Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una licencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado interno del Miembro que autoriza ese uso.**

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de las patentes, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Con respecto a la expresión "plazo prudencial", tendrá que determinarse caso por caso por la autoridad competente de acuerdo a las circunstancias pertinentes.

Respecto a la utilización predominantemente para uso interno, el artículo 68 inciso g) estipula entre las condiciones bajo las cuales se concederá una licencia obligatoria que los usos autorizados sean para abastecer principalmente el mercado interno. Esta disposición es concordante con la del artículo 31 inciso f) del Acuerdo sobre los ADPIC.

**36. Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.**

La Decisión 486 no contempla un plazo de protección adicional a los 20 años establecidos en el artículo 50.

**37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.**

---

a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,

c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;

b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirán efectos legales;

c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;

e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;

f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,

g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente capítulo no surtirán efecto legal alguno.

La Decisión 486 no contempla protección adicional en función de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Todas las patentes se conceden dentro de los estándares de protección previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC y la legislación interna.

**38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.**

El artículo 240 de la Decisión 486 prevé que, en los casos en los que se alegue una infracción a una patente de procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

**39. Sírvanse explicar qué consecuencias tiene para el solicitante de una patente el que no presente la información requerida en virtud del párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

No se da curso a la solicitud de la patente, hasta que se adicione la información complementaria requerida.

**40. Se ruega expliquen si en su legislación se disfrutan o no, sin excepciones ni exclusiones, las patentes o, de otro modo, los derechos de patentes. Si se prevén exclusiones o excepciones (que no sean las licencias obligatorias), rogamos describan con detalle cómo se aplican en términos jurídicos y prácticos estas exclusiones. En caso afirmativo, se ruega mencionar la legislación pertinente.**

El artículo 53 de la Decisión 486, establece algunas excepciones, señalando que el titular de la patente no podrá ejercer el derecho respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Por su parte, el artículo 54 de la Decisión 486, establece que:

"La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación."

Finalmente, el artículo 55 de la Decisión 486, menciona que:

"Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación."

**41. Se ruega expliquen cómo se contempla en su legislación la inversión de la carga de la prueba en relación con patentes de procedimientos.**

El artículo 240 de la Decisión 486 prevé que, en los casos en los que se alegue una infracción a una patente de procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE CIRCUITOS INTEGRADOS

**42. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.**

Los esquemas de trazado de circuitos integrados están protegidos conforme a los artículos 36 y 37 del Acuerdo sobre los ADPIC en la Decisión 486 a partir de los artículos 86 al 112.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> TÍTULO IV

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de estos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

CAPÍTULO II

De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

Artículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.

CAPÍTULO III

De los Titulares

Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

CAPÍTULO IV

De la Solicitud de Registro

Artículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
- c) de ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;
- d) de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
- e) una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;
- f) copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro;
- g) los poderes que fuesen necesarios; y,

---

h) el comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión del registro;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;
- e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro; y,
- g) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;
- b) datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y
- d) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

## CAPÍTULO V

### Del Trámite de la Solicitud

Artículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del interesado.

Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente.

## CAPÍTULO VI

### De los Derechos que confiere el Registro

---

Artículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o

b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo País Miembro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

Artículo 99.- La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;

b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o

c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Artículo 100.- El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;

c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

---

Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

## CAPÍTULO VII

### Del Régimen de Licencias

Artículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso de que exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o

b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención.

## CAPÍTULO VIII

### De la Nulidad del Registro

Artículo 108.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

a) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;

b) el registro no cumpliera con los requisitos de protección previstos en el artículo 87;

c) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97; o,

d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el artículo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Artículo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad

**43. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La protección está consagrada en el artículo 99 inciso c) de la Decisión 486 ya que el registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas: comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

**44. Se ruega explicar cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente.**

La legislación establece en el artículo 104 de la Decisión 486 que: "no se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99<sup>7</sup> respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un

---

nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 110.- La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el País Miembro, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.

<sup>7</sup> Artículo 99.- La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;

b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o

c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.



esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual."

**45. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las topografías.**

De acuerdo al artículo 98 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un esquema de trazado de registrado tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

- a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o
- b) la fecha en que se haya prestado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo País Miembro.

**H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA**

**46. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la protección de la información no divulgada. En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.**

Conforme al artículo 263 de la Decisión 486, la protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.<sup>8</sup>

**47. Sírvanse explicar cómo define su legislación el término "información no divulgada".**

El artículo 260 de la Decisión 486, define al secreto empresarial como: cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

---

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

<sup>8</sup> Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción ; o a los métodos o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

**48. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos gubernamentales.**

La legislación vigente de propiedad intelectual no contiene una definición de "datos presentados a gobiernos o a agencias gubernamentales". El artículo 266 de la Decisión 486 establece que, cuando se exija como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, se protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

**I. OBSERVANCIA**

**49. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. En esta acción se puede pedir, entre otras cosas, la cesación del acto infractor y la indemnización por daños y perjuicios. La misma disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.

**50. Sírvanse explicar si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.**

En Bolivia las decisiones administrativas pueden ser revisadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

**51. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen en la presentación de pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.**

Las autoridades judiciales pueden ordenar la exhibición de documentos mantenidos por una de las partes. Son aplicables las disposiciones sobre publicidad y privacidad del procedimiento civil o penal, según corresponda, contenidas en los códigos de la materia.

**52. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un demandado que desista de una infracción.**

La autoridad judicial competente puede ordenar, entre otras cosas, el cese de los actos que constituyen la infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción; la prohibición de la importación o de la exportación de los productos; y la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción (artículo 241 de la Decisión 486).

**53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.**

El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. En esta acción se puede pedir, entre otras cosas, la indemnización por daños y perjuicios. La misma disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.

**54. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.**

El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. En esta acción se puede pedir, entre otras cosas, la indemnización por daños y perjuicios. La misma disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.

**55. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.**

Los jueces pueden ordenar el retiro de los canales comerciales de aquellas mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como la destrucción de las mismas, ello bien como medida provisional decretada por un tribunal o como sanción en una sentencia condenatoria:

En materia de medidas en frontera el órgano competente en materia de propiedad intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.

**56. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un demandado en caso de abuso por parte del demandante.**

La acción por daños y perjuicios también es posible para aquel que haya sido víctima de la temeridad del demandante, en caso de perjuicios provocados por una acción abusiva. El juez podrá solicitar al demandante que caucione suficientemente antes de acordar la ejecución de una medida cautelar (artículo 247 de la Decisión 486). Ello es una facultad del juez el cual para ordenar la ejecución de una medida provisoria solicite al demandante caución o fianza para de tal manera garantizar que no existe temeridad por parte del demandante en la solicitud de la medida.

**57. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La autoridad judicial competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según

corresponda, de los ejemplares producidos con infracción; la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados como embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito (artículo 56 de la Decisión 351).

Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción (artículo 246 de la Decisión 486).

**58. Sírvanse exponer las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras de mercancías falsificadas.**

Cualquier autoridad judicial competente dentro de la jurisdicción nacional puede recibir pedidos de particulares para ordenar a las autoridades de aduanas que se suspenda el despacho a libre circulación de productos que infringen derechos de propiedad intelectual.

**59. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías falsificadas.**

El artículo 250 de la Decisión 486 faculta al titular de un registro de marca que tuviere motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que infringen ese registro, solicitar a la autoridad competente suspender esa operación aduanera.

Determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas incautados por la autoridad competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

**60. Sírvanse indicar qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.**

El artículo 255 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial.

**61. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones de minimis.**

El artículo 256 de la Decisión 486 establece que el régimen de medidas en frontera no es aplicable cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial, que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas.

**62. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Según el artículo 236 del Código Penal, se establecen los delitos contra la industria y el comercio, éste señala: "El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años."

En materia de derecho de autor y delitos informáticos, los artículos 362, 363, 363*bis* y 363*ter* del Código Penal establecen sanciones penales con reclusión de libertad de 3 meses a 2 años y multa de 60 días, así como reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días, respectivamente.

## JAPÓN

### A. DISPOSICIONES GENERALES

**1. Sírvanse explicar cómo se aplican en su país las Decisiones 344, 345, 351, 391 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e indicar si se cumplen directamente o por medio de la legislación nacional.**

Las Decisiones Andinas, 345, 351, 391 y 486, se aplican directamente en virtud a lo dispuesto en el artículo tercero del Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia (Protocolo de Cochabamba de 1996) que señala:

"Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General, serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior."

**2. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la nación más favorecida que habría en la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La Ley 1322 de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y la Decisión 351 (Régimen Común Andino sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos) no establecen ningún tipo de excepción previsto en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

### B. PATENTES

**3. i) Sírvanse describir cómo la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en el caso de ser aplicable, la legislación nacional boliviana definen el concepto de "invención", en función del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que las patentes podrán obtenerse por todas las "invenciones" en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. ¿Por qué razones las materias prescritas en el apartado b) del artículo 15 de la Decisión 486 no se estiman invenciones? ¿Se debe ello a que existen en la naturaleza o porque se relacionan con cosas vivas o material biológico?**

Cabe señalar que en la Decisión 486 no existe una definición del concepto de invención, sin embargo "se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Lo prescrito en el artículo 15(b) de la Decisión 486 no se considera una invención porque no cumple con los requisitos de patentabilidad como lo establece el artículo 14 de dicha Decisión, ya que se trata de productos de la naturaleza y no de invenciones hechas por el hombre. Para que exista invención, es necesario que aquello que ya existe en la naturaleza sea transformado por el hombre.

- ii) **Si una cosa viva, parte de ella o material biológico, cuya existencia no se haya reconocido con anterioridad, ha sido, por primera vez, aislado o purificado artificialmente de su entorno natural (es decir, si ello entraña "intervención humana"), ¿se ha de considerar una invención de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 486? En caso contrario, ¿se estimará, automáticamente, que no es una invención, no obstante la amplitud de la intervención humana que ello implica?**

Un material biológico que no ha sido previamente identificado en la naturaleza y está siendo aislado o purificado artificialmente de su entorno natural, no es considerado un invento en el marco del artículo 15 de la Decisión 486. Sin embargo, en virtud del artículo 14 de la Decisión 486 el procedimiento tecnológico mediante el cual el material ha sido aislado sí es considerado un invento susceptible de patentabilidad. Esto se refiere a que todo procedimiento de separación, aislamiento o purificación que cumpla con los requisitos de patentabilidad podrá ser objeto de una patente de procedimiento.

- iii) **Cuando exista en la naturaleza un tipo especial de sustancia química, que no sea una parte o la totalidad de una cosa viva ni material biológico (como perlas de carbón aisladas del residuo oleoso que se produce por el procedimiento de refinamiento del aceite, cuando los aceites pesados y los aceites livianos se extraen del petróleo crudo), ¿se considerará que esa sustancia constituye una invención, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, si primero se aísla o purifica artificialmente de su entorno?**

Nos limitamos a ratificar lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, y a la respuesta a la pregunta 3 ii) del Gobierno de Bolivia, en sentido de expresar que todo procedimiento de separación, aislamiento o purificación que no sea intrínseco y que cumpla con los requisitos de patentabilidad podrá ser objeto de una patente de procedimiento.

#### **Pregunta de seguimiento**

**Sírvanse indicar si se considera que constituye una invención una sustancia química (que no sea una cosa viva ni un procedimiento), conforme a la descripción que se dio en la anterior pregunta 3 iii) del Japón.**

Una sustancia química existente en la naturaleza no se considera una invención. Tal sustancia sería un producto de la naturaleza o un descubrimiento, pero no una invención producida por el hombre. La simple separación, aislamiento o purificación de sustancias existentes en la naturaleza no hace patentables a las sustancias separadas, aisladas o purificadas, a menos que ellas hubiesen sido transformadas intrínsecamente. Un producto de la naturaleza necesita ser transformado por el hombre para que pueda considerarse como su invención.

Sin perjuicio de lo anterior, todo procedimiento de separación, aislamiento o purificación podrá ser objeto de una patente de procedimiento si cumple las condiciones de patentabilidad.

**4. Sírvanse explicar si las materias que figuran en la lista que aparece a continuación se consideran o no una invención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486 y, en caso de aplicarse, la legislación nacional de Bolivia. Si se juzga que alguna de esas materias no es una invención, sírvanse fundamentar la razón. Sírvanse suponer que las materias mencionadas en las letras a), h), i), l), m), n) y o) no hayan tenido con anterioridad una existencia reconocida y, que por primera vez, hayan sido aisladas o purificadas artificialmente de su entorno natural, y que todas las materias que figuran en la lista cumplen con otros**

**requisitos para obtener la patente, como la novedad (en el sentido que no eran conocidas por el público), entrañan una actividad inventiva y son susceptibles de aplicación industrial.**

- a) Insulina humana aislada o purificada de las células beta del páncreas humano.**

No se considera como invención. Véanse las respuestas a las preguntas 3 ii) y 3 iii).

- b) Un gene que codifica la insulina humana.**

En caso de tratarse de un gen ya existente en el cuerpo humano, es decir, descubierto y aislado del cuerpo humano, no se considera como una invención. En caso de tratarse de un gen creado por el hombre (por ejemplo, por ingeniería genética) y que introducido en el cuerpo humano, o en un medio apropiado, codifica y se expresa en la producción de insulina humana, sí se consideraría como una invención.

- c) Un vector expresión que lleva al mencionado gene.**

En caso de tratarse de un vector de expresión ya existente en el cuerpo humano o en la naturaleza, no se considera como una invención. En caso de tratarse de un vector de expresión creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.

- d) La *Escherichia coli* transformada por el mencionado vector expresión.**

En los casos contenidos en los incisos d), h), i) y j) referidos a microorganismos, Bolivia aplica lo establecido en el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, a través de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En virtud de que sobre este tema se retomarán las discusiones a nivel de la OMC, la referida Decisión Andina establece este compromiso en una Disposición Transitoria.

Un microorganismo modificado por el hombre sí se considera como invención. El transformado mediante el referido vector de expresión (o por cualquier otro método) se considera como una invención, pues no se trata del *Escherichia coli* existente en la naturaleza.

- e) Un procedimiento para producir insulina humana mediante el cultivo de la *Escherichia coli*.**

Sí se considera como invención.

- f) Insulina humana recombinante obtenida por el referido procedimiento.**

Sí se considera como invención.

- g) Un mutante obtenido por la modificación genética de la insulina humana recombinante.**

Sí se considera como invención.

- h) Levadura de panadero aislada o purificada artificialmente a partir de su entorno natural.**

Véase la respuesta al inciso d). Una levadura aislada o purificada de su medio natural no se considera como invención. Tal levadura es un producto de la naturaleza, no una invención del hombre. El simple aislamiento o purificación de una materia preexistente en la naturaleza no la hace patentable, aun cuando no fuese conocida anteriormente. Un producto de la naturaleza necesita ser transformado por el hombre para que pueda considerarse como invención.

**i) Un microorganismo aislado o purificado artificialmente a partir de su entorno natural que produce el antibiótico micina X.**

Véase la respuesta al inciso d). Un microorganismo aislado o purificado de su medio natural no se considera como invención. Tal microorganismo es un producto de la naturaleza, no una invención del hombre. El simple aislamiento o purificación de una materia preexistente en la naturaleza no la hace patentable, aun cuando no fuese conocida anteriormente. El método de aislamiento no es relevante para estos efectos, de modo que aunque el método de aislamiento fuese novedoso, ello no haría patentable a la materia aislada por ese método.

Un microorganismo que es un producto de la naturaleza necesita ser transformado por el hombre para que pueda considerarse como una invención. En caso que el microorganismo no se hubiera modificado por el hombre, se trataría de un producto de la naturaleza y no se consideraría como invención.

**j) El antibiótico micina X producido por el citado microorganismo.**

Véase la respuesta al inciso d). El antibiótico producido por el microorganismo será patentable dependiendo de que sea una invención. En caso que el microorganismo referido ya producía naturalmente el antibiótico antes que ese microorganismo fuese aislado y purificado, el antibiótico se consideraría un producto de la naturaleza y no sería una invención.

En cambio, si por efecto de la intervención del hombre, a través del aislamiento o purificación del microorganismo, éste produce algo (un antibiótico) que no producía normalmente en su estado natural, podría considerarse que el antibiótico es resultado de una intervención del hombre sobre la naturaleza. En este caso, ese antibiótico (pero no el microorganismo) podría considerarse como una invención, pues es un resultado del hombre en la naturaleza.

**k) Un mutante obtenido por la mutación artificial de dicho microorganismo con rayos UV.**

Sí se considera como invención.

**l) Un hibridoma que produce un anticuerpo que reconoce al antígeno A.**

Sí se considera como invención.

**m) Hepatocito humano Y.**

En caso de tratarse de un hepatocito ya existente en el cuerpo humano (o en la naturaleza), no se considera como una invención. En caso de tratarse de un hepatocito creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.



**n) Tejido hepático humano Z, y**

Respecto al tejido hepático humano, si se trata de un tejido hepático ya existente en el cuerpo humano (es decir en la naturaleza) no se considera como una invención. Si se trata de un tejido hepático artificial, creado por el hombre, sí podría en principio, considerarse como una invención.

**o) Perlas de carbón aisladas del residuo oleoso que se produce por el procedimiento de refinamiento del aceite, cuando los aceites pesados y los aceites livianos se extraen del petróleo crudo.**

No se considera como invención. Una sustancia existente en la naturaleza no se considera como invención. Tal sustancia sería un producto de la naturaleza o un descubrimiento, pero no una invención producida por el hombre. La simple separación, aislamiento o purificación de sustancias existentes en la naturaleza no hace patentables a las sustancias separadas, aisladas o purificadas, a menos que ellas hubiesen sido transformadas intrínsecamente.

**5. Sírvanse explicar la relación que existe entre el párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC y los apartados h) e i) del artículo 26 de la Decisión 486 que obligan a los solicitantes de patentes a presentar un ejemplar del contrato para tener acceso a recursos genéticos y un ejemplar de los documentos que certifican la autorización para utilizar el conocimiento tradicional. ¿Considera su país que la referida obligación del solicitante constituye un requisito de habilitación que está claramente estipulado en el párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, o como un requisito adicional que no está estipulado en dicho artículo?**

La Decisión 391 de la Comunidad Andina que establece un Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos en su Tercera Disposición Complementaria señala que:

"Las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad Intelectual exigirán al solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, cuando tengan certeza o indicios razonables de que los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países Miembros es país de origen."

Con lo establecido en el artículo 26(h) de la Decisión 486 se da cumplimiento a la Tercera Disposición Complementaria de la Decisión 391. Asimismo, con dicho requisito que exige información complementaria, se verifica el país de origen del material genético a partir del cual se han obtenido o desarrollado productos o procesos que sean objeto de la solicitud de patente.

El párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que: "Los miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes." En este contexto, se enmarcan el artículo 26(h) de la Decisión 486 y la Tercera Disposición Complementaria de la Decisión 391.

En consecuencia el requerimiento al solicitante se realiza con el fin de que éste facilite la información que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa.

Asimismo, la Decisión 391 en su artículo 35 establece que:

"Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos o sus productos derivados con un componente intangible (conocimiento tradicional asociado), el contrato de acceso incorporará un Anexo como parte integrante del mismo, donde se prevea la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de dicho componente y se refleje el consentimiento de los poseedores de los conocimientos tradicionales. El Anexo es suscrito entre el proveedor del componente intangible y el solicitante o usuario del recurso genético."

Por lo que con lo establecido en el artículo 26(i) de la Decisión 486 damos cumplimiento al artículo 35 de la Decisión 391 y el párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC como un requerimiento de información complementaria.

### **Pregunta de seguimiento**

**Con respecto a la anterior pregunta 5 del Japón, sírvanse explicar qué relación ven ustedes entre, por una parte, un ejemplar del contrato para tener acceso a recursos genéticos y un ejemplar de los documentos que certifican la autorización para utilizar el conocimiento tradicional y, por otra, la "información relativa a sus solicitudes y a las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero" que se estipula en el párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, siendo así que se trata de documentos que rara vez se exigen para las solicitudes y concesiones en el extranjero.**

No existe relación entre el párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esas disposiciones tratan materias distintas.

El párrafo 2 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a la posibilidad que tienen los Miembros de exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a solicitudes o concesiones de patentes correspondientes en el extranjero. La finalidad de esa disposición es facilitar la verificación de las condiciones de patentabilidad de la invención. Esta facultad está prevista en los artículos 46 y 47 de la Decisión 486.

Las disposiciones del artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 no tienen relación con la verificación de las condiciones de patentabilidad de la invención. Esas disposiciones simplemente requieren la verificación de la legalidad del acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales que sirvieron de base para desarrollar una invención. Ellas tienen la intención de coadyuvar al respeto y cumplimiento de disposiciones legales nacionales, comunitarias andinas e internacionales (por ejemplo: el Convenio sobre la Diversidad Biológica) relativas al acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. El acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales atañe a la propiedad industrial en la medida en que el recurso genético o conocimiento tradicional diera lugar a un desarrollo tecnológico patentable.

En previsión de tales casos, las normas de la Decisión 484, concordantes en lo pertinente con lo dispuesto en la Decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos, tienden a impedir que una invención que se hubiese generado a partir de un recurso genético o conocimiento tradicional ilícitamente obtenido sea objeto de una patente de invención. Las patentes de invención son concedidas por el Estado como un estímulo o aliciente para la realización de una actividad lícita, cual es el desarrollo de nuevas tecnologías. Si tal actividad se realizara con base en materias o informaciones obtenidas ilícitamente (acceso ilegal a un recurso genético o a un conocimiento tradicional) el Estado tiene la potestad de no hacer extensiva a ella el beneficio de una patente de invención. Ello se hace en aras de una coherencia dentro de la política estatal de protección de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, que se manifiesta simultáneamente en diferentes planos.

Las disposiciones del artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 establecen requisitos de legalidad que se vinculan al trámite de concesión de una patente. Al igual que otros requisitos exigibles para la concesión de una patente, ellos no están tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC, quedando librados a la legislación interna de los Miembros de la OMC.

**6. Sírvanse explicar los fundamentos del artículo 21 de la Decisión 486 que prevé que un producto ya patentado y comprendido en el estado actual de la técnica no debe ser objeto de una patente nueva por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al contemplado en la patente inicial. Sírvanse explicar también en qué forma el artículo 21 de la Decisión 486 cumple con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. ¿La falta de novedad, es el fundamento del artículo 21? En la afirmativa, ¿se puede estimar que constituye una nueva invención una solicitud de patente cuyo objetivo consista en un "uso" nuevo (y no en el "producto" como tal)? ¿Qué otros tipos de solicitudes de patentes, para usos nuevos, pueden ser patentables?**

El artículo 21 de la Decisión 486 estipula que un producto o procedimiento patentado y comprendido en el estado de la técnica, no puede ser patentado nuevamente por el simple hecho de atribuirse a ese producto o procedimiento un uso distinto al original.

#### **Pregunta de seguimiento**

**Con respecto a la anterior pregunta 6 del Japón, sírvanse explicar cómo puede ser patentado de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 486 un compuesto químico conocido cuyo uso terapéutico no se conocía. ¿Qué ocurre en el caso de un compuesto químico conocido cuyas propiedades insecticidas no se conocían?**

La Decisión 486 en su artículo 21 establece que un producto o procedimiento patentado y comprendido en el estado de la técnica, no puede ser patentado nuevamente por el simple hecho de atribuirse a ese producto o procedimiento un uso distinto al original. Esta disposición aclara que no puede patentarse nuevamente un invento (producto o procedimiento) que no cumple con la condición de novedad requerida por el derecho de patentes. El requisito de novedad no podría obviarse aduciendo que el producto o procedimiento en cuestión es objeto de un nuevo uso.

Si un producto o procedimiento ya conocido fuese susceptible de un uso o aplicación distinto de los conocidos y tal uso cumpliera con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad, inventividad y aplicación industrial), el uso constituiría una solución técnica patentable. En consecuencia en tal patente solo podrá reivindicarse el nuevo uso, mas no el producto mismo, pues éste no cumple con la condición de novedad.

#### **SUIZA**

##### **A. PATENTES**

**1. Sírvanse indicar si, en lo que se refiere a las patentes, los artículos correspondientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina -el Régimen Común de Propiedad Industrial- son aplicables directamente en su ordenamiento jurídico interno o si han aprobado disposiciones legales internas de aplicación. En este último caso, sírvanse señalar de qué disposiciones se trata.**

La norma preferente para el campo de las patentes es la establecida en la Decisión 486 (Régimen Común en Propiedad Industrial). Ésta no requiere para su aplicabilidad de una legislación nacional. Se encuentra vigente desde el 1° de diciembre de 2000.

Igualmente, es importante destacar que las Decisiones Andinas se aplican directamente en virtud a lo dispuesto en el artículo tercero del Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia (Protocolo de Cochabamba de 1996) que señala:

"Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General, serán directamente aplicable en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior."

B. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

**2. Por lo que respecta a la cuestión del uso comercial desleal de datos comunicados por un solicitante a las autoridades competentes en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura, sírvanse indicar si, y de qué modo, su legislación impide que las autoridades competentes o un segundo solicitante se funden en los datos originales del primer solicitante o se remitan a ellos en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un segundo producto equivalente al producto del primer solicitante. ¿Establece su legislación algún plazo antes de cuyo vencimiento las autoridades o un segundo solicitante no pueden fundarse en esos datos ni remitirse a ellos?**

Para otorgar una autorización de venta de un medicamento la autoridad sanitaria no requiere contar con documentos donde se especifique el proceso o protocolo de manufactura, de tal manera que al no haber presentado el solicitante datos de pruebas que entrañen un esfuerzo considerable no hay riesgo de divulgación de la información proporcionada que pueda servir a cualquier solicitante posterior ni a la misma autoridad. Simplemente se requiere una descripción de los componentes activos e inactivos que hacen parte de la fórmula. El tiempo de vigencia de estos datos permanece en la medida de vigencia del registro sanitario.

En el capítulo de información confidencial de la Decisión 486 se establece en el artículo 266 que:

"Los países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger el público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal."

Las autoridades sanitarias que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos son entidades del sector público, sin fines de lucro, que desarrollan una función encomendada expresamente por la Ley. En este sentido, queda entendido que el uso que hacen esas autoridades de los datos que tienen a su disposición, cualquiera que fuese su origen, al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal de autorizar la comercialización de esos productos, no constituye un uso comercial ni un uso desleal. Tal uso es un uso estatal no comercial, y por definición es un uso lícito, pues lo requieren las leyes que rigen el mandato y funcionamiento de esas autoridades. Además, el uso de los datos al interior de esas instituciones no implica divulgación

alguna a terceros, pues éstos en ningún momento podrán acceder a los datos referidos, en virtud a lo establecido en el artículo 265 de la Decisión 486.

## ESTADOS UNIDOS

### A. DISPOSICIONES GENERALES

**1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los otros Miembros de la OMC.**

La Decisión 486 de la Comunidad Andina "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", cubre las siguientes formas de propiedad intelectual:

- patentes de invención
- los modelos de utilidad
- los esquemas de trazado de circuitos integrados
- los diseños industriales
- las marcas
- lemas comerciales
- las marcas colectivas
- las marcas de certificación
- nombres comerciales
- rótulos o enseñas
- indicaciones geográficas
- marcas notorias
- secretos empresariales
- medidas en frontera
- competencia desleal
- acciones por infracción de derechos.

Los artículos 1 y 2 de la referida Decisión establecen con respecto a la protección de la propiedad intelectual, los principios de trato nacional y del trato de la nación más favorecida, respectivamente.

En relación con el principio de trato nacional, el artículo 1 señala que:

"Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro."

En cuanto al principio del trato de la nación más favorecida, el artículo 2 de la Decisión 486 indica que:

"Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)."

Por otra parte, la Decisión 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos - señala en su artículo 2 que cada País Miembro concederá a los nacionales de otro país, una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC - ADPIC, quedó incorporado en la legislación interna en 1995 como parte de la ratificación de Bolivia de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, por lo que los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida, allí consagrados, forman parte de nuestra legislación.

Bolivia es miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales bajo el acta de 1978, situación que consolidó mediante la ratificación de UPOV con la Ley N° 1968 del 24 de marzo de 1999.

El artículo 3 de dicho acuerdo (trato nacional; reciprocidad) indica:

"Las personas naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno de los Estados de la Unión gozarán en los otros Estados de la Unión, en lo que al reconocimiento y a la protección del derecho de obtentor se refiere, del trato que las leyes respectivas de dichos Estados concede o conceda a sus nacionales, sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio y a condición de cumplir las condiciones formalidades impuestas a los nacionales.

Los nacionales de los Estados de la Unión que no tengan domicilio o residencia en uno de dichos Estados, gozarán igualmente de los mismos derechos, a condición de satisfacer las obligaciones que puedan serles impuestas con vistas a permitir el examen de las variedades que hayan obtenido, así como el control de su multiplicación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), todo Estado de la Unión que aplique el presente Convenio a un género o una especie determinada tendrá la facultad de limitar el beneficio de la protección a los nacionales del Estado de la Unión que aplique el Convenio a ese género o especie y a las personas naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno de dichos Estados."

Adicionalmente en la actual normativa vigente sobre variedades vegetales, la Decisión 345 de la Comunidad Andina estipula reciprocidad en el artículo 18, relativo al derecho de prioridad.

"El titular de una solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor presentada en un país que conceda trato recíproco al País Miembro donde se solicite el registro de la variedad, gozará de un derecho de prioridad por el término de 12 meses, para requerir la protección de la misma variedad ante cualquiera de los demás países Miembros. Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicar, en la solicitud posterior, la prioridad de la primera solicitud. La autoridad nacional competente del País Miembro, ante la que se haya presentado la solicitud posterior podrá exigir del solicitante que, en un plazo no inferior de tres meses contados a partir de la fecha de su presentación, proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud la cual deberá estar certificada como conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma."

En la reglamentación interna boliviana, la Resolución Secretarial 064/96 del 9 de agosto de 1996 estipula en el inciso p) del artículo 15 que: "Los obtentores radicados en el extranjero gozan de iguales derechos que los obtentores radicados en el país."

Es claro que en toda la base legal que sustenta la UPOV en Bolivia, se reconoce a extranjeros o partes un trato no menos favorable que el otorgado, en circunstancias similares, a los nacionales o residentes dentro del territorio nacional. Esta aseveración es clara cuando revisamos las estadísticas de Protección, puesto que en Bolivia mas del 60 por ciento de las variedades protegidas al momento son originadas en el extranjero.

#### B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

**2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derecho de autor de Bolivia cumple y en qué forma lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971), excepto el artículo 6bis, ya que ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto del referido artículo en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El Derecho de Autor en Bolivia, cumple con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC y lo dispuesto por el artículo 6bis del Convenio de Berna.

Bolivia está adherida al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas desde 1982. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Derecho de Autor, contiene normas que reflejan y cumplen íntegramente las normas del Convenio de Berna.

Respecto a los derechos morales previstos en el artículo 6bis del Convenio de Berna, ellos están reconocidos en los artículos 11 y 12 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.

**3. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor de Bolivia protege los programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos tal como lo exige el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Tanto en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, como en el Decreto Supremo 24582 de 25 de abril de 1997, que aprueba el Reglamento del soporte lógico o software, los programas de ordenador y las bases de datos, están protegidos como obras literarias, en concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas. Sírvanse citar la correspondiente disposición de la legislación sobre derecho de autor de Bolivia.**

El Derecho de arrendamiento para programas de ordenador, está normado en el artículo 5 del Decreto Supremo 24582 que aprueba el Reglamento del soporte lógico o software, que dispone que solamente los titulares de los derechos patrimoniales en soportes lógicos pueden autorizar o prohibir toda forma de explotación de los mismos en particular, entre otros, el arrendamiento.

Las obras cinematográficas, gozan del derecho establecido en el artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.

**5. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que se prevén en la legislación sobre derecho de autor de Bolivia para una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado y citar la disposición jurídica pertinente.**

En los artículos 18 y 19 de la ley 1322 de Derecho de Autor, se dispone que la duración de protección concedida por la ley sobre las obras colectivas, audiovisuales y fotográficas, los fonogramas, los programas de radiodifusión y los programas de ordenador o computación, durarán 50 años a partir de su publicación, exhibición, fijación transmisión y utilización, según corresponda, o si no hubieran sido publicados, desde su creación.

**6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de Bolivia a los artistas intérpretes o ejecutantes y el plazo de la protección.**

En el artículo 53 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, referido a los Derechos de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, se dispone que los mismos tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones, y que en consecuencia nadie podrá, sin autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos. En el mismo artículo se dispone que los derechos reconocidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes tendrán una duración de 50 años, contados desde el 1° de enero del año siguiente al de su publicación, de la fijación o al de la interpretación o ejecución si no se hubiera realizado dicha publicación.

El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación. A su fallecimiento y durante el plazo de los 20 años siguientes, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.

En lo que se refiere a la obras de arte aplicadas en el artículo 50 de la Ley 1322 de Derecho de Autor se dispone que los derechos a favor del autor para una obra artística, gráfica, plástica o un manuscrito, es irrenunciable, inalienable y durará por todos el plazo de protección de los derechos patrimoniales sobre la obra a favor del autor, sus herederos y legatarios. Sin embargo en el artículo 51 de la Ley 1322, se aclara que la disposición antes citada, no será aplicada a obras de arquitectura ni a obras de arte aplicada.

**7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus fonogramas. Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de Bolivia da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.**

El artículo 54 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, en el capítulo de los Productores de Fonogramas, dispone que el productor fonográfico tiene respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación al público, inclusive la distribución por cable, emisión por satélite o cualquier otro medio de comunicación.



En los artículos 18 y 19 de la Ley 1322 de Derecho de Autor, se dispone que la duración de la protección concedida por ésta será por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, a favor de sus herederos, legatarios y cesionarios. Los plazos se computarán desde el día 1° de enero del año siguiente al de la muerte o al de la fijación o creación de la obra.

**8. Sírvanse proporcionar un resumen y un texto actualizados de todos los proyectos recientes de reformas jurídicas de los derechos de autor, así como de la legislación penal en trámite que puedan afectar al derecho de autor.**

Actualmente está en proceso de discusión en el Poder Legislativo un Anteproyecto de Código de Propiedad Intelectual. En este instrumento jurídico, se incorporan las normas internacionales y comunitarias vigentes, implementando sus previsiones en materia de derecho de autor. Se entrega en soporte informático como Anexo a este documento, la parte pertinente del Anteproyecto, que será susceptible de aprobación por instancia legislativa.

En este momento no existe ninguna legislación penal pendiente de aprobación que pueda tener efecto sobre derecho de autor, toda vez que recientemente se aprobó el nuevo Código de Procedimiento Penal.

**9. Sírvanse describir cómo la legislación boliviana establece una protección expresa para las obras, las representaciones o ejecuciones y las grabaciones sonoras preexistentes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 y los párrafos 5 y 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si esa protección no se concede expresamente en el marco de las leyes vigentes, sírvanse explicar si el Acuerdo sobre los ADPIC rige en forma automática en Bolivia.**

La Ley 1322 de Derecho de Autor, en lo que se refiere a la protección de obras preexistentes de ejecutantes y fonogramas da estricto cumplimiento al Convenio de Berna, incluyendo lo dispuesto en el artículo 6*bis*, referido a los derechos morales.

Los artículos 18 y 19 de Ley de Derecho de Autor disponen una protección de 50 años después de la muerte del autor a favor de sus herederos, legatarios o cesionarios. El plazo se computará desde el día 1° de enero del año siguiente al de la muerte o al de la publicación, exhibición, fijación, transmisión, utilización o creación, según proceda.

El artículo 54 de la Ley 1322 dispone que el productor fonográfico, tiene respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, alquiler y su comunicación al público, inclusive la distribución por cable, emisión por satélite o cualquier otro medio de utilización.

A su vez en el artículo 57 de la Ley 1322, se dispone que los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los siguientes actos.

- La retransmisión de sus emisiones.
- La fijación de sus emisiones de radio difusión.
- La reproducción de una fijación de sus emisiones.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1322, pertenecen al Patrimonio Nacional como obras preexistentes, entre otras:

- las obras cuyos autores hayan renunciado expresamente a sus derechos;
- las obras de autores fallecidos sin sucesores ni causahabientes;

- las obras cuyos plazos de protección fijados por los artículos 18 y 19 se hayan agotado (se refiere al término de duración de 50 años).

**10. Si bien la Ley de Derecho de Autor de 1992 protege los "programas de ordenador", no parece protegerlos como "obras literarias". En un decreto presidencial, dictado en 1997, figura una protección especial para programas de ordenador. Sírvanse explicar, en detalle, de qué modo protege la legislación boliviana los programas de ordenador como "obras literarias" de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

En el artículo 6, inciso 1), de la Ley de Derecho de Autor, se especifica que están protegidos los programas de ordenador o computación (soporte lógico o software) bajo reglamentación específica.

Posteriormente a la Ley, se dictó el Decreto Supremo 24582 de 25 de abril de 1997, aprobando el Reglamento del Soporte Lógico o Software, el cual en su artículo 1 dispone expresamente que los programas de ordenador y las bases de datos serán protegidos como obras literarias. Asimismo, la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, establece en su artículo 23 que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, sea en forma de Código Fuente o Código Objetivo.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

**11. Sírvanse describir las materias comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio de conformidad con la respectiva legislación boliviana.**

De acuerdo al Título IV de las marcas, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se señala que podrá constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. También especifica que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

**12. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Bolivia para registrar una marca de fábrica o de comercio, citar las disposiciones pertinentes de la ley y describir los derechos que puede ejercer el titular de una marca registrada de fábrica o de comercio.**

El procedimiento para el registro de una marca está previsto en el capítulo II de la Decisión 486, en los artículos 138 a 150.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6*quinquies* del Convenio de París.

---

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) la indicación que se solicita el registro de una marca;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

Artículo 142.- Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6<sup>quinquies</sup> del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

**13. Sírvanse indicar la duración y los plazos de la protección que la legislación sobre marcas de fábrica y de comercio de Bolivia prevé para una marca de fábrica o de comercio.**

Conforme al artículo 152 de la Decisión 486, el término de protección de una marca registrada es de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión, pudiendo ser renovable por períodos sucesivos de 10 años indefinidamente.

**14. Sírvanse explicar cómo la legislación boliviana establece normas para proteger las marcas notoriamente conocidas de bienes que no sean similares, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.**

La Decisión 486, prevé una protección expresa en el Título XIII para los signos distintivos notoriamente conocidos conforme a la previsión del párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta norma amplía el principio de especialidad y de registro, ya que por una parte no se niega la condición de notorio por el hecho de que no esté registrado, y el que posea un signo notorio puede oponerse a productos o servicios de clases diferentes de acuerdo a la provisión expresada en el

---

Artículo 146.- Dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;

b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente;

c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

artículo 230 inciso b): "las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica".

Asimismo, en el caso de signos distintivos notoriamente conocidos inscritos indebidamente como nombre de dominio, a pedido del titular o legítimo poseedor de este signo, la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio (artículo 223).

A su vez constituye causal de irregistrabilidad conforme al artículo 136 h), aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando "constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio o de su valor comercial o publicitario".

**15. Sírvanse explicar si la legislación boliviana faculta para registrar términos genéricos, pertenecientes a los idiomas español e inglés, y citar todas las leyes o reglamentos pertinentes.**

Son causales de irregistrabilidad conforme al artículo 135 de la Decisión 486 inciso f) los signos genéricos. La norma señala: "no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate". En la interpretación de este artículo, si un signo de lengua inglesa tiene capacidad distintiva suficiente, es susceptible de registro.

**D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**16. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación boliviana dispone el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas.**

El artículo 201 de la Decisión 486, en el Título XII de las Indicaciones Geográficas señala: "Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado que se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

Hasta la fecha en Bolivia no existen Indicaciones Geográficas Protegidas.

**17. Sírvanse describir, en detalle, la forma en qué se aplica el nivel superior de protección requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos.**

La normativa andina ha incorporado esta protección especial para vinos y bebidas espirituosas en los artículos 215 a 220 de la Decisión 486.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Artículo 215.- Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

**18. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los dibujos y modelos industriales, citar las disposiciones de la legislación boliviana y describir la naturaleza de la protección acordada.**

El procedimiento que debe seguirse para la obtención de un diseño industrial está establecido en los artículos 117 a 127 del Título V, capítulo I de la Decisión 486.

En cuanto a la naturaleza de la protección descrita en el artículo 113 de la Decisión 486, se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o materia, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

**19. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los dibujos y modelos textiles, y citar las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.**

Es el mismo procedimiento para los diseños en general, ya que por la naturaleza de los textiles, éstos caben en la protección de este sistema de propiedad intelectual, en la medida en que se incorpore un aporte arbitrario del diseñador.

F. PATENTES

**20. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que la legislación de patentes de Bolivia aplica el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicar las excepciones previstas e incluir detalles**

---

designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 216.- La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 218.- Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.

**sobre la protección de los microorganismos y los procedimientos no biológicos y microbiológicos, y las obtenciones vegetales. Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

El artículo 20 de la Decisión 486 contempla excepciones de patentabilidad previstas en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>11</sup>

Con respecto a los microorganismos, éstos son patentables en virtud de la disposición transitoria segunda de la Decisión 486 que señala: "Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC."

En el marco de lo establecido por el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que señala: "... los Miembros otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y ésta", Bolivia al adherirse al Acta 78 de la UPOV adoptó un sistema *sui generis* para la protección de las obtenciones de variedades vegetales. Por otro lado, en el ámbito de la Comunidad Andina desde 1993 se cuenta con un Régimen Común sobre Variedades Vegetales aprobado mediante la Decisión 345.

La normativa en vigencia sobre Protección de Obtentores Vegetales, es la Resolución Secretarial 064/96 del 9 de agosto de 1996, que estipula en el inciso b) del artículo 15, los derechos conferidos:

"b) La persona natural o jurídica que haya obtenido, creado una nueva variedad, puede solicitar un "Título de Propiedad", que confiere a su poseedor el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, lleven a cabo los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- 1) Producción, reproducción, multiplicación o propagación.
- 2) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación.
- 3) Ofrecer en venta.
- 4) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.
- 5) Exportación.
- 6) Importación.
- 7) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los numerales precedentes.

---

<sup>11</sup> El Artículo 20 de la Decisión 486, señala que: "No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales."

- 8) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas, como material de multiplicación, con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas.
- 9) La realización de los actos indicados en los numerales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenida por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el título hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación."

Los requisitos de una variedad para poder protegerse, están establecidos en el inciso g):

"g) Además de los requisitos anteriores, debe cumplir con las siguientes características:

- 1) Ser nueva: una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La calidad de nueva se pierde cuando:

- a) La explotación haya comenzado por lo menos una año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un título de propiedad o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de Bolivia o de cualquier país miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena.
- b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud del otorgamiento de un título de propiedad o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de Bolivia o de cualquier país miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena.
- c) La calidad de nueva no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos cuando tales actos:
  1. Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su causahabiente.
  2. Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando ésta no hubiera sido entregada físicamente a un tercero.
  3. Sean parte de un acuerdo conforme el cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación.
  4. Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad.
  5. Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los literales 3) y 4) del presente inciso.
  6. Se realicen bajo cualquier otra forma lícita.



- 2) Ser distinta: se considera distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida a la fecha de presentación de la solicitud, para el otorgamiento de un título de propiedad o de la prioridad reivindicada.

La presentación de una solicitud para el otorgamiento de un título de propiedad o la inscripción de un Registro Oficial de cultivos, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del título de propiedad, o la inscripción de la variedad según el caso.

- 3) Ser homogénea: una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres esenciales, de acuerdo con los sistemas de reproducción o multiplicación.
- 4) Ser estable: en sus caracteres esenciales, es decir que al final de cada ciclo de multiplicación, mantenga las características descritas por su obtentor."

La duración de la protección se determina en el inciso h:

- "h) El término de duración del 'Título de Propiedad', será de 25 años para el caso de las vides y árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento."

**21. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con arreglo a la legislación de patentes de Bolivia y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

La patente tendrá un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro, a favor del titular.

El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, que servirán para interpretarlas.

Por otra parte, en virtud del artículo 52 de la Decisión 486, la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) cuando en la patente se reivindica un producto:
- i) fabricar el producto;
  - ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo para alguno de esos fines; y
- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
- i) emplear el procedimiento; o
  - ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

**22. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación de Bolivia que permitan el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y describir, en detalle, las condiciones en que ese uso pueda ocurrir.**

La no autorización de uso por parte del titular o licencia obligatoria, está regulada en el capítulo VII, del régimen de licencias obligatorias de la Decisión 486, en los artículos 61 a 69.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Artículo 61. Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Artículo 62. La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.

La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Artículo 63. A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 64. El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

Artículo 65. Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 66. De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Artículo 67. La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

**23. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de Bolivia? Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de protección y citar las normas pertinentes de la ley.**

El término de protección de una patente desde la presentación de la solicitud es de 20 años, según se señala en el artículo 50 de la Decisión 486.

No existe ninguna previsión para extender el término de protección en la legislación.

**G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

**24. Sírvanse describir, en detalle, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados prevista en la legislación boliviana, incluido el plazo de protección, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

La protección para los esquemas de trazado de circuitos integrados está prevista en los artículos 86 a 112 del Título IV de la Decisión 486.<sup>13</sup>

---

la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,

no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 68. En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;

b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirán efectos legales;

c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;

e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme a los artículos 65 y 66;

f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,

g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente capítulo no surtirán efecto legal alguno.

<sup>13</sup> CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de estos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

CAPÍTULO II

De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

---

Artículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.

### CAPÍTULO III

#### De los Titulares

Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

### CAPÍTULO IV

#### De la Solicitud de Registro

Artículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
- c) de ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;
- d) de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
- e) una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;
- f) copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro;
- g) los poderes que fuesen necesarios; y,
- h) el comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión del registro;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;
- e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro; y,
- g) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;

b) datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

c) una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y

d) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

## CAPÍTULO V

### Del Trámite de la Solicitud

Artículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del interesado.

Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente.

## CAPÍTULO VI

### De los Derechos que confiere el Registro

Artículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o

b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo país Miembro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

Artículo 99.- La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;

---

b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o

c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Artículo 100.- El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;

c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

## CAPÍTULO VII

### Del Régimen de Licencias

Artículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso de que exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la

oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o

b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención.

#### CAPÍTULO VIII

##### De la Nulidad del Registro

Artículo 108.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

a) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;

b) el registro no cumpliera con los requisitos de protección previstos en el artículo 87;

c) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97; o,

d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el artículo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Artículo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 110.- La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el país Miembro, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un país Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por dos meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

**25. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación de Bolivia establece la protección de la información no divulgada como lo exige el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

La protección de los secretos industriales, está contenida en el Título XVI, capítulo II desde los artículos 260 al 266 de la Decisión 486:

"Artículo 260. Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercer, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
- b) tenga un valor comercial por ser secreta ; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios".

"Artículo 261. A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad."

"Artículo 262. Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) explotar, sin su autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios lícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;



d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos con el inciso c);

e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquier de estos actos."

"Artículo 263. La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260."

"Artículo 264. Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quién le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia."

"Artículo 265. Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado."

"Artículo 266. Los países miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger el público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal."

**26. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación boliviana protege los datos de prueba relativos a productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al Gobierno a fin de aprobar la comercialización de esos productos en Bolivia y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

La protección está prevista en el artículo 266 de la Decisión 486, que señala: "...que cuando se exija como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además esos datos se protegerán contra toda divulgación excepto cuando sea

necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal."

La autoridad sanitaria para otorgar una autorización de venta de un medicamento no requiere contar con documentos donde se especifique el proceso o protocolo de manufactura, de tal manera que al no haber presentado el solicitante datos de pruebas que entrañen un esfuerzo considerable no existe riesgo de divulgación de la información proporcionada que pueda servir a cualquier solicitante posterior ni a la misma autoridad. Simplemente se requiere una descripción de los componentes activos e inactivos que hacen parte de la fórmula.

Las autoridades sanitarias que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos son entidades del sector público, sin fines de lucro, que desarrollan una función encomendada expresamente por la Ley. En este sentido, queda entendido que el uso que hacen esas autoridades de los datos que tienen a su disposición, cualquiera que fuese su origen, al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal de autorizar la comercialización de esos productos, no constituye un uso comercial ni un uso desleal. Tal uso es un uso estatal no comercial, y por definición es un uso lícito, pues lo requieren las leyes que rigen el mandato y funcionamiento de esas autoridades. Además, el uso de los datos al interior de esas instituciones no implica divulgación alguna a terceros, pues éstos en ningún momento podrán acceder a los datos referidos, en virtud a lo establecido en el artículo 265 de la Decisión 486.

**27. ¿Se faculta a solicitantes posteriores, que tratan de aprobar la comercialización de sus propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con anterioridad, para depender de datos presentados por el solicitante anterior? En caso afirmativo, qué plazo de exclusividad se otorga al solicitante anterior sin que se faculte a los terceros para depender de sus datos.**

Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímico previamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente. La autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y posteriores, debiendo tratar a todos por igual conforme a la ley.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 266 de la Decisión 486, la autoridad que autoriza la comercialización no permitirá a terceros acceder a los datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración hubiese supuesto un esfuerzo considerable, y que se hubiese suministrado por otra persona (salvo las excepciones previstas en el mismo artículo 266, que corresponde al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC). Esta protección tiene duración indeterminada, y se mantendrá mientras subsistan las condiciones requeridas para ello.

Sin embargo, las autoridades que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos desarrollan una función encomendada expresamente por la ley. En este sentido queda entendido que la utilización de los datos por esas autoridades al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal, cualquiera sea el origen de esos datos, no implica una divulgación de los mismos en la medida en que no se permite a terceros acceder a ellos, salvo en los casos de excepción indicados en el artículo 266 de la Decisión 486.

En este sentido, si la autoridad ya hubiese autorizado la comercialización de un producto anterior, y otra persona solicitara autorización para un producto posterior idéntico, y esta persona cumpliera con los requisitos de legislación pertinente, la autoridad estará obligada a autorizar igualmente ese producto posterior. Para determinar si ese producto posterior cumple con los requisitos de la legislación, la autoridad podrá internamente hacer uso de cualquier información a su disposición.

Cabe observar que en la medida en que el procedimiento de autorización de comercialización previsto en la ley no exigiera presentar datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración hubiese supuesto un esfuerzo considerable, el referido artículo 266 (que corresponde al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC) no será aplicable.

I. OBSERVANCIA - OBLIGACIONES GENERALES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS Y MEDIDAS PROVISIONALES

**28. Sírvanse describir, en detalle, de qué modo la legislación boliviana prescribe medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual como lo dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

En cuanto corresponde a los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual requeridos por el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, Bolivia tiene incorporada en su legislación interna procedimientos civiles, penales, administrativos y métodos alternativos de solución de controversias para su correspondiente aplicación y observancia de los derechos de propiedad intelectual. En ese sentido, se aplican las normas contenidas en el derecho sustantivo, leyes especiales con su reglamentación de protección al derecho de autor y los derechos conexos, la protección a la propiedad industrial y a las obtenciones de las variedades vegetales, y las normas adjetivas que están en los Códigos Civil y Penal y sus normas procesales como los Códigos de Procedimiento Civil, Penal y normas administrativas. Igualmente, son de aplicación en Bolivia las normas de observancia previstas por las Decisiones Andinas 344, 345, 351, 391 y 486.

**29. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces estarán facultados para ordenar que se aporte la prueba necesaria para sustanciar las alegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esa prueba por encontrarse bajo el control de la parte contraria. Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos de Bolivia otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.**

El Código de Procedimiento Civil (CPC), faculta al juez que siempre que hubiere hechos a probar, aun sin conformidad de las partes y aunque no lo pidieren, a que abra un período de prueba que no puede ser menor de 10 días ni mayor de 50 según el proceso de que se trate. El auto o resolución que dicta el juez es apelable ante autoridad superior (artículo 370 CPC).

Al sujetarse la causa a prueba, el juez fijará, en auto expreso y en forma precisa, los puntos de hecho a probarse. Este auto puede ser objetado por las partes dentro del tercer día y dará lugar a su pronunciamiento previo e inmediato. Podrá ser apelado en el efecto devolutivo sin recurso ulterior (artículo 371 CPC).

Se aceptan todos los medios legales probatorios, así como los moralmente legítimos aunque no especificados en el Código de Procedimiento Civil. Las partes serán hábiles para probar la verdad de los hechos en que se fundare la acción o la defensa (artículo 373 CPC en concordancia con el artículo 1285 del Código Civil).

Los medios legales de prueba son: los documentos, la confesión, la inspección judicial, el peritaje, la testificación, las presunciones (artículo 374 CPC).

La carga de la prueba incumbe: 1) al actor, en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y 2) al demandado, en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificadorio o extintivo del derecho del actor (artículo 375 CPC).

La oportunidad de probar, para las partes en proceso, será dentro del período fijado por el juez. Fuera de ese período serán rechazadas de oficio, excepto las pruebas preconstituidas y las comprendidas en el artículo 331, que se refiere a aquellos documentos posteriores o anteriores desconocidos. Al respecto se establece que, después de interpuesta la demanda, sólo se admitirán documentos de fecha posterior, o siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos. En tales casos se notificará a la otra parte para los efectos del artículo 46 inciso 2, que significa que debe pronunciarse sobre los documentos acompañados o citados en la demanda. Su silencio, evasivas o negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren dichos documentos (artículos 377, 331 y 346 inciso 2 CPC). Si la prueba debe producirse en el exterior de la República, el juez comisionará a la autoridad judicial correspondiente, siempre que se presentaren cualesquiera de las circunstancias siguientes:

- 1) Que el hecho a probar hubiere ocurrido fuera de la República.
- 2) Que los archivos u oficinas que contuvieren los documentos se encontraren en el extranjero.
- 3) Que la persona que deberá declarar residiere en el extranjero (artículo 385 CPC).

Para recibir la prueba anterior, se fijara un plazo extraordinario de prueba teniendo en cuenta la distancia y los medios de transporte. El plazo no deberá exceder de 60 y 120 días, según se trate o no de país limítrofe y cinco. La resolución que concediere el plazo extraordinario será inapelable; la que denegare el plazo será apelable en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior (artículo 386 en concordancia con los artículos 370 y 383 del CPC).

En cuanto se refiere a la prueba para el procedimiento penal, se establece como principio la libertad probatoria y determina que el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto.

Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes (artículo 171 Nuevo Código de Procedimiento Penal).

En los artículos 174 a 192 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, se establece el procedimiento para la comprobación inmediata y los medios auxiliares siguientes:

- Registro del lugar del hecho.
- Requisa personal.
- Requisa de vehículos.
- Levantamiento e identificación de cadáveres.
- Autopsia y necropsia.
- Inspección ocular y reconstrucción.
- Allanamiento de domicilio.
- Facultades coercitivas por la fuerza pública.
- Mandamiento de allanamiento y Secuestro (con excepciones ver art. 185 NCPP).

Se establecen los siguientes medios de prueba legales: testimonio, en este caso si el testigo no se presentara a la primera citación, se expedirá mandamiento de aprehensión, sin perjuicio de su enjuiciamiento. Si después de comparecer se niega a declarar se dispondrá su arresto hasta por 24 horas, al término de las cuales si persiste en su negativa se le iniciará causa penal (artículo 198 NCPP). En este caso, los actos de desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad tienen penas de multa y reclusión de un mes a un año (artículo 159 y 160 Código Penal).

También se tiene prevista la declaración por comisión cuando el testigo no resida en el distrito judicial donde debe prestar su declaración y no sea posible contar con su presencia. En este caso se ordenará su declaración por exhorto y orden instruida a la autoridad judicial de su residencia (artículo 199 NCPP).

Pericia, es otro medio utilizado para descubrir o valorar un elemento de prueba, cuando sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica.

La Ley N° 2175 del Ministerio Público, establece que para el cumplimiento de sus funciones (ejercer la acción penal pública, ejercer la dirección funcional de las actuación policial en la investigación de los delitos y velar por la legalidad de estas investigaciones), toda persona, institución o dependencia, pública o privada, tiene la obligación de proporcionar la información requerida por el Ministerio Público, bajo responsabilidad prevista en el Código Penal. (Desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad que tiene penas de multa y reclusión de un mes a un año. Artículos 159 y 160 CP.)

**30. Sírvanse describir, en detalle, todos los recursos civiles de que disponen los titulares de derechos en el contexto de la legislación boliviana, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.**

El Código de Procedimiento Civil, establece normas claras y precisas para el tratamiento y resolución de controversias que sean sometidas a los juzgados de jurisdicción ordinaria en el país.

En ese sentido, se presentan sistemáticamente los procedimientos civiles que pueden ser utilizados:

1. Jueces. Existen Juzgados de Primera y Segunda Instancia en todo el territorio nacional, que no solo contempla la capital de departamento (ciudades) sino también las provincias y cantones (fronteras) en toda la República, autoridades judiciales que tienen competencia para conocer demandas en materia civil para la resolución de controversias a los propietarios de los derechos.

2. Partes. Se prevé la intervención y capacidad de las partes que esencialmente intervienen en el proceso como el demandante, el demandado y el juez.

Intervendrán accesoriamente los fiscales cuando representaren al Estado en calidad de actor o demandado, y los funcionarios auxiliares de la administración judicial.

También concurrirán accesoriamente los abogados, peritos, intérpretes, depositarios, administradores, martilleros y comisionados.

Las sociedades legalmente constituidas, así como las corporaciones, entidades, autárquicas, autónomas, cooperativas y comunidades concurrirán por intermedio de sus representantes legales (artículo 56 CPC).

La representación por mandato prevé que la persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que demuestren su personalidad (artículo 58 CPC).

Admitida la personalidad, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante, como si él personalmente los practicare (artículo 60 CPC).

Ante las Notarías de Fe Pública se deberán protocolizar los poderes otorgados en el extranjero, previa legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de acuerdo a la Ley del Notariado.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá responder a su poderdante por las costas causadas por su culpa o negligencia exclusivas. El juez, podrá de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del mandatario con el abogado patrocinante (artículo 64 CPC).

Se prevén disposiciones para los casos de rebeldía, la citación de evicción y los casos en que proceden los beneficios de gratuidad.

3. Comisiones a otras autoridades. Cuando el juez que tuviere que realizar alguna diligencia dentro de su jurisdicción y no pudiere cumplirla personalmente, podrá encomendarla a otras autoridades judiciales y, sólo a falta de éstas, administrativas.

Cuando tuvieren que realizarse diligencias judiciales fuera de su jurisdicción, pero dentro del territorio nacional, el juez librará exhortos para los de igual jerarquía, y órdenes instruidas para los de jerarquía inferior. Si tuviera que encomendarse a una autoridad del exterior de la República, se hará mediante exhorto (artículos 113 y 114 CPC).

4. Medidas precautorias. Antes de presentarse la demanda o durante la sustanciación del proceso pueden pedirse las medidas precautorias siguientes:

- Anotación preventiva.
- Embargo preventivo.
- Secuestro.
- Intervención.
- Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados (concuerta con el artículo 1444 Código Civil) (artículo 156 CPC).

Otras medidas precautorias, fuera de los casos previstos anteriormente, establecen que quien tuviere fundado motivo para temer que, durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia (artículo 169 CPC).

Para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, el juez podrá limitar la medida precautoria solicitada o disponer otra diferente, según la importancia del derecho que se intentare proteger.

Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes muebles afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, el juez, a pedido de parte previo conocimiento de la otra parte, con un plazo que fijará según la urgencia del caso, podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas (artículos 170 y 171).

Para que proceda la medida precautoria es necesario que la parte solicitante dé caución por las costas, daños y perjuicios que pudiese ocasionar, en caso de haberla pedido sin derecho.

Las medidas provisionales tienen carácter temporal, subsisten mientras duraren las circunstancias que las determinaron y en cualquier momento en que ellas cesaren se podrá disponer su levantamiento.

También las medidas provisionales caducarán de pleno derecho, sí tratándose de obligaciones exigibles, no se interpusiere la demanda dentro de los cinco días siguientes al de la ejecución (artículo 177 CPC).

5. Procede la conciliación en los procesos civiles, y podrá realizarse como diligencia previa o durante el proceso a instancias del juez (concuera con el artículo 945 del Código Civil) (artículo 180 CPC).

6. Sanción por incumplimiento de mandato judicial. Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas tendientes a que se cumplan los mandatos judiciales. Su importe beneficiará a la parte perjudicada por el incumplimiento. Las sanciones se graduarán según las condiciones económicas y personales del responsable y podrán ser reajustadas o dejadas sin efecto si aquél desistiere de su resistencia y justificare total o parcialmente su proceder.

7. Las resoluciones judiciales consisten principalmente en providencias que sólo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de mera ejecución, se dictan en el plazo de 24 horas de presentada la petición de las partes.

Los autos interlocutorios deben ser fundamentados y resolverán cuestiones que requieren sustanciación y ocurrieren durante la tramitación del proceso. Se dictan dentro del plazo de cinco u ocho días, se cuenta desde que el expediente ingresa al despacho del juez.

8. La sentencia es una resolución que pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas, en ella se absolverá o condenará al demandado. Según sea el proceso que se tratare, 40 días en proceso Ordinario; 20 días en proceso Sumario y Ejecutivo; 10 días en proceso Sumarísimo.

La resolución de segunda y tercera instancia, que resuelve los recursos planteados se denominan auto de vista y auto de casación y son también fundamentados, y se dictan dentro del plazo de 30 días computables desde la fecha en que sortearse el expediente.

9. Los recursos. Las resoluciones judiciales son recurribles mediante la impugnación de la parte perjudicada. Sin perjuicio de los recursos establecidos en leyes especiales, las resoluciones judiciales podrán reclamarse mediante los recursos de reposición, apelación y casación.

10. Existe el procedimiento para el recurso de revisión extraordinaria de sentencias. Habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal de casación), de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, con determinación de los casos en que procede.

11. Existen también disposiciones para la conclusión extraordinaria del proceso, que se encuentran identificadas con los siguientes procedimientos:

- **Desistimiento.** Que puede ser interpuesta antes de contestada la demanda, el demandante podrá retirarla y se considerará como no presentada (artículos 303 al 308 CPC).

- Desistimiento del proceso, después de contestada la demanda, el demandante o su apoderado con facultad especial podrá desistir del proceso. Puede existir la condición de la parte demandada que previo a aceptar el desistimiento se le paguen las costas causadas.
- Desistimiento del derecho, en la misma oportunidad y forma previstas en el artículo anterior el demandante podrá desistir del derecho en que fundó la acción. En este caso no requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procediere por la naturaleza del derecho litigioso y dar por terminado el proceso en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por objeto y causa iguales.
- Perención y transacción son otras dos maneras de conclusión extraordinaria de los procesos (artículos 309 al 315 CPC).

## 12. Procesos de conocimiento

Clases: Proceso Ordinario, todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se substanciará y resolverá en proceso ordinario (artículos 36 CPC). Por lo general y dada la naturaleza de los derechos intelectuales los asuntos contenciosos se resuelven con este proceso.

Proceso Sumario, Los proceso de menor cuantía (conflictos con menor cantidad de monto económico) (artículo 317 CPC).

Proceso Sumarísimo, que están relacionados a proceso voluntarios y sin substanciación y procedimiento simple de mero trámite.

13. Medidas preparatorias - Enumeración. Todo proceso podrá prepararse por quien pretendiere demandar o por quien, con fundamento, previere que será demandado, pidiendo:

- Que la persona contra quien se propusiere dirigir la demanda presente declaración jurada sobre algún hecho relativo a su personalidad, comprobación sin la cual no pudiera entrarse en juicio.
- El reconocimiento, ante el juez competente, dé firma en documento y papeles privados. Podrán darse los casos siguientes:
  - Tratándose de persona jurídica y cuando el firmante hubiera dejado de ser personero de ella o se encontrase ausente, se podrá pedir que su reemplazante declare la efectividad del documento.
  - Si se tratase de obligaciones contraídas por analfabetos o impedidos de firmar, se estará a lo dispuesto por los artículos 1299 y 300 del Código Civil.
  - Si, legalmente citada, no comparece la persona quien se emplaza, se dará por reconocida la firma y la efectividad del documento, a menos que mediare impedimento por fuerza mayor comprobada, caso en el cual el juez señalará nuevo día y hora o se trasladará al domicilio del emplazado.
  - Que se exhiba la cosa mueble que ha ser objeto de la acción.
  - Que se exhiban testamentos o codicilos si el solicitante se creyere heredero o legatario.



- Que, en caso de evicción, se exhiban los títulos u otro documento referentes a la cosa vendida.
  - Que el socio o comunero o quien tuviera en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los exhiba, de manera que el solicitante pueda fundar una acción relativa a los mismos o defender en juicio promovido por un tercero, sea que la sociedad hubiere sido o no disuelta legalmente.
  - Que se nombre defensor del ausente presunto que habrá de ser demandado, previa justificación de la ausencia en el término prudencial que fije el juez, que en la misma forma se nombre defensor de bienes desamparados.
  - Que, con la noticia contraria, se reciba declaración anticipada de testigos gravemente enfermos, próximos a ausentarse del país o de edad avanzada.
  - Que se practique, con o sin intervención de peritos, la inspección judicial de inmueble o muebles que habrán de ser objeto del juicio, para comprobar su estado.
- Que si el demandado presunto estuviera por ausentarse de la República constituya domicilio legal en el lugar que correspondiere entablar el proceso, dentro de los tres días de citársele con el requerimiento, bajo conminatoria de tener por constituido el domicilio en la puerta del juzgado o tribunal donde se practicará la citación con la demanda.
- Que quien hubiere de ser demandado por reivindicación u otra acción para que fuere necesario conocer el carácter en virtud del cual ocupa la cosa objeto del juicio a promoverse, exprese a qué título la tiene.
- Que se practique mensura judicial (artículo 319 CPC).

Se puede solicitar como medida preparatoria la exhibición de cosa mueble y procede el depósito de ella en el estado en que se encuentre, si es la misma que el demandado propone demandar. Es necesario interponer demanda dentro de 20 días siguientes, de lo contrario la prevención y el depósito quedarán sin efecto (artículo 322 CPC).

También existe la previsión para la declaración anticipada de testigos que puede ser después de formalizado el juicio y antes de abrirse el período de prueba.

14. El Proceso Ordinario comprende fundamentalmente las siguientes etapas procesales:

- Demanda, admisión, citación - Contestación (puede haber reconvencción de la demanda).
- Se podrán interponer Excepciones previas o perentorias.
- Es posible la tercería que puede ser coadyuvante, excluyente y de derecho preferente.
- Período de prueba, que puede ser ampliado con plazo extraordinario.
- Conclusión del período de prueba, decreto de autos para dictar sentencia.
- Sentencia, se puede ejecutar, o bien procede el recurso de apelación.

- Recurso de apelación.
- Recurso de casación.
- Ejecución de sentencia.

El Proceso Ejecutivo, se procederá ejecutivamente en virtud de un título que tuviere fuerza de ejecución. Se demandará al deudor moroso el pago o cumplimiento de una obligación exigible.

Son títulos ejecutivos:

- Los documentos públicos.
- Los documentos privados reconocidos o tenidos como tales por juez competente.
- Los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieren fuerza ejecutiva.
- Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada.
- Los documentos de crédito por expensas comunes en edificios sujetos al régimen legal de propiedad horizontal.
- Los documentos de crédito, recibos impagos en arrendamiento de inmuebles.
- La confesión de deuda líquida y exigible ante el juez competente para conocer en la ejecución.
- La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando se pidiere su cumplimiento después de un año de ejecutoriada.

Acción Ordinaria y Ejecutiva, intentada la acción en la vía ordinaria y contestada la demanda, no será permitido iniciar la ejecutiva (artículos 487 y 489 CPC).

15. Los medios alternativos de solución de controversias pueden ser aplicados a través del arbitraje y la conciliación, por lo que se aplica la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación de 10 de marzo 1997.

**31. Sírvanse explicar cómo se aplican en Bolivia los recursos civiles a niveles "adecuados para compensar el daño que el titular del derecho haya sufrido", como lo dispone el párrafo 1 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Procederá la orden de las autoridades judiciales para compensar el daño que haya sufrido el titular del derecho, siempre que éste o su representante o apoderado haga constar en la demanda civil y demuestre el daño sufrido por la infracción a su derecho de propiedad intelectual, para que proceda el resarcimiento de daños y perjuicios, así como las costas procesales. En ejecución de sentencia se procederá a la calificación del daño y consecuente orden de pago. La sentencia ejecutoriada en proceso ordinario es título ejecutivo constitutivo de derechos y obligaciones y exigible de pago.

En cuanto se refiere a la infracción de derecho y la comisión de delitos, la sentencia penal condenatoria que dicta el juez será cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. La Sentencia fijará con precisión

las sanciones que corresponden, la forma y lugar de cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. La Sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley.

La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan (artículo 365 NCPP).

El procedimiento penal prevé, para la reparación del daño, que ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente.

La víctima que no haya intervenido en el proceso penal podrá optar por esta vía, dentro de los tres meses de informada de la sentencia firme (artículo 382 NCPP).

El procedimiento exige una demanda, su admisibilidad, realización de una audiencia y la resolución del juez. Procede recurso de apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior (artículos 383 al 388 NCPP).

**32. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los titulares de derechos en conformidad con la legislación de Bolivia, citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes e indicar cualquier condición en virtud de la cual el titular del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos.**

#### Derecho de Autor y Derechos Conexos

La legislación nacional con la Ley N° 1322 de Derecho de Autor del 13 de abril de 1992, en su artículo 3 establece el ámbito de protección de los derechos de todos los autores bolivianos, de los extranjeros domiciliados en el país y de las obras de extranjeros publicadas por primera vez en el país.

Los extranjeros no domiciliados en el país gozarán de la protección de esta Ley, en la medida que les corresponda en virtud de los convenios y tratados internacionales de los que Bolivia sea parte. En su defecto, estarán equiparados a los bolivianos cuando éstos a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.

Los autores apátridas, refugiados o de nacionalidad controvertida serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.

La tipificación del delito se encuentra establecida en el artículo 68 de la Ley 1322, y señala lo que se considera como violación al Derecho de Autor, que es de conocimiento de la Judicatura Penal Ordinaria. La sanción penal que se establece en el artículo 362 del Código Penal, consiste en reclusión de tres meses a dos años y multa de 70 días.

El artículo 68 de la Ley 1322, establece que cometerá violación, al derecho de autor quien:

a) En relación con una obra o producción literaria o artística inédita y sin autorización del autor, artista o productor, o de sus causahabientes, la inscriba en el registro o la publique por cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión, como si fuere suya o de otra persona distinta del autor verdadero. O con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado dolosamente.

- b) En relación con una obra producción publicada y protegida cometa cualesquiera de los hechos indicados en el inciso anterior, o sin permiso del titular del derecho de autor, la reproduzca, adapte, transforme, modifique, refunda o compendie y edite o publique alguno de estos trabajos por cualquier modo de reproducción, multiplicación o comunicación al público.
- c) Reproduzca una obra editada, alterando dolosamente en la edición fraudulenta el nombre del editor autorizado al efecto.
- d) Reproduzca mayor número de ejemplares de los autorizados por el titular del derecho de autor, sus causahabientes en el respectivo contrato.
- e) Reproduzca un fonograma o videograma con miras a su comercialización, o lo alquile sin autorización escrita de su productor o su representante; asimismo, el que importe, almacene, distribuya o venda las copias ilícitas de un fonograma o un videograma. Entiéndese por ejemplar ilícito de un fonograma o un videograma, el que imitando o no, las características externas del ejemplar legítimo tiene incorporado el fonograma o el videograma o parte sustancial de él, sin la autorización de su titular.
- f) Edite, venda, reproduzca o difunda una obra editada o fonograma mencionando falsamente el nombre del autor, del editor autorizado, de los intérpretes y ejecutantes o del productor.
- g) Reproduzca, difunda, ejecute, represente o distribuya una o más obras después de vencido el término de una autorización concedida al efecto.
- h) Presentare declaraciones falsas destinadas, directa o indirectamente a perjudicar los derechos económicos del autor, sea alterando los datos referentes al producto económico de un espectáculo, el número de ejemplares producidos, vendidos o distribuidos de una obra o por cualquier otro medio.
- i) Sin la autorización del titular del derecho de autor sea responsable por la representación o ejecución de obra teatrales musicales o cinematográficas.
- j) Sin ser autor, editor causahabiente o representante de uno o de alguno de ellos, se atribuya falsamente una de esas calidades y obtenga que la autoridad suspenda la representación de la ejecución pública de una obra.
- k) Se apropie indebidamente del derecho de uso de nombres de periódicos, revistas, secciones y columnas de los mismos, programas de radio televisión, noticieros cinematográficos, de los demás medios de comunicación, de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas y otras publicaciones periódicas o de personajes característicos empleados en actuaciones artísticas o de nombres de grupos y conjuntos, coros orquestas, bandas y otros elencos artísticos.
- l) Transmita, retransmita o difunda por cualquier medio, obras cinematográficas sin autorización del productor.

Artículo 69. El propietario, socio, gerente, director o responsable de las actividades de los establecimientos donde se realicen espectáculos teatrales o musicales, responderán solidariamente con el organizador del espectáculo, por las violaciones a los derechos de autor que tengan lugar en dichos locales, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

El artículo 52 de la Ley N° 1322 de Derecho de Autor establece en el Título X, referido a los Derechos Conexos, la protección a los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores fonográficos, de los organismos de radiodifusión.

La Ley de Cine N° 1302 del 20 de diciembre de 1991, por su parte, establece el ámbito de protección para las personas naturales o jurídicas ocupadas en una o más actividades cinematográficas o que tengan relaciones con los filmes, y tiene como atribución el Consejo Nacional de Cine CONACINE, el registrar la propiedad intelectual cinematográfica y los contratos de coproducción, exhibición y distribución.

Los videocasetes que sean para comercialización dentro del territorio de Bolivia deberán llevar un sello pirograbado de constancia de legalidad otorgado por CONACINE.

#### Marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales

La legislación nacional establece protección a las marcas, en la Ley Reglamentaria de Marcas del 15 de enero de 1918, que en su artículo 47 establece una multa y la pena de reclusión de tres meses a un año, a quienes falsifiquen una marca, usen marcas falsificadas, imiten fraudulentamente una marca, pongan sobre sus productos o mercancías una marca ajena, expendan los mismos con su conocimiento.

Asimismo, el artículo 48 sanciona igualmente con una multa y con reclusión de uno a tres meses a los que comercialicen directa, indirectamente o a través de intermediarios marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas y los que vendan marcas auténticas sin el consentimiento de su propietario, así también los que se presten a vender o pongan a circular artículos espúreos con marcas falsificadas y fraudulentamente imitadas como marcas auténticas. Y la sanción es también para los que hagan poner en la marca de productos una enunciación o cualquier designación falsa, con relación a la naturaleza, calidad, cantidad, peso a medida o a lugar o país en que haya sido fabricado o expedido, o medallas, diplomas, menciones, recompensas o distinciones honoríficas concedidas en exposiciones o concursos, sin perjuicio de extinguirse su derecho.

El Código de Comercio regula el derecho al nombre comercial (artículos 470 y siguientes) su formación, el uso y transmisión. En concordancia el Código Penal (artículo 236) establece la penalización a la violación de esos derechos a quien imite o usurpe el nombre comercial ajeno responde de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la sanción penal correspondiente.

El artículo 475 y siguientes del Código de Comercio, también establece el derecho de uso de las marcas registradas, signos distintivos, marcas de uso simultáneo, transmisión, cancelación del registro de una marca (cuando no está en uso por más de cinco años ininterrumpidos), salvo lo convenido en tratados internacionales y de reciprocidad. El procedimiento está sujeto a las disposiciones vigentes y aplicables en Bolivia, más específicamente la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

El Código Penal en su artículo 236 tipifica como delito al engaño en productos industriales, al que pusiese en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan al engaño sobre su origen, procedencia, cantidad y calidad y establece como sanción la privación de libertad de seis meses a tres años.

Así también en el artículo 363, se establece la tipificación para el delito de violación de privilegio de invención al señalar que será sancionado con reclusión de tres meses a dos años y multa de treinta a sesenta días, el que violare el derecho de privilegio de invención o descubierto, en los siguientes casos:

- 1) Fabricando sin autorización del concesionario objetos o productos amparados por un privilegio.
- 2) Usando medio o procedimiento que sea objeto de un privilegio.

En cuanto se refiere a los delitos informáticos se establece en el Código Penal, en el artículo 363*bis*, que el que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procedimiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal, cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de 60 a 200 días.

El artículo 363*ter* se refiere a la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, y señala que el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta 200 días.

Los procedimientos judiciales que se pueden interponer si hay violación de derecho de autor, serán conocidos por los Juzgados de Justicia Penal Ordinaria que existe en el país.

En la vía civil se interpondrán también aquellas acciones que sean procedentes al caso en concreto, que se demande.

El procedimiento de arbitraje y conciliación también se puede aplicar en cuanto corresponda en derecho, pues existen en el país diversos centros relacionados con la Cámara de Comercio Nacional que pueden atender los requerimientos de partes interesadas en utilizar los métodos alternos de solución de controversias.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, cuenta con una reglamentación especial para solucionar los casos de conciliación cuando se vulneren los Derechos de Autor, si es procedente se aplica la conciliación con las partes que se encuentren dispuestas a someterse a esos recursos. Se aplica la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación.

En cuanto al procedimiento penal se explica en las siguientes preguntas 37 a 39 del cuestionario presentado por el Gobierno de los Estados Unidos de América del Norte.

Así también el artículo 57 de la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918, establece que todo industrial o comerciante que tuviese conocimiento de que se encuentra en aduana, correo, negocio particular, marcas suyas falsificadas o fraudulentamente imitadas o productos falsificados o imitados fraudulentamente, con perjuicio de sus derechos o intereses, podrá pedir el embargo de dichos objetos y el Juez lo ordenará bajo las responsabilidades del peticionario y con las cauciones necesarias para el caso que el embargo pedido fuese sin derecho consolidado. También se faculta al juez para que ordene el levantamiento de inventario y descripción de las mercaderías o productos que se encuentren con dichas marcas.

El Código de Comercio de nuestro país, en su Libro Primero, capítulo V, trata sobre la competencia desleal, los actos que la constituyen y la acción de los perjudicados para que ocurran ante juez competente para que en la vía sumaria se ordene la cesación de los actos de competencia desleal así como también la multa en caso de incumplimiento de la resolución del Juez.

El Código Penal, en su capítulo II tipifica los delitos contra la Industria y el Comercio, tales como la competencia desleal, el monopolio de importación, producción o distribución de mercaderías,

desvío de clientela y corrupción de dependientes, se reprime en el primer caso con reclusión de seis meses a tres años y multa de 100 a 500 días y en los dos últimos casos se sanciona con multa de 30 a 100 días.

**33. Sírvanse explicar cómo los recursos penales son "ágiles" e "impiden injustificadas demoras", como lo prescriben el párrafo 1 del artículo 41 y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Las sanciones penales están claramente establecidas en el Código Penal, así como en las normas especiales anteriormente indicadas.

El procedimiento para la ejecución de la sentencia no prevé mayor dificultad, ya que las normas establecen claramente los plazos y recursos procesales necesarios para garantizar un debido proceso.

La legislación boliviana ofrece beneficios condicionados claramente, para aquellas personas sancionadas con pena privativa de libertad, que son los que establece el Código Penal como es la libertad condicional y el beneficio de extramuro o prelibertad.

En ese sentido se establece que la libertad condicional procederá cuando se hayan cumplido dos tercios de la pena impuesta y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 66 del Código Penal y la Ley de Ejecución de Penas y el Sistema Penitenciario.

En ese sentido el artículo 66 del Código Penal establece:

Libertad Condicional. El juez de la causa, mediante sentencia motivada podrá conceder libertad condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad que hubiera cumplido las dos terceras partes de la condena, previo informe de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, Juez de Vigilancia y de acuerdo a los siguientes requisitos:

Haber cumplido las diferentes etapas del sistema progresivo, y que se encuentre clasificado en el tercer grado de prelibertad previstos en los artículos 8 inciso c) y 22 inciso c) de la Ley de Ejecución de Penas y sistema Penitenciario.

Haber demostrado aptitud y hábito de trabajo.

Haber satisfecho la responsabilidad civil o constituir fianza real o personal.

Que observe buena conducta en libertad y se someta a la tutela del Juez de Vigilancia y de los servicios Post-Penitenciarios dependientes de la Dirección General, hasta el cumplimiento total de la condena.

Artículo 67.- Condiciones.- La sentencia motivada que conceda la libertad deberá imponer al condenado las condiciones siguientes:

Observar las normas de conductas señaladas en el artículo 61.

Someterse a la vigilancia de las autoridades.

Prestar caución de buena conducta.

Presentarse periódicamente ante el juez de vigilancia.

Artículo 68.- Revocatoria.- La libertad condicional se revocará si el liberado cometiere algún delito doloso o no cumpliera las condiciones establecidas en la sentencia, vigentes hasta el vencimiento del término de la condena.

El Nuevo Código de Procedimiento Penal cuando se refiere a la suspensión condicional de la pena señala:

Artículo 366.- Suspensión condicional de la pena.- El juez o tribunal, previo a los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y la modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena y cuando concurran los requisitos siguientes:

Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; y,

Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años.

Artículo 24.- Condiciones y Reglas.- Al resolver la suspensión condicional del proceso, el juez fijará un período de prueba que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres y en ningún caso excederá el máximo de la pena prevista; determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado en ese plazo, seleccionando de acuerdo con la naturaleza del hecho entre las siguientes:

prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez;

prohibición de frecuentar determinados lugares o personas;

abstención del consumo de estupefacientes o de bebidas alcohólicas;

someterse a la vigilancia que determine el juez;

prestar trabajo a favor del Estado o de instituciones de asistencia pública, fuera de sus horarios habituales de trabajo;

permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión;

someterse a tratamiento médico o psicológico;

prohibición de tener o portar armas; y,

prohibición de conducir vehículos.

El juez podrá imponer otras reglas de conducta análogas, que estime convenientes para la reintegración social del sometido a prueba. El juez notificará personalmente al imputado la suspensión condicional del proceso, con expresa advertencia sobre las reglas de conducta, así como sobre las consecuencias de su inobservancia.

La suspensión condicional del proceso sólo será apelable por el imputado y únicamente, cuando las reglas sean ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas.



El juez de ejecución penal velará por el cumplimiento de las reglas.

Artículo 25 Revocatoria.- Si el imputado se aparta considerablemente y en forma justificada de las reglas impuestas, no cumple los acuerdos o promesas del daño civil, o se formaliza la acusación por la comisión de un nuevo delito, el juez de la causa revocará la suspensión y el proceso continuará su curso. En el primer caso, el juez podrá optar por la ampliación del período de prueba y/o la modificación de las medidas impuestas.

La revocatoria de la suspensión del proceso no impedirá el posterior perdón judicial o suspensión condicional de la pena.

Si la suspensión condicional del proceso no ha sido revocada hasta el vencimiento del período de prueba, el juez de la causa declara extinguida la acción penal.

El beneficio de Extramuro, el beneficio de prelibertad que tiene una lista extensiva de requisitos para su procedencia, conlleva asimismo, no sólo el compromiso formal de cese de actividad ilícita, sino el resarcimiento de daño y perjuicios para lo cual se deberán prestar las fianzas reales, personales y garantías exigidas por el nuevo Código de Procedimiento Penal.

El Nuevo Código de Procedimiento Penal está introduciendo nuevos roles y conceptos en la administración de la justicia penal en Bolivia, por lo que es importante destacar que adopta el sistema acusatorio oral, público, continuo y contradictorio y establece mecanismos de selección de causas verdaderamente graves que preocupan a la sociedad y al Estado.

Se está otorgando un nuevo rol acusador al Ministerio Público por una parte, y por la otra se hace una revalorización de la víctima (titular del derecho). Si se destaca ambas partes del proceso, es por la directa relación que existe entre ambos para llevar adelante la etapa preparatoria del juicio que permita la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado hasta la etapa de juicio y su correspondiente sentencia y ejecución.

Es importante destacar que para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por el damnificado (víctima, titular del derecho), contra el autor y los partícipes del delito y en su caso, contra el civilmente responsable, por lo que se deberá iniciar la acción civil y podrá ser ejercida conforme las reglas especiales previstas en el Nuevo Código de Procedimiento Penal o intentarse ante los tribunales civiles, pero no se podrá promover simultáneamente ambas jurisdicciones (artículos 36 y 37 NCPP).

J. OBSERVANCIA - PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

**34. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos contemplados en la legislación boliviana que establezcan prescripciones especiales en frontera para reprimir, al menos, la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, identificar la autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el reglamento.**

La Ley General de Aduanas N° 1990 de 28 de julio de 1999, en su artículo 31 incisos a), b), c) y f), establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 31.- Las funciones de la Aduana Nacional son:

Vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras y aeropuertos del país.

Intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los tributos aduaneros y otros que determinen las leyes.

Prevenir y reprimir los ilícitos aduaneros dentro del ámbito de su competencia.

Las demás que le señalen las leyes."

Por lo expuesto, la Aduana Nacional cumple con la labor de controlar y fiscalizar toda mercancía que ingrese a nuestro territorio.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley General de Aduanas y 120 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000 - Reglamento de la Ley General de Aduanas, que respectivamente señalan:

"ARTÍCULO 86 (L.G.A.).- La importación de mercancías protegidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), se ajustará a las disposiciones generales y principios básicos señalados en dicho Acuerdo.

La administración aduanera, a solicitud del órgano nacional competente relacionado con la propiedad intelectual, podrá suspender el desaduanamiento de la mercancía que presuntamente viole los derechos de propiedad intelectual, obtenidos en el país o que deriven de acuerdos internacionales suscritos por Bolivia, ratificados por el Parlamento."

"ARTÍCULO 120 (Reglamento).- (Protección aduanera a los derechos de autor y a la propiedad intelectual)

Conforme lo dispone el artículo 86 de la Ley General de Aduanas, la Ley N° 1322 sobre derechos de autor y otras leyes sobre propiedad intelectual, la administración aduanera a solicitud del organismo competente, podrá suspender el despacho aduanero de la mercancía que presuntamente viole derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando no se hubiere autorizado el levante de las mercancías.

En caso que el organismo competente interponga ante la administración aduanera la solicitud de suspensión de despacho aduanero, éste deberá presentar en el plazo de diez (10) días las pruebas fehacientes que demuestren que se están afectando los derechos de propiedad industrial, derechos de autor o de propiedad intelectual, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos industriales o patentes protegidos por la Organización Mundial del Comercio. Si vencido el plazo no se presentan las pruebas de infracción a la propiedad intelectual, la administración aduanera dará continuidad al despacho aduanero.

Realizadas las comprobaciones sobre infracciones a la propiedad intelectual, la administración aduanera procederá al comiso de las mercancías y en coordinación con el organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mismas."

Las mercancías provenientes del extranjero o de Zona Franca del exterior, para el ingreso al territorio aduanero nacional deben cumplir con las formalidades aduaneras y la presentación del Manifiesto Internacional de Carga y designando una Administración de Aduana de Destino dependiente de la Gerencia Regional correspondiente, para posteriormente proceder a la aplicación de un régimen aduanero.

Iniciado el despacho aduanero y de no existir denuncia formal por el SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual) sobre la supuesta violación de derechos de autor, la administración aduanera procede con la nacionalización de las mercancías.

Por otro lado, está el cumplimiento de normas supranacionales en materia de propiedad intelectual y de aplicación obligatoria en nuestro territorio.

En este sentido, la Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene todo un capítulo en el que se regula lo atinente a las medidas en frontera previstas en la sección 4 de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

De esta manera, establece en su artículo 250, la posibilidad para el titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen su derecho, de solicitar a la autoridad nacional competente suspender la correspondiente operación aduanera, suministrando para el efecto la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

El artículo 251 de la Decisión 486, faculta al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas, a efectos de fundamentar sus reclamaciones, confiriendo igual derecho al importador o exportador de las mercancías. De otra parte, la norma dispone que la autoridad nacional competente debe disponer lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

En concordancia con lo establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 253 establece que:

"Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas."

Y el artículo 254 faculta a la parte contra quien se tomó la medida para recurrirla, una vez iniciada la acción por infracción.

Por su parte, en el artículo 255 se señala que una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca, sin perjuicio de las demás acciones que le correspondan y por supuesto, a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial la decisión respectiva.

Finalmente, el artículo 256 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC regula a las exportaciones insignificantes, estableciendo que quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones sobre medidas en frontera las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

**35. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.**

Las mercancías extranjeras ingresan al territorio boliviano portando el respectivo Manifiesto Internacional de Carga y no existen medidas coercitivas, procedimientos ni sanciones, sólo hasta el momento que el SENAPI, interponga ante la Administración Aduanera de Frontera la suspensión del despacho aduanero por infracciones a los derechos de autor y a la propiedad intelectual.

En cuyo caso podrá aplicarse el artículo 120 del D.S. 25870, Reglamento de la Ley General de Aduanas, que indica que el organismo nacional competente (SENAPI) podrá solicitar la suspensión del despacho cuando se afectan derechos de autor o de propiedad intelectual, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos industriales o patentes protegidas por la OMC.

**36. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio. Sírvanse explicar si las autoridades competentes de Bolivia están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.**

El Decreto Supremo N° 25159 de septiembre de 1998, autoriza al SENAPI, como organismo competente, a cumplir funciones de protección en materia de propiedad industrial, intelectual y derechos de autor.

Por otra parte, el artículo 86 de la Ley General de Aduanas establece que: "la importación de mercancías protegidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), se ajustará a las disposiciones generales y principios básicos señalados en dicho Acuerdo.

La administración aduanera, a solicitud del órgano nacional competente relacionado con la propiedad intelectual, podrá suspender el desaduanamiento de la mercancía que presuntamente viole los derechos de propiedad intelectual, obtenidos en el país o que deriven de acuerdos internacionales suscritos por Bolivia, ratificados por el Parlamento".

En el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (protección aduanera a los derechos de autor y a la propiedad intelectual), se establece que:

"Conforme lo dispone el artículo 86 de la Ley General de Aduanas, la Ley N° 1322 sobre derechos de autor y otras leyes sobre propiedad intelectual, la administración aduanera a solicitud del organismo competente, podrá suspender el despacho aduanero de la mercancía que presuntamente viole derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando no se hubiere autorizado el levante de las mercancías.

En caso que el organismo competente interponga ante la administración aduanera la solicitud de suspensión de despacho aduanero, éste deberá presentar en el plazo de diez (10) días las pruebas fehacientes que demuestren que se están afectando los derechos de propiedad industrial, derechos de autor o de propiedad intelectual, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos industriales o patentes protegidos por la Organización Mundial del Comercio. Si vencido el plazo no se presentan las pruebas de infracción a la propiedad intelectual, la administración aduanera dará continuidad al despacho aduanero.

Realizadas las comprobaciones sobre infracciones a la propiedad intelectual, la administración aduanera procederá al comiso de las mercancías y en coordinación con el organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mismas".

Por otra parte, el Título XV, capítulo III en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486, establece las medidas en frontera que son adoptadas por los Miembros para proteger los derechos de propiedad intelectual.

"Artículo 250. El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251. A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252. Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253. Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

Artículo 254. Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255. Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256. Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas."

K. OBSERVANCIA - PROCEDIMIENTOS PENALES

**37. Sírvanse describir, en detalle, cómo las leyes de Bolivia aplican el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC que prescribe que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales, que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala comercial. Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.**

En el artículo 235 del Código Penal, sobre fraude comercial, se señala: "El que en lugar público, o abierto al público engañare al comprador entregándole una cosa por otra, siempre que no resulte delito más grave, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años."

Según el artículo 236 del Código Penal, se establecen los delitos contra la industria y el comercio, éste señala: "El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años."

En materia de derecho de autor y delitos informáticos, los artículos 362, 363, 363*bis* y 363*ter* del Código Penal establecen sanciones penales con reclusión de libertad de 3 meses a 2 años y multa de 60 días, así como reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días, respectivamente.

**38. El artículo 61 estipula que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación boliviana que prevén tales recursos y señalar las circunstancias en que éstos se aplicarían, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.**

El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. En esta acción se puede pedir, entre otras cosas, la indemnización por daños y perjuicios. La misma disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor.

**39. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de otras formas de la propiedad intelectual. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación boliviana que establezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.**

En el artículo 235 del Código Penal, sobre fraude comercial, se señala: "El que en lugar público, o abierto al público engañare al comprador entregándole una cosa por otra, siempre que no resulte delito más grave, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años."

Según el artículo 236 del Código Penal, se establecen los delitos contra la industria y el comercio, éste señala: "El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años."

En materia de derecho de autor y delitos informáticos, los artículos 362, 363, 363*bis* y 363*ter* del Código Penal establecen sanciones penales con reclusión de libertad de 3 meses a 2 años y multa de 60 días, así como reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días, respectivamente.

L. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

**40. Sírvanse proporcionar información estadística referente a derechos civiles de autor, marcas de fábrica y de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales compilados durante el año 2000, incluyendo el número de casos presentados; los mandamientos expedidos; las mercancías infractoras confiscadas; los equipos infractores confiscados; los casos resueltos (incluidos los arreglos); y el importe de los perjuicios indemnizados.**

El Gobierno de Bolivia no dispone de esa información.

**41 Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de comercio compilados durante el año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos, condenas, el importe de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y de las penas de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información que establezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de comercio.**

El Gobierno de Bolivia no dispone de esa información.

---

## **ANEXO**

### **ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

#### **LIBRO PRIMERO DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

##### **TÍTULO I DERECHO DE AUTOR**

###### **CAPÍTULO I GENERALIDADES**

###### **Artículo 6. Generalidades.**

- I. El derecho de autor tiene las siguientes generalidades:
  1. Se reconoce y garantiza el derecho de autor en favor de los autores y titulares de derechos sobre sus obras y el derecho conexo en favor de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión sobre sus producciones.
  2. El autor de una obra tiene, por el solo hecho de la creación, la titularidad originaria del derecho sobre la obra, que comprende a su vez, derechos morales que amparan la paternidad e integridad de la obra y los derechos patrimoniales que protegen el aprovechamiento económico de la misma.
  3. Los derechos señalados son independientes de la propiedad del soporte material que contiene la obra, de manera que la enajenación del indicado soporte no implica ninguna cesión de derechos en favor del adquirente, salvo disposición expresa del presente Libro.
  4. El derecho de autor tiene también por objeto salvaguardar el acervo cultural de la nación.

###### **Artículo 7. Nacimiento del derecho.**

- I. El derecho de autor nace con la creación de la obra sin que sea necesario el registro, depósito u otra formalidad para obtener la protección reconocida por el presente Libro.
- II. Las formalidades que se establecen tienen por objeto otorgar mayor seguridad jurídica a los autores y titulares de los derechos que se protegen.
- III. Las disposiciones del presente Libro se aplicarán a las obras literarias o artísticas que hayan sido creadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Código, a condición de que las obras no sean todavía de dominio público, debido a la expiración de la duración a la que estaba sometida en la legislación anterior o en la legislación de su país de origen.
- IV. El párrafo anterior se aplicará para la protección de los derechos conexos reconocidos por el presente Libro.



- V. Los efectos legales de los actos, contratos y registros concertados o estipulados antes de la entrada en vigor del presente Libro permanecerán intactos.

**Artículo 8. Domicilio de los autores.**

- I. El presente Libro ampara los derechos de los autores bolivianos, extranjeros domiciliados en el país y a las obras de extranjeros publicadas por primera vez en el país.
- II. Los extranjeros no domiciliados en el país gozarán de la protección del presente Libro, en la medida que les corresponda en virtud de los convenios y tratados internacionales en los que Bolivia sea parte. En su defecto, estarán equiparados a los bolivianos cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.
- III. Para los efectos del presente Libro, los autores apátridas, refugiados o de nacionalidad controvertida serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.

**Artículo 9. Independencia y compatibilidad.**

El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:

1. La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada la obra.
2. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
3. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por el presente Libro.

**CAPÍTULO II**  
**OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR**

**Artículo 10. Objeto del derecho de autor.**

- I. Las disposiciones del presente Libro, regulan el ámbito de protección del derecho de autor, sobre las obras del ingenio humano de carácter original, sean de índole literaria, artística, científica y los derechos conexos, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.
- II. El objeto de la protección del derecho de autor es toda creación literaria, artística, científica cualquiera sea la forma de expresión tangible o intangible y el medio o soporte, actualmente conocido o que se conozca en el futuro.

**Artículo 11. Obras protegidas.**

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:

1. Libros, folletos, artículos, impresos, epístolas, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, y obras expresadas por escrito.

2. Conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias, comentarios y obras compuestas por palabras y expresadas oralmente.
3. Obras dramáticas o dramático-musicales, obras teatrales, obras coreográficas y pantomímicas, cuya representación se fije por escrito o de otra manera.
4. Composiciones musicales, con o sin letra.
5. Obras audiovisuales como las cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento empleado.
6. Obras de bellas artes, incluidos pintura, dibujo, escultura, grabado, litografía y las historietas gráficas, cómicos, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas.
7. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
8. Ilustraciones, mapas, gráficos, planos, croquis, diseños y obras plásticas y tridimensionales relativas a la geografía, la topografía, y en general a la ciencia.
9. Obras fotográficas o las que se asimilan a las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
10. Obras de artes aplicadas, aunque su valor artístico no pueda ser dissociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporados, incluyendo las obras de artesanía.
11. Bocetos escenográficos y las respectivas escenografías.
12. Programas de ordenador o computación.
13. Obras derivadas como las adaptaciones, traducciones, arreglos musicales, revisiones, actualizaciones y anotaciones, compendios resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra literaria, artística o científica, realizadas con expresa autorización del autor de la obra original, y sin perjuicio de sus derechos.
14. Las traducciones, adaptaciones, transformaciones, arreglo de obras de cultura tradicional y popular, expresiones del folklore y obras inspiradas en el mismo.
15. Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos.

## **Artículo 12. Excepción.**

- I. La protección reconocida en el presente Libro no alcanzará a los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o jurídico ni a las traducciones oficiales de los mismos, ni las noticias del día, ni las ideas, procedimientos, sistemas, métodos de funcionamiento, conceptos, principios, descubrimientos o simples datos o hechos, aun cuando éstos expresen, describan, expliquen, ilustren o se incorporen en una obra.

- II. No son objeto de protección las ideas ni abstractas, ni las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

### **CAPÍTULO III**

#### **TITULARES DEL DERECHO DE AUTOR**

##### **Artículo 13. Titulares de los derechos.**

El autor de una obra es el primer titular de los derechos morales y patrimoniales sobre su obra, únicamente la persona individual puede ser autor; sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas colectivas pueden ser titulares de derecho de autor, de conformidad con las normas del presente Libro.

##### **Artículo 14. Presunción de autor.**

Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona individual que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo habitual que esté indicado en ella.

##### **Artículo 15. Las obras realizadas en colaboración.**

Los coautores de una obra realizada en colaboración serán los primeros cotitulares de los derechos morales y patrimoniales sobre dicha obra. Sin embargo, si una obra realizada en colaboración se puede dividir en partes independientes, los coautores podrán beneficiarse de derechos independientes sobre esas partes, a la vez que serán cotitulares de los derechos de la obra realizada en colaboración considerada como un todo.

##### **Artículo 16. Modificación de una obra musical.**

Cuando una obra se traduzca o adapte a otro idioma, los traductores o adaptadores serán autores de sus propias traducciones o adaptaciones y no adquirirán el derecho del titular, pues el carácter indicado lo conservará para todos los efectos legales, el autor de la obra original.

##### **Artículo 17. Obra colectiva.**

- I. Los derechos patrimoniales sobre la obra colectiva, salvo estipulación en contrario, se presumen cedidos a la persona natural o jurídica que la publique bajo su nombre.
- II. A falta de mención expresa, se entenderá que los derechos quedan cedidos al responsable principal de la utilización de la obra.

##### **Artículo 18. Obra anónima.**

- I. Cuando la obra se divulgue en forma anónima, o bien bajo seudónimo, iniciales, sigla o signo que no identifiquen al autor, el editor cuyo nombre aparezca en la obra, será salvo prueba en contrario considerado como representante del autor y, como tal, con derecho a proteger y hacer respetar los derechos del mismo, mientras éste no revele su identidad.
- II. Se exceptúan las obras de cultura tradicional y popular o folklóricas de autor no conocido.

#### **Artículo 19. Sociedad conyugal.**

- I. El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser administrado libremente por el cónyuge autor o derechohabiente del autor.
- II. El cónyuge autor conservará su derecho moral y patrimonial, conforme lo establecido por el Código de Familia.

#### **Artículo 20. Obras creadas bajo dependencia laboral.**

Las obras creadas bajo dependencia laboral, en el marco del contrato de trabajo, o las creadas por empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos, salvo pacto en contrario del contrato, tendrán como titular de los derechos morales y patrimoniales al autor, pero los derechos patrimoniales sobre dicha obra se considerarán transmitidos al empleador en la medida justificada por las actividades habituales del empleador en el momento de creación de la obra.

#### **Artículo 21. Obras creadas por encargo.**

- I. En las obras creadas por encargo, el titular de los derechos patrimoniales es el comitente, cuando se establezca la exclusividad.
- II. El autor de la obra conservará el derecho de explotación cuando la exclusividad no sea expresa.

#### **Artículo 22. Obras derivadas.**

El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras derivadas, puede existir, aun cuando las obras originarias no estén protegidas, pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas creaciones originarias, de manera que el autor de la obra derivada no puede oponerse a que otros traduzcan, adapten, modifiquen o recopilen sus obras originarias, siempre que sean trabajos originales distintos del suyo.

## **TÍTULO II CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR**

### **CAPÍTULO I DERECHOS MORALES**

#### **Artículo 23. Derechos morales.**

- I. El derecho moral es ilimitado en el tiempo, el autor de una obra, independientemente de sus derechos patrimoniales e incluso tras haberlos cedido tendrá derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable para:
  1. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo en los ejemplares de su obra, cuando se realice cualesquiera de los actos relativos a la utilización de la misma.
  2. Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra, que pueda perjudicar el honor o la reputación del autor.

3. A conservar el anonimato o a utilizar un seudónimo.
  4. Conservar su obra inédita o anónima, pudiendo exigir que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada. Después del fallecimiento del autor, no podrá divulgarse su obra si éste lo hubiera prohibido por disposición testamentaria, ni podrá revelarse su identidad si aquél, por el mismo medio, no lo hubiera autorizado.
  5. Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.
- II. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma, se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que le ocasionen.
- III. A la muerte del autor, el ejercicio del derecho moral corresponderá sin límite de tiempo a los causahabientes.
- IV. La violación de cualesquiera de estos derechos dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios independientemente de las otras acciones contempladas en este Libro.

## **CAPÍTULO II**

### **DERECHOS PATRIMONIALES**

#### **Artículo 24. Derechos patrimoniales.**

El autor de una obra protegida o sus causahabientes tendrán el derecho exclusivo a gozar de la explotación de su obra en cualquier forma y obtener beneficios, salvo limitaciones establecidas en el presente Libro.

#### **Artículo 25. Ámbito de aplicación.**

- I. El derecho exclusivo de explotación comprende entre otros la facultad de realizar, autorizar o prohibir:
1. La reproducción de su obra total o parcialmente por cualquier forma o procedimiento;
  2. La traducción, adaptación, arreglo o cualquier transformación de la obra;
  3. La comunicación pública de la obra por cualquier medio conocido o conocerse, que sirva para difundir las palabras, signos, los sonidos o las imágenes;
  4. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o préstamo público, alquiler o cualquier otra transferencia de propiedad o de posesión;
  5. La importación al territorio nacional de ejemplares producidos ilegalmente de la obra.
  6. La radiodifusión de su obra, y
  7. La representación o ejecución de su obra en público.

Cada una de las modalidades citadas son independientes entre sí.

- II. La explotación de la obra por cualquier forma y en especial mediante alguno de los actos enumerados en este artículo, es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones establecidas en el presente Libro.

#### **Artículo 26. Derecho de importación.**

- I. El derecho de importación confiere al titular de los derechos de autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio nacional, del original o copias de las obras protegidas, sin perjuicio de obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas.
- II. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias en fronteras, como obtener el retiro o suspender la circulación de ejemplares que ya hubieren ingresado. El derecho de importación no afectará los ejemplares que formen parte del equipaje personal.

#### **Artículo 27. Derecho de distribución.**

- I. El derecho de distribución otorga al titular de los derechos de autor, la facultad de poner a disposición del público el original o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, préstamo público o cualquier otra forma.
- II. El autor de una obra arquitectónica u obra de arte aplicada no puede oponerse a que el propietario arriende la obra o construcción.

### **CAPÍTULO III DURACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES**

#### **Artículo 28. Término de duración del derecho de autor.**

La duración de los derechos patrimoniales concedida por el presente Libro será por toda la vida del autor y por noventa (90) años después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios.

#### **Artículo 29. Período de protección en obras colectivas.**

Los derechos patrimoniales sobre las obras colectivas, audiovisuales, durarán noventa (90) años a partir de su publicación, exhibición, fijación, transmisión y utilización, según corresponda o, si no hubieran sido publicados, desde su creación.

#### **Artículo 30. Período de protección en obras anónimas y seudónimas.**

- I. En las obras anónimas que no sean las folklóricas o de cultura tradicional y popular y en las obras seudónimas, los derechos patrimoniales durarán noventa (90) años desde la divulgación de la obra.
- II. Si durante el período de protección no se conociera la identidad del autor de la obra publicada bajo seudónimo, se la considerará anónima.

### **Artículo 31. Cómputo de los plazos.**

- I. Los plazos establecidos en este capítulo se computarán desde el día 1º de enero del año siguiente al de la muerte o al de la publicación, exhibición, fijación transmisión, utilización o creación, según corresponda.
- II. En la obra colectiva, el período de protección correrá a partir de la muerte del último coautor. Si una obra colectiva se diere a conocer por partes, el período de protección correrá a partir de la fecha de publicación del último suplemento, parte o volumen.
- III. En las obras anónimas y seudónimas, si pasados noventa (90) años desde la divulgación de la obra, el autor revelara su identidad de modo fehaciente durante su vida o por testamento, se aplicará el período de protección a partir de la muerte del autor, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

### **Artículo 32. Duración de la protección para las obras de artes aplicadas.**

El plazo de protección de los derechos patrimoniales sobre la obra de arte aplicada, expira a los cincuenta (50) años desde la realización de la obra.

### **Artículo 33. Extinción de derecho patrimonial privado.**

Vencido el plazo de protección, la extinción del derecho patrimonial determina la entrada de la obra a la sociedad de gestión colectiva que corresponda y dominio público.

## **TÍTULO III DISPOSICIONES ESPECIALES A CIERTAS OBRAS**

### **CAPÍTULO I MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

#### **Artículo 34. Alcance.**

- I. Los derechos patrimoniales de autor de artículos, guiones, libretos, dibujos, fotografías y demás producciones sin firma, aportados por el personal de redacción y producción de la empresa sujeto a contrato de empleo, se consideran cedidos, a las empresas de impresión, radio, televisión y otros medios de comunicación social.
- II. En el caso de publicarse con firma, se consideran cedidos sólo los derechos de publicación por la empresa, reteniendo los autores todos los demás derechos amparados en este Libro.

### **CAPÍTULO II CULTURA TRADICIONAL Y POPULAR, FOLKLORE Y ARTESANÍA**

#### **Artículo 35. Alcance.**

En las creaciones o adaptaciones, basadas en la tradición, expresadas en un grupo de individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitologías, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, serán protegidos los derechos de las comunidades de conformidad a normas nacionales y convenios internacionales ratificados por el Estado.

**Artículo 36. Obra del folklore.**

- I. Las obras del folklore de acuerdo con la definición establecida en el presente Libro, para los efectos de su utilización como obras literarias y artísticas, serán consideradas como obras pertenecientes al patrimonio nacional, sin perjuicio de las normas de protección que puedan ser adoptadas por otras instituciones del Estado o por acuerdos internacionales.
- II. Es obligatoria la mención del origen de las obras, con una referencia, en lo posible, clara de la Comunidad de la que proceden.

**Artículo 37. Obra de artesanía y diseño artesanal.**

Las artesanías y el diseño artesanal serán protegidos por las normas generales del presente Libro y especialmente por aquéllas referidas a las artes plásticas y al patrimonio nacional.

**CAPÍTULO III  
PROGRAMAS DE ORDENADOR**

**Artículo 38. Alcance.**

- I. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales.
- II. La protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.

**Artículo 39. Ámbito de aplicación.**

- I. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:
  1. una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de seguridad o resguardo;
  2. fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa y,
  3. salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.
- II. Se requerirá la autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.



#### **Artículo 40. Secreto autoral.**

Constituyen secreto autoral las especificaciones del soporte lógico, los algoritmos, los programas fuente, el diseño del producto, los diagramas de flujo, heurísticas y demás medios de creación del soporte lógico y el autor o titular no está obligado a revelar tales elementos.

#### **Artículo 41. Licencia de uso.**

El titular de los derechos de autor mediante contrato de adhesión otorgará una licencia de uso.

#### **Artículo 42. Alquiler o préstamo.**

- I. El programa de ordenador será considerado parte esencial del contrato, cuando la funcionalidad del objeto, dependa directamente del programa de ordenador, que será suministrado por el referido objeto.
- II. Cuando el programa de ordenador no sea la parte esencial del contrato, no se aplicará el derecho de arrendamiento.

### **CAPÍTULO IV OBRAS ARQUITECTÓNICAS**

#### **Artículo 43. Alcance.**

- I. El autor de las obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hagan necesarias durante la construcción de la obra o con posterioridad, pero el autor de la obra de arquitectura debe ser consultado sobre las modificaciones que fueren necesarias realizar durante la construcción o con posterioridad a ella y tendrá preferencia para el estudio y realización de éstas.
- II. En cualquier caso, si las modificaciones se realizaran sin el consentimiento del autor, éste podrá rechazar la paternidad de la obra modificada y quedará prohibido al propietario para invocar en lo futuro el nombre del autor del proyecto original, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el presente Libro.

#### **Artículo 44. Autorización del arquitecto.**

La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de su autor, en los términos que él señale, para utilizarlo en otras obras.

### **CAPÍTULO V OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS Y OTRAS OBRAS**

#### **Artículo 45. Derecho del adquirente.**

- I. El adquirente de un objeto material que contiene una obra de arte, tiene, salvo pacto en contrario, el derecho de exponer públicamente la obra, a cualquier título.

- II. Este derecho no se aplicará a las personas que hayan adquirido los originales o los ejemplares de una obra mediante alquiler o cualquier otro medio sin haber adquirido el derecho de propiedad.

#### **Artículo 46. Derecho de participación.**

- I. Si el original de una obra de arte plástico, o el manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido en subasta pública o si en dicha reventa interviniera directa o indirectamente un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al autor o a sus herederos, según corresponda, una participación equivalente al cinco por ciento (5%) del precio de venta, gozando de este derecho que es irrenunciable e inalienable, salvo pacto en contrario, siempre que se mejore la situación del autor.
- II. El comerciante se constituye en depositario del porcentaje establecido a favor, del autor o titular, el mismo que podrá ejercitar su derecho de cobro en cualquier momento a partir de la venta.

#### **Artículo 47. Sujetos responsables del cumplimiento.**

Los responsables de establecimientos comerciales, el comerciante o cualquier otra persona que haya intervenido en la reventa serán solidariamente responsables con el vendedor por el pago de este derecho y deberán notificar la reventa a la sociedad de gestión correspondiente, o en su defecto, al autor o sus derechohabientes, en el plazo de tres meses, acompañando la documentación para la práctica de la liquidación.

#### **Artículo 48. Los retratos y bustos.**

- I. El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la misma y a su muerte, de sus causahabientes.
- II. La publicación del retrato o busto es libre, cuando se relacione, únicamente, con fines científicos, didácticos, culturales con hechos, acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.

#### **Artículo 49. Obras fotográficas.**

- I. El autor de una obra fotográfica o el realizador de una mera fotografía sobre una persona, deberá contar con la autorización de la persona fotografiada, y a su muerte, de sus causahabientes, para ejercer sus derechos de autor o conexos, según el caso.
- II. La autorización deberá constar por escrito y referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen.
- III. La utilización de la imagen será lícita cuando haya sido captada en el curso regular de acontecimientos públicos y responda a fines culturales o informativos, o se realice en asociación con hechos o acontecimientos de interés público.

#### **Artículo 50. Transferencia y derechos.**

El autor podrá enajenar el original de su obra pictórica, escultórica y de artes figurativas en general. En este caso, salvo expreso pacto en contrario, se considerará que no ha concedido al adquirente ningún derecho autoral sobre su obra.

## **TÍTULO IV LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR**

### **CAPÍTULO ÚNICO LIMITACIONES DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES**

#### **Artículo 51. Derecho de cita.**

- I. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido citar a un autor, entendiéndose por cita la inclusión, en una obra propia, de cortos fragmentos de obras ajenas, siempre que se trate de obras ya divulgadas, se indique la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada y a condición de que la inclusión se realice a título de cita, y no resulten abusivas, ni causen perjuicio a la normal explotación de la obra o que pudiera perjudicar de forma injustificada a los intereses legítimos del autor o titular.
- II. El derecho de cita no se aplica a la utilización de fragmentos de obras con fines de lucro, en cuyo caso deberá mediar contrato con el titular.

#### **Artículo 52. Libre utilización para la enseñanza.**

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, son lícitos los siguientes actos, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos, ni están sujetos a remuneración alguna:

1. Es permitido sin la autorización del autor y sin pago de una remuneración siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, utilizar una obra lícitamente publicada a título de ilustración de breves extractos en publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o audiovisuales destinadas a la enseñanza y educación.
2. Se permite la reproducción por medios reprográficos de artículos, extractos de obras breves lícitamente publicadas, para la enseñanza aprovechamiento pedagógico en instituciones educativas, culturales, científicas, artísticas, siempre que no haya fines de lucro, en cuanto justifique el objeto perseguido y con la condición de que se haga conforme a los usos lícitos.

#### **Artículo 53. Libre reproducción reprográfica por bibliotecas y archivos.**

Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 23 y 24, una biblioteca o un archivo cuyas actividades no estén directa o indirectamente encaminadas a obtener un beneficio comercial, podrán, sin la autorización del autor o de cualquier otro titular del derecho de autor, realizar por reproducción reprográfica, copias sueltas de una obra:

1. Cuando la obra reproducida sea un artículo o una obra corta o un breve extracto de un escrito distinto o de un programa de ordenador, con o sin ilustraciones, publicado en una colección de obras o en un número de un diario o de una publicación periódica, y cuando el objetivo de la reproducción sea satisfacer la demanda de una persona natural;
2. Cuando se realice la indicada copia con el fin de preservar y, de ser necesario en caso de que esté perdida, destruida o inútil, reemplazar un ejemplar, o de reemplazar en una colección permanente de otra biblioteca o de otro archivo, un ejemplar que se haya perdido, destruido o que sea inútil, siempre que la indicada obra no se encuentre en el comercio.

#### **Artículo 54. Libre utilización con fines de información.**

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido sin autorización del autor y sin pago de una remuneración, pero con sujeción a la obligación de indicar la fuente y el nombre del autor:

1. La reproducción en la prensa, la radiodifusión o la comunicación al público de artículos o comentarios sobre economía, política, religión o sobre sucesos de actualidad y de interés colectivo, o una obra radiodifundida del mismo tipo, siempre y cuando el derecho de reproducción, radiodifusión y de comunicación al público no esté expresamente reservado.
2. La reproducción o puesta a disposición del público, con el fin de informar sobre acontecimientos de actualidad, mediante la fotografía, cinematografía, radiodifusión o la comunicación por cable al público, una obra vista o audible en el transcurso de un acontecimiento de esa índole, en la medida justificada por el propósito de información que se persiga.
3. La reproducción en la prensa, radiodifusión o comunicación al público con fines informativos y en la medida justificada por el objetivo que se persiga, de conferencias, discursos políticos, alocuciones, sermones o cualesquiera otras similares dirigidos al público, así como discursos pronunciados durante juicios, con fines informativos.

#### **Artículo 55. Libre utilización de imágenes de obras expuestas permanentemente en lugares públicos.**

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido sin autorización del autor y sin pago de una remuneración:

La reproducción, radiodifusión o comunicación por cable al público de una imagen de una obra de arquitectura, obra de bellas artes, obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas expuesta permanentemente en lugares abiertos al público, salvo si la imagen de la obra constituye el elemento principal de la reproducción, radiodifusión o comunicación y si se utiliza con fines de lucro.

#### **Artículo 56. Libre reproducción y adaptación de programas de ordenador.**

- I. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, es permitido sin autorización del autor y sin pago de una remuneración hacer una copia o la adaptación de ese programa, a condición de que sea indicada copia o sea mencionada adaptación:
  - 1) Necesaria para la utilización del programa de ordenador a los efectos para los que se obtuvo el programa, o
  - 2) Necesaria para archivar o para reemplazar el ejemplar lícitamente poseído, en el caso de que éste se haya perdido, destruido o sea inútil.
- II. No estará permitido hacer copias o adaptaciones con fines distintos de los previstos en el párrafo 1; toda copia o toda adaptación serán destruidas si la posesión prolongada de la copia del programa de ordenador dejara de ser lícita.

#### **Artículo 57. Libre grabación efímera por organismos de radiodifusión.**

Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 del presente Libro, un organismo de radiodifusión podrá efectuar, sin la autorización del autor y sin pago de otra remuneración, por sus propios medios y para sus propias emisiones, grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo de seis (6) meses.

#### **Artículo 58. Libre uso de una parodia.**

Es permitido realizar la parodia de una obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con ésta, ni ocasione daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista, intérprete o ejecutante, según el caso.

#### **Artículo 59. Libre interpretación o ejecución pública.**

Son lícitos los siguientes actos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 24 del presente Libro, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos, ni están sujetos a remuneración alguna:

1. La ejecución y representación de una obra en actos oficiales de instituciones del Estado o ceremonias religiosas, de asistencia gratuita, siempre que los participantes en la comunicación no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto.
2. En el marco de las actividades de una institución docente, para el personal y los estudiantes de dicha institución, a condición de que el público se componga exclusivamente del personal y de los estudiantes de la institución o de los padres y vigilantes o de otras personas directamente vinculadas a las actividades de la institución.

#### **Artículo 60. Copia privada.**

Respecto a las obras ya divulgadas lícitamente, se permite sin autorización del autor:

1. Las reproducciones fotomecánicas para el exclusivo uso personal, como la fotocopia y el microfilme, siempre que se limiten a pequeñas partes de una obra protegida o a obras agotadas y sin perjuicio de la remuneración equitativa que deban abonar a favor de los titulares, los usuarios, instituciones y demás organizaciones que presten este servicio.
2. Cuando la reproducción mencionada en el numeral anterior, se refiere a una obra audiovisual o a una obra incorporada en una grabación sonora, el autor o cualquier otro titular del derecho de autor, tendrá derecho a una remuneración equitativa.
3. La remuneración equitativa, que establece el numeral 2, deberá pagarse:
  - a) Por el fabricante del equipo o de los soportes materiales u otros conocidos o por conocerse normalmente utilizados para la reproducción privada con fines personales de las obras mencionadas en el numeral 2, excepto cuando tal equipo o soportes materiales se exporten, o

- b) Por los importadores de tal equipo y soportes, salvo cuando la importación la efectúe una persona individual con fines personales.
- 4. La remuneración equitativa, establecida en los numerales 1 y 2 precedentes, será recaudada por la respectiva Sociedad de Gestión Colectiva. El importe de la remuneración equitativa y las condiciones de su pago serán fijas por la respectiva reglamentación.
- 5. Las respectivas Sociedades de Gestión Colectiva, distribuirán el setenta por ciento (70%) de la remuneración equitativa a los autores u otros titulares del derecho de autor y derechos conexos, de aquellas obras de las cuales, se determine que han sido objeto de una reproducción privada, como las establecidas en los numerales 1 y 2.
- 6. El treinta por ciento (30%) restante de la remuneración serán retenidos por la respectiva sociedad de gestión colectiva recaudadora. La reglamentación correspondiente establecerá, el procedimiento de recaudación de los pagos realizados por los usuarios, instituciones y demás organizaciones que presten este servicio.

#### **Artículo 61. Cartas y misivas.**

La propiedad material de una carta pertenece a la persona a quien ha sido dirigida, pero su autor conserva sobre ellas todos los derechos intelectuales. Las personas a quienes hayan sido dirigidas, si no obtuvieren la autorización del autor o sus causahabientes luego de haber empleado razonables esfuerzos para obtenerla, podrán solicitar en la vía sumaria, al Juez Instructor en lo Civil la autorización para divulgarlas, en forma y extensión necesaria para defender su honor personal.

## **TÍTULO V TRANSMISIÓN Y CONTRATOS**

### **CAPÍTULO I TRANSMISIÓN O SUCESIÓN**

#### **Artículo 62. Transferencia.**

- I. Los derechos patrimoniales del autor pueden ser transmitidos mediante mandato o presunción legal, cesión entre vivos o *mortis causa* o por cualquier medio admitido en derecho.
- II. En caso de que en la sucesión de un coautor, su derecho de autor no corresponda a persona o entidad alguna, acrecerá, por partes iguales a los demás coautores. El mismo acrecimiento se producirá cuando un coautor haya renunciado válidamente a su derecho patrimonial de autor.

#### **Artículo 63. Transferencia de los herederos.**

- I. Para autorizar cualquier tipo de explotación de la obra, se requerirá del consentimiento de los herederos que representen la cuota mayoritaria, a través de la Sociedad de Gestión Colectiva que le corresponda.
- II. Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del rendimiento económico total, los gastos efectuados y entregará la participación que les corresponda a quienes no hubieren expresado su consentimiento.

## **CAPÍTULO II CONTRATOS EN GENERAL**

### **Artículo 64. Generalidades.**

- I. El autor o sus causahabientes pueden ceder el derecho patrimonial de explotación de la obra a otra persona, mediante el uso de una o de todas las formas de explotación reservadas al autor por el presente Libro, y ceder estos derechos total o parcialmente.
- II. Para que estos actos sean oponibles a terceros deberán hacerse por contrato en documento privado y registrarse en la Oficina Nacional Competente, con las siguientes formalidades establecidas en el presente Libro.
  1. Las diversas formas de explotación son independientes entre sí, toda transmisión de los derechos de explotación de la obra se regirá por lo pactado en el contrato escrito, se presume onerosa, durante el tiempo determinado en el mismo, la transmisión exclusiva debe ser expresamente convenida, se circunscribe en el ámbito territorial pactado.
  2. En ningún caso se podrá utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes a lo pactado en la transmisión.
  3. En todos los contratos se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera sus obligaciones, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan al perjudicado.
  4. Salvo estipulación en contrario, los autores de las obras reproducidas en publicaciones periódicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal publicación en las que se hayan insertado.
  5. La transmisión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato escrito, el autor conservará el derecho de realizar la edición independiente en forma de colección.
  6. Es nula la cesión sobre el conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, a menos que esté expresamente pactada y no exceda de cinco años.
  7. Se entenderán reservados en favor del autor o los causahabientes, todos los derechos que no hayan sido expresamente pactados.
  8. La cesión del derecho de reproducción implicará la del derecho de distribución mediante venta de los ejemplares cuya reproducción se autoriza, cuando ello deduzca naturalmente del contrato o sea indispensable para cumplir su finalidad.
  9. La cesión exclusiva de los derechos patrimoniales, confiere al cesionario el derecho de uso y explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros o frente al propio autor, también confiere al cesionario el derecho a otorgar cesiones o licencias a terceros, expresamente autorizados por el autor o artista y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación lícita de la obra, sin perjuicio de los derechos morales del autor.

10. En la cesión no exclusiva, el cesionario está autorizado únicamente a explotar la obra en la forma establecida en el contrato.
11. Es nula cualquier estipulación por la cual se prohíba o comprometa al autor no crear alguna obra en el futuro.
12. El derecho de utilización de una obra, adquirida por medio de contrato, sólo podrá cederse a un tercero con el consentimiento del autor y del artista. Este consentimiento se considerará otorgado cuando el autor o el artista no lo deniegue dentro del plazo de quince (15) días siguientes al recibo de la petición escrita del derechohabiente o del presunto cesionario. Esta advertencia deberá constar expresamente en la petición.
13. El pleno ejercicio del derecho de renovación se hará efectivo a los sesenta (60) días de comunicado el autor o sus causahabientes, sin necesidad de ninguna otra formalidad, salvo si el ejercicio del derecho de uso cedido resulte imposible para su titular o si dicho titular se negare a ejercerlo o si el mencionado plazo fuere con daño emergente o lucro cesante para el autor.
14. La utilización del derecho de revocación no afecta los derechos y obligaciones de las partes derivadas del contrato, o de otras disposiciones legales que implicaren el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de una de ellas.

#### **Artículo 65. Las controversias.**

Las controversias que surjan entre el cedente y el cesionario serán tramitadas por la vía Civil, si las partes no acuerdan, someterlas a arbitraje, el mismo que se realizará ante la Oficina Nacional Competente.

### **CAPÍTULO III CONTRATOS DE EDICIÓN**

#### **Artículo 66. Alcances.**

Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria o artística o sus causahabientes, se obliga a entregarla al editor y éste se obliga a reproducirla, distribuirla y comercializarla por su propia cuenta, pagando al autor las prestaciones económicas convenidas.

#### **Artículo 67. Regalías.**

En todo contrato de edición deberá pactarse la remuneración o regalía que corresponda al autor o titular de la obra, la que en ningún caso será inferior al diez por ciento (10%) del precio de venta al público. A falta de estipulación, se presumirá que corresponde al autor o titular dicho porcentaje.

#### **Artículo 68. Contenido del contrato.**

I. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior y de las estipulaciones accesorias que las partes estimen convenientes, en el contrato deberá constar lo siguiente:

1. Identificación del autor, del editor y de la obra.



2. Si la obra es inédita o no.
3. Si la autorización es exclusiva o no.
4. El plazo y las condiciones en que debe ser entregado el original.
5. El plazo convenido para poner en venta la primera edición.
6. El plazo o término del contrato.
7. La cantidad de ejemplares que deben imprimirse en cada edición.
8. La cantidad máxima de ejemplares que pueden editarse dentro del plazo o término del contrato.
9. La forma cómo será fijado el precio de venta de cada ejemplar al público. Si no existe convenio respecto al precio de venta, el editor está facultado a establecerlo, siempre que no atente a los intereses del autor.

**Artículo 69. Obligación de notificar.**

Si el autor ha celebrado con anterioridad un contrato de edición sobre la misma obra, o ha sido publicada con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas circunstancias al editor antes de la celebración del contrato. De no hacerlo, responderá de los daños y perjuicios que ocasionare.

**Artículo 70. Limitaciones del editor.**

El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras modificaciones, sin consentimiento del autor.

**Artículo 71. Otras limitaciones.**

- I. El editor no podrá disponer el inicio de una nueva impresión o edición que hubiere sido autorizada en el contrato, sin dar el correspondiente aviso al autor, el que conservará el derecho de hacer modificaciones, correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes.
- II. Cuando las modificaciones hagan mas onerosa la edición, el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario.
- III. Si las modificaciones implicaren cambios fundamentales en el contenido o forma de la obra y éstas no fueren aceptadas por el editor, se considerará el retiro de la obra, debiendo el autor indemnizar por daños y perjuicios que se causaren a terceros.
- IV. El derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo autor, no confiere al editor el derecho para editarlas conjuntamente. Asimismo, el derecho de editar las obras conjuntas de un autor no confiere al editor el derecho de editarlas separadamente.

## **Artículo 72. El plazo.**

- I. Si el contrato de edición tuviere plazo fijo para su terminación y al expirar el editor conservare ejemplares no vendidos, el autor podrá comprarlos al precio de costo más el diez por ciento (10%), en el término de sesenta (60) días a partir del vencimiento del plazo, transcurridos los cuales el editor podrá continuar vendiéndolos en las mismas condiciones.
- II. Si después de un año de hallarse la obra en venta al público no se hubiere vendido más del treinta por ciento (30%) de los ejemplares que fueron impresos, el editor podrá dar por terminado el contrato y liquidar los ejemplares restantes a un precio inferior al pactado o inicialmente fijado por el editor, reduciendo la remuneración del autor proporcionalmente al nuevo precio inferior, si éste se hubiera pactado en proporción a los ejemplares vendidos.

En este caso el autor tendrá derecho, a comprar los ejemplares no vendidos al nuevo precio de venta fijado menos un cincuenta por ciento (50%) de descuento, para lo que tendrá un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que el editor le hubiere notificado su decisión de liquidar tales ejemplares. Si el autor hiciere uso de este derecho de compra, no podrá cobrar regalías por tales ejemplares.

- III. El contrato de edición concluye cualquiera sea su plazo de duración al agotarse la edición.

## **Artículo 73. Requisitos de la publicación.**

Independientemente de los derechos de autor consagrados para las obras literarias, toda persona que publique una obra está obligada a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, al menos las siguientes indicaciones:

1. Título de la obra, nombre o seudónimo del autor, o la expresión de que la obra es anónima, compilador, adaptador o autor de la versión, cuando lo hubiere.
2. La mención de reserva ©, seguido del nombre del titular del derecho de autor, año y lugar de la primera publicación, y de la publicación actual, precedido del símbolo ©, nombre y dirección del editor de la edición actual, el del traductor, si lo hubiere y el del editor de la traducción, siempre que el autor lo requiera las siglas de la sociedad de gestión que lo representa.
3. Nombre y dirección del editor y del impresor.
4. Número de depósito legal y del registro (ISBN) Número estándar internacional del libro.

## **Artículo 74. Liquidación de regalías.**

- I. El editor deberá presentar al autor, las liquidaciones que correspondan en proporción a los ejemplares vendidos, la cual deberá ser pagada en liquidaciones semestrales o en plazos menores convenidos contractualmente, a partir de la fecha de puesta en venta, reservándose el autor el derecho de examinar los registros y comprobantes de venta de quienes editen, distribuyan o vendan dichas obras, información que obligatoriamente deberán llevar los editores, distribuidores y vendedores.
- II. La falta del cumplimiento del pago de la referida obligación dará derecho al autor para rescindir el contrato sin perjuicio del reconocimiento de los daños y perjuicio que se le hayan causado.

#### **Artículo 75. La quiebra del editor.**

La quiebra del editor no produce resolución del contrato, salvo en el caso en que no hubieran iniciado la impresión de la obra, los derechos del editor quebrado no pueden ser cedidos si se ocasionan perjuicio al autor o a la difusión de su obra.

#### **Artículo 76. Derechos del editor.**

Durante la vigencia del contrato de edición, el editor tendrá derecho a iniciar y proseguir todas las acciones consagradas por ley contra los actos de defraudación que perjudiquen su derecho, sin perjuicio del derecho que tiene el autor y sus causahabientes para adelantar las mismas acciones, en forma conjunta o separada.

#### **Artículo 77. Fallecimiento del editor.**

Si antes de terminar la elaboración y entrega de los originales de la obra el autor muere o sin culpa se imposibilita para finalizarla, el editor podrá dar por terminado el contrato, sin perjuicio de los derechos que se hayan causado a favor del autor. Si optara por publicar la parte recibida del original, podrá reducir proporcionalmente la remuneración pactada, a menos que el autor o sus derechohabientes manifiesten su voluntad de no publicar la obra inconclusa. En este caso si después el cedente o sus derechohabientes, ceden el derecho de publicar la obra a un tercero, deben indemnizar al editor por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato.

### **CAPÍTULO IV CONTRATOS DE ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS**

#### **Artículo 78. Alcances.**

- I. Salvo pacto en contrario, la cesión de artículos para periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, solo confiere al editor o propietario de la publicación el derecho de insertarlo por una sola vez quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente.
- II. Si el artículo cedido aparece con la debida firma del autor o su seudónimo, el cesionario no puede modificarlo. Si el editor o propietario del medio de comunicación lo modifica, sin el consentimiento del cedente, éste puede pedir la inserción íntegra y fiel del artículo cedido, sin perjuicio del derecho a reclamar indemnización.
- III. Cuando el artículo cedido deba aparecer sin la firma del autor, el editor o propietario del medio puede hacer modificaciones o cambios de forma, sin el consentimiento del cedente.
- IV. Lo establecido en el presente artículo se aplicará en forma análoga, a los dibujos, chistes, gráficos, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social.

## **CAPÍTULO V**

### **CONTRATO DE INCLUSIÓN FONOGRAFICA**

#### **Artículo 79. Alcances.**

- I. Por el contrato de inclusión fonográfica el autor de una obra musical, su representante o la sociedad de gestión colectiva que lo representa, autoriza a un productor de fonogramas, a cambio de una remuneración, a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un disco fonográfico, una banda magnética, un soporte digital, una película o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción y venta de ejemplares.
- II. Esta autorización no comprende el derecho de ejecución pública.
- III. El productor del fonograma deberá hacer esta reserva sobre la etiqueta que deberá ser adherida al disco, dispositivo o mecanismo en que se produzca el fonograma.

#### **Artículo 80. Ámbito de aplicación.**

- I. El derecho otorgado al productor fonográfico no podrá ir en menoscabo de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Salvo estipulación en contrario, se entenderá que la autorización de radiodifundir no implica la autorización de:
  1. Permitir a otros organismos de radiodifusión que transmitan la interpretación o ejecución.
  2. Fijar la interpretación o ejecución.
  3. Fijar la interpretación o ejecución, o reproducir la fijación.
  4. Fijar la interpretación o ejecución, y de reproducir esta fijación no implica la autorización de transmitir la interpretación o la ejecución a partir de la fijación o sus reproducciones.
  5. El derecho de ejecución pública.
- II. Desde el momento en que los artistas intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de sonidos, de imágenes o de imágenes y sonidos no tendrán aplicación los numerales 2 y 3 precedentes.
- III. No deberá interpretarse ninguna de las disposiciones anteriores como limitativa de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de contratar en condiciones más favorables para ellos cualquier utilización de su interpretación o ejecución.

#### **Artículo 81. Obligación del productor en la publicación.**

- I. El productor fonográfico está obligado a consignar en lugar visible y permanentemente fijadas, en todos los ejemplares del fonograma, en que la obra haya sido registrada, inclusive en los eventualmente destinados a la distribución gratuita, las siguientes indicaciones, sin las cuales no podrán ser puestos a la venta:

1. Título de la obra, nombres de los autores o sus seudónimos, del arreglista u orquestador y del autor de la versión cuando la hubiere.
  2. Si la obra fuere anónima así se hará constar y mientras no se identifique al autor deberá llevar la sigla: A.A.D.D. -autor en averiguación, derechos en depósito- seguido del nombre de la sociedad de gestión.
  3. Nombres de los intérpretes. Los conjuntos orquestales o corales serán indicados con denominación propia y con el nombre de su director.
  4. Siglas de las sociedades a que pertenecen los autores y los artistas.
  5. La mención de reserva del derecho con el símbolo (P) inscrita dentro de un círculo, seguido del año de la primera publicación.
  6. Denominación del productor fonográfico.
  7. La frase: "Quedan reservados todos los derechos del autor, del artista y productor del fonograma. Está prohibida la reproducción, alquiler o préstamo público", o cualquier otra forma de comunicación pública del fonograma.
- II. Las indicaciones que, por falta de lugar adecuado no fuere posible consignar directamente sobre los ejemplares que contenga la reproducción serán obligatoriamente impresas en el sobre, o folleto adjunto.

## **Artículo 82. Regalías.**

- I. La remuneración mínima del autor por concepto de regalías fonomecánicas será del nueve por ciento (9%) sobre el precio de venta al público de cada ejemplar vendido que incluya obras del autor, conforme a las modalidades reconocidas en los contratos colectivos entre las sociedades de autores y compositores y los productores de fonogramas de alcance internacional. Se sujeta a esta disposición los fonogramas importados sean de autores nacionales o extranjeros.
- II. Será nulo todo pacto en contrario, a menos de que se trate de mejorar condiciones para el autor.
- III. El productor de fonogramas deberá llevar un sistema de registro que permita la comprobación en cualquier tiempo de dicha cantidad.
- IV. El autor o sus representantes podrán verificar la exactitud de la liquidación correspondiente mediante la inspección de los talleres, almacenes, depósitos y oficinas del productor, ya sea personalmente o por representantes autorizados.
- V. Cualquier cambio en el precio de venta al público de los fonogramas, deberá ser previamente notificada a los autores o a la sociedad que lo representa.
- VI. Para el desaduanamiento de los fonogramas en cualquier soporte, la autoridad aduanera requerirá la autorización de la sociedad de gestión correspondiente.

**Artículo 83. Derecho a perseguir judicialmente.**

- I. El autor, el artista o sus representantes, así como el productor de fonogramas podrán conjunta o separadamente perseguir en la vía civil, penal o administrativa según corresponda, la producción o utilización ilícita de los fonogramas o de los dispositivos o mecanismos sobre los cuales se haya fijado indebidamente la obra.
- II. Las disposiciones señaladas en el presente Libro, referentes al contrato de fonograbación se aplicarán por extensión a las obras literarias que sean utilizadas como texto de una obra musical o fijadas en el fonograma en forma declamada o como texto impreso adjunto al fonograma. El autor de la obra literaria deberá autorizar la utilización de dicho texto en la grabación o impresión mediante los mecanismos establecidos por el presente Libro.

**CAPÍTULO VI  
CONTRATO DE REPRESENTACIÓN**

**Artículo 84. Alcance.**

- I. El contrato de representación es aquel por el cual el autor de una obra literaria, dramática o dramático-musical, coreográfica o de cualquier género similar, autoriza a una persona natural o jurídica para representarla en público, a cambio de una remuneración.
- II. La difusión de una obra, ya sea en vivo, fijada, o transmitida por radio o televisión se considerará pública.

**Artículo 85. Obligación de las partes.**

- I. La obra deberá comenzar a representarse a partir del plazo fijado por el contrato, que no podrá exceder de un año. Si no se fijare término a las representaciones, el empresario debe mantener la obra en cartel mientras la concurrencia del público lo justifique económicamente. Caduca la autorización cuando la obra deja de ser representada por falta de público.
- II. El empresario está obligado a:
  1. Llevar a cabo la representación sin variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidas por el autor, siendo responsable por las que efectúen las personas que participan en el espectáculo;
  2. Garantizar al autor o sus representantes la asistencia a todos los ensayos y la inspección de la representación y la asistencia a la misma gratuitamente.
- III. El autor y el empresario, elegirán de mutuo acuerdo al director y demás intérpretes principales, y para reemplazarlos será necesario el consentimiento del autor. Salvo que se trate de caso fortuito y no admita demora.
- IV. En el caso de que la obra no sea representada en el plazo establecido, el empresario deberá indemnizar al autor mediante una suma que será determinada en el contrato respectivo.

#### **Artículo 86. Respeto al derecho moral.**

El empresario deberá anunciar al público el título de la obra acompañando siempre el nombre o seudónimo del autor y, en su caso, del traductor y adaptador, indicando las características de la adaptación.

#### **Artículo 87. Regalías del derecho patrimonial.**

Cuando la remuneración del autor no hubiere sido fijada contractualmente, le corresponderá como mínimo el diez por ciento (10%) del monto de las entradas recaudadas en cada función o representación y, el quince por ciento (15%) de la misma, en la función del estreno.

#### **Artículo 88. Obligatoriedad de la licencia.**

- I. Las autoridades administrativas competentes autorizarán la realización de espectáculos o audiciones y expedirán las licencias de funcionamiento cuando el responsable de la representación, ejecución o del respectivo establecimiento acredite la autorización o licencia de los titulares del derecho sobre las obras objeto de ejecución, o de la entidad de gestión colectiva que administre el repertorio correspondiente.
- II. Las autoridades competentes no permitirán audiciones y espectáculos públicos sin la presentación de la autorización de los titulares de las obras o de las sociedades de gestión colectivas.

#### **Artículo 89. Sanciones por incumplimiento al pago de los derechos de autor.**

- I. Si el empresario, no pagare la participación que corresponde al autor, a solicitud del autor, representante, titular o sociedad de gestión colectiva que lo represente, la autoridad competente, ordenará la suspensión de las representaciones de la obra o la retención y embargo del producto de las entradas.
- II. En caso de que el mismo empresario represente otras obras de autores diferentes, la autoridad competente dispondrá la retención de las cantidades excedentes de la recaudación, después de satisfechos los derechos de autor de dichas obras y los gastos correspondientes, hasta cubrir el total de la suma adeudada al autor impago.
- III. En todo caso el autor tendrá derecho a que se resuelva el contrato y a retirar la obra de poder del empresario, así como a ejercer las demás acciones a que hubiere lugar.

#### **Artículo 90. Aplicabilidad y concordancia.**

Las disposiciones relativas al contrato de representación son aplicables a las demás modalidades de comunicación pública, en lo pertinente.

### **CAPÍTULO VII OBRA AUDIOVISUAL**

#### **Artículo 91. Alcance.**

Sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras adaptadas o incluidas en ella, la obra audiovisual, será protegida como obra originaria.

#### **Artículo 92. Derecho moral.**

El director o realizador de la obra audiovisual es el titular de los derechos morales de la misma, sin perjuicio de los que correspondan a los diversos autores, y a los artistas intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella con respecto a sus propias contribuciones.

#### **Artículo 93. Coautores.**

Son coautores de la obra audiovisual el director o realizador, los autores del argumento, adaptación, los del guión y diálogos, de las composiciones musicales, con letra o sin ella, creada especialmente para esa obra y los dibujantes si se tratare de una obra de dibujos animados.

#### **Artículo 94. Presunción de titular.**

- I. Sin perjuicio de los derechos que correspondan a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual, los derechos de reproducción, distribución, arrendamiento y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo de la obra, se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este capítulo.
- II. Esta presunción no se aplica a los autores de obras musicales en la obra audiovisual.

#### **Artículo 95. Contenido del contrato de producción.**

- I. Habrá contrato de producción audiovisual cuando los autores de una obra, del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos concedan al productor derecho exclusivo para fijarla, reproducirla y explotarla económicamente.
- II. El contrato deberá contener:
  1. La autorización del derecho exclusivo.
  2. La remuneración convenida por el productor a las personas antes mencionadas, a los autores de las composiciones musicales, con letra o sin ella -creadas especialmente para esta obra-; a los dibujantes, si se tratare de una obra audiovisual de dibujos animados, o que los incluya, al director o realizador y a los intérpretes o ejecutantes que en ella intervengan, así como las modalidades de pago de dicha remuneración.
  3. El plazo para la terminación de la obra.
  4. Además de la remuneración, el productor reconocerá al director una participación autoral del diez por ciento (10%) de las ganancias de la explotación de la obra, una vez deducidos todos los gastos.

#### **Artículo 96. Derecho de disposición de los otros autores.**

Los autores del argumento, del guión y los de la música, podrán disponer libremente de la parte que les corresponde de su contribución a la obra audiovisual, para utilizarla por un medio distinto de comunicación, salvo estipulación en contrario.

#### **Artículo 97. Prohibición de reproducción.**

La cesión del negativo o del medio análogo de reproducción de una obra audiovisual, fotográfica o análoga de parte de su autor, no presume la cesión de los derechos de reproducción, salvo pacto en contrario.



## **CAPÍTULO VIII CONTRATOS DE RADIODIFUSIÓN**

### **Artículo 98. Alcance.**

- I. Contrato de radiodifusión es aquel por el cual el titular de los derechos sobre una creación intelectual autoriza la transmisión de su obra a un organismo de radiodifusión.
- II. Estas disposiciones se aplicarán también a las transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra óptica, u otro procedimiento análogo.

### **Artículo 99. Limitación.**

- I. La autorización para la transmisión de una obra no comprende el derecho de volverla a emitir ni el de explotarla públicamente, salvo pacto en contrario.
- II. Para la transmisión de una obra hacia o en el exterior, se requerirá de autorización expresa de los titulares.

### **Artículo 100. Fijaciones efímeras.**

Los organismos de radiodifusión podrán realizar fijaciones efímeras de obras, interpretaciones y ejecuciones cuyos titulares hayan consentido con su transmisión, con el único fin de utilizarlas en sus propias emisiones por el número de veces estipulado, y están obligadas a destruirlas o borrarlas inmediatamente después de la última transmisión autorizada.

## **CAPÍTULO IX CONTRATOS PUBLICITARIOS**

### **Artículo 101. Alcance.**

- I. Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotación de obras con fines de publicidad o identificación de anuncios o de propaganda a través de cualquier medio de difusión.
- II. Sin perjuicio de lo que estipulen las partes, el contrato habilitará la difusión de los anuncios o propaganda hasta un período máximo de seis meses a partir de la primera comunicación, debiendo retribuirse separadamente por cada período adicional de seis meses.
- III. El contrato deberá precisar el soporte material en los que se reproducirá la obra, cuando se trate del derecho de reproducción, así como el número de ejemplares que incluirá el tiraje si fuere el caso, cada tiraje adicional requerirá de un acuerdo expreso.
- IV. Son aplicables a estos contratos de modo supletorio las disposiciones relativas a los contratos de edición, inclusión fonográfica y producción audiovisual.

## **TÍTULO VI COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS MUSICALES**

### **CAPÍTULO ÚNICO OBLIGACIÓN DE LOS USUARIOS**

#### **Artículo 102. Licencia o autorización.**

La comunicación pública por cualquier medio, inclusive radiodifusión de una obra musical, con palabras o sin ellas o cualquier medio de proyección o difusión conocido o por conocerse, habrá de ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes.

#### **Artículo 103. Responsabilidad y obligación del usuario.**

La persona que tenga a su cargo la dirección de las entidades o establecimientos en donde se realicen actos de comunicación pública de obras musicales está obligada a:

1. Anotar en planillas diarias en riguroso orden, el título de cada obra musical ejecutada, el nombre del autor o compositor de las mismas, el de los artistas intérpretes que en ella intervengan, o del director de grupo u orquesta en su caso, y el nombre o marca del grabador cuando la ejecución pública se haga a partir de una fijación fonográfica.
2. Dichas planillas serán fechadas, firmadas y puestas a disposición de los interesados o representantes, dentro de los treinta (30) días de la fecha en que se efectuó la ejecución o comunicación al público. Los interesados o sus representantes, bajo su responsabilidad, podrán denunciar ante la Oficina Nacional Competente, el incumplimiento total o parcial de esta obligación y el responsable se hará pasible a una multa por un monto equivalente a cincuenta veces el importe de la recaudación.

## **TÍTULO VII ARTISTAS PLÁSTICOS**

### **CAPÍTULO ÚNICO DERECHO DE PARTICIPACIÓN**

#### **Artículo 104. Derecho de participación y regalías.**

- I. Si el original de una obra artística, gráfica, plástica o un manuscrito fuese revendido y en dicho acto interviniera un comerciante en obras de arte o un subastador, en calidad de comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al autor o a sus herederos, una participación equivalente al cinco por ciento (5%) del precio de venta.
- II. Este derecho en favor del autor a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable, inalienable y durará por todo el plazo de protección de los derechos patrimoniales sobre la obra, a favor del autor, sus herederos y legatarios.

#### **Artículo 105. Excepción.**

Las disposiciones precedentes no serán aplicadas a obras de arquitectura, ni a obras de arte aplicada.

## **TÍTULO VIII DERECHOS CONEXOS**

### **CAPÍTULO I GENERALIDADES**

#### **Artículo 106. Derechos conexos.**

La protección ofrecida por las normas del presente título a los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión es independiente y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas, consagradas en el presente Libro. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él, podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. En caso de conflicto se adopta la que más favorezca al autor.

#### **Artículo 107. Limitaciones a los derechos conexos.**

La información de acontecimientos de actualidad a condición de que sólo se utilicen fragmentos cortos de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión de radiodifusión.

La reproducción de un fonograma en el marco de actividades docentes, salvo cuando las interpretaciones o ejecuciones o los fonogramas, hayan sido publicadas como material destinado a la enseñanza.

### **CAPÍTULO II DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES**

#### **Artículo 108. Alcance.**

Los artistas intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir:

- I. La fijación y la reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos referidos.
- II. La primera distribución al público de una fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, mediante la venta o por cualquier otro tipo de transferencia de propiedad.
- III. El alquiler al público o el préstamo público de una fijación de sus interpretaciones o ejecuciones.
- IV. La puesta a disposición del público, por hilo o por medios inalámbricos, de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en un fonograma, de forma de que cada uno pueda tener acceso a ellas del lugar y en el momento que elija individualmente.
- V. Si no se hubiese pactado el termino o plazo de la fijación se presumirá que éste ha sido cedido por siete años a partir de la primera publicación.

**Artículo 109. Representación legal.**

- I. Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro, deberán designar de entre ellos, un representante para la concesión de las autorizaciones mencionadas en este artículo.
- II. Para tal designación, valdrá el acuerdo mayoritario, que deberá formalizarse por escrito.

**Artículo 110. Término de duración de los derechos conexos.**

- I. Los derechos reconocidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes en el presente Libro tendrán una duración de setenta (70) años, contados desde el 1º de enero del año siguiente al de su publicación, de la fijación o al de la interpretación o ejecución si no se hubiera realizado dicha publicación.
- II. El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación.
- III. A su fallecimiento y durante el plazo de los setenta (70) años, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.
- IV. El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los artistas en el presente Libro.

**CAPÍTULO III  
PRODUCTORES DE FONOGRAMAS**

**Artículo 111. Alcance.**

- I. El productor fonográfico tiene respecto de sus fonogramas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, importación, distribución, alquiler, inclusive la distribución por cable, emisión o satélite o cualquier otro medio de utilización.
- II. La primera distribución al público de una fijación de sus fonogramas, mediante la venta o por cualquier otro tipo de transferencia de propiedad.
- III. La puesta a disposición del público, por hilo o por medios inalámbricos, de sus fonogramas, de forma de que cada uno pueda tener acceso a ellas del lugar y en el momento que elija individualmente.

**Artículo 112. Regalías.**

- I. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilice con autorización para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el usuario abonará una remuneración equitativa cada vez que se use, destinada a los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor de fonogramas.

- II. El productor de fonogramas o su licenciado y los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes podrán convenir la forma de percibir los derechos de comunicación al público.

**Artículo 113. Duración de la protección para los fonogramas.**

La duración de la protección de los fonogramas es de setenta (70) años, a partir del final del año en que se haya publicado o fijado el fonograma.

**Artículo 114. Titulares y sociedades de gestión.**

- I. Los fonogramas, que sirvieran para su comunicación pública darán lugar a la percepción de los derechos a favor de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y del productor de fonogramas.
- II. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de la Dirección Nacional del Derecho de Autor propenderá a que la percepción de los derechos de ejecución pública sea efectuada por una sociedad de gestión para que su distribución quede a cargo de la sociedad respectiva.

**CAPÍTULO IV  
ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN**

**Artículo 115. Derechos exclusivos.**

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los siguientes actos:

1. la retransmisión de sus emisiones;
2. la fijación de sus emisiones de radiodifusión;
3. la reproducción de una fijación de sus emisiones; y
4. comunicación al público de sus emisiones de televisión.

**Artículo 116. Duración de la protección para las emisiones de radiodifusión.**

La duración de la protección de las emisiones de radiodifusión es de setenta (70) años, a partir del final del año en que se haya tenido lugar la emisión.

**TÍTULO IX  
RÉGIMEN FISCAL**

**CAPÍTULO ÚNICO  
PATRIMONIO NACIONAL Y DOMINIO PÚBLICO**

**Artículo 117. Alcances.**

- I. Patrimonio Nacional es el régimen al que pasan las obras de autor boliviano que salen de la protección del derecho patrimonial privado, por cualquier causa.

II. Pertenecen al patrimonio nacional:

1. Las obras folklóricas y de cultura tradicional y popular de autor no conocido.
2. Las obras cuyos autores hayan renunciado expresamente a sus derechos.
3. Las obras de autores fallecidos sin sucesores ni causahabientes.
4. Los himnos patrios, cívicos y todos aquellos que sean adoptados por cualquier institución de carácter público o privado.

III. Pertenecen al dominio público las obras extranjeras cuyo período de protección esté agotado.

**Artículo 118. Remuneración del derecho y efectos.**

- I. Para los efectos del numeral 2 del artículo anterior, la renuncia por los autores o herederos de los derechos patrimoniales de la obra, deberá presentarse por escrito e inscribirse en la Oficina Nacional Competente para su publicación.
- II. La renuncia no será válida contra obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de la misma.

**Artículo 119. Uso y explotación gratuito y oneroso.**

La utilización bajo cualquier forma o procedimiento de obras del patrimonio nacional y del dominio público será libre, pero quien lo haga comercialmente, pagará al Estado representado legalmente por la Oficina Nacional Competente, una participación cuyo monto no será menor del diez por ciento (10%) y no mayor del cincuenta por ciento (50%) de aquel monto que se pague a los autores o sus causahabientes por utilización de obras similares sujetas al régimen privado de protección, respetando los derechos morales correspondientes.

**Artículo 120. Destino de las regalías.**

- I. Los montos recaudados por concepto de utilización de obras del patrimonio nacional y dominio público, se aplicarán únicamente y exclusivamente al fomento y difusión de los valores culturales del país.
- II. Las sociedades de gestión colectiva, de acuerdo con la Oficina Nacional Competente, realizarán esos cobros en calidad de agentes de retención.

**Artículo 121. Beneficios del recopilador y de las comunidades de origen.**

El Estado a través de la Oficina Nacional Competente reconocerá del porcentaje recaudado por obras de patrimonio nacional y dominio público, un cuarto para la Oficina Nacional Competente, un cuarto para el recopilador, un cuarto para la sociedad de gestión que corresponda y un cuarto para la comunidad de origen a través de las Organizaciones Territoriales de Base.

**Artículo 122. Porcentajes a aplicar por uso y explotación de las obras.**

Se aplicarán a aquellas que utilicen obras del patrimonio nacional y dominio público, una participación cuyo monto será del diez por ciento (10%) y no mayor del cincuenta por ciento (50%) que el que se pague a los autores o sus causahabientes por utilización de obras similares sujeto al régimen privado de protección, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

1. Libros en general de literatura, arte y ciencias: diez por ciento (10%);

2. Venta de obras originales de las artes plásticas: veinte por ciento (20%);
3. Representaciones teatrales, dramático-musicales, coreográficas y cinematográficas: treinta por ciento (30%);
4. Ejecuciones musicales en locales públicos: cuarenta por ciento (40%);
5. Emisiones radiales o de televisión con o sin hilos y grabaciones de obras musicales: cincuenta por ciento (50%).

## **TÍTULO X**

### **REGISTRO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **GENERALIDADES**

#### **Artículo 123. Registro Nacional de Derecho de Autor.**

- I. El Registro Nacional de Derecho de Autor es público y tiene por objeto establecer un sistema de registro que permita la ejecución eficiente de control, seguimiento y disposición del derecho de autor y derechos conexos garantizando mayor seguridad jurídica a los autores, titulares de los derechos conexos y titulares de los derechos patrimoniales correspondientes y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción.
- II. Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos están protegidos aun cuando no sean registrados.
- III. El Registro Nacional de Derecho de Autor dependiente de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la Oficina Nacional Competente, tiene competencia para tramitar las solicitudes de inscripción de obras, actos y contratos que se refieren a los derechos de autor, de las sociedades de autores, de artistas, intérpretes y ejecutantes y de las demás funciones que se asignen por el presente Libro.

#### **Artículo 124. Derechos y acciones a registrar.**

El Registro Nacional de Derecho de Autor, observará las siguientes disposiciones:

1. En el Registro Nacional de Derecho de Autor podrán inscribirse:
  - a) Las obras que presenten sus autores voluntariamente para ser registradas.
  - b) Convenios o contratos que de cualquier forma confieran, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales de autor o por los que se autoricen modificaciones de una obra.
  - c) Las escrituras, estatutos y reglamentos de las diversas sociedades de autores así como sus reformas y modificaciones, los de las sociedades de artistas intérpretes o ejecutantes y sus reformas, nombramientos y cese de sus directores, administradores y apoderados, tarifas generales y sus modificaciones.

- d) Los convenios o pactos que celebran las sociedades de autores y de artistas intérpretes o ejecutantes con las sociedades extranjeras.
  - e) Los poderes otorgados a personas individuales o colectivas para realizar gestiones ante la Oficina Nacional Competente, cuando la representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar en él y no esté limitado a la gestión de un solo asunto.
  - f) Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colectiva a favor de éstas.
  - h) Los convenios o contratos relativos a derechos conexos.
  - i) Los nombres propios de los autores que, utilizando seudónimo, deseen conservar su anonimato. Este depósito deberá hacerse en sobre lacrado.
  - j) Las características gráficas y distintivas de obras.
2. Para las obras anónimas, la inscripción se hará con el nombre de la persona individual o colectiva responsable de la divulgación. Igual tratamiento se seguirá con las obras seudónimas, salvo el caso en que el seudónimo esté registrado.
  3. Las obras póstumas deberán ser registradas a nombre del autor. Este registro podrán hacerlo los herederos o legatarios o cualquier otra persona individual o colectiva.
  4. Los actos que se transfieran por acto entre vivos o *mortis causa* otorgan fe, previo registro, salvo prueba en contrario de la existencia de la obra, interpretación, producción o radiofónica, y del hecho de su divulgación y publicación, así como la autenticidad y seguridad jurídica.

#### **Artículo 125. Obligaciones del Registro de Derecho de Autor.**

El Registro de Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

1. Inscribir, cuando proceda, las obras y los documentos que le sean presentados.
2. Proporcionar a las personas que lo soliciten información de las inscripciones y de los documentos que obran en el Registro, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes:
  - a) tratándose de programas de computación, de contratos de edición y de obras inéditas, la obtención de copias sólo se permitirá mediante autorización del titular del derecho patrimonial o por mandamiento judicial;
  - b) cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las constancias de registro, el Instituto expedirá copia certificada, pero por ningún motivo se permitirá la salida de originales del Registro. Las autoridades judiciales o administrativas que requieran tener acceso a los originales, deberán realizar la inspección de los mismos en las oficinas del Registro Nacional del Derecho de Autor;
  - c) cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del papel, la autoridad judicial o administrativa, el solicitante o, en su caso, el oferente de la



prueba, deberán aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. Las reproducciones que resulten con motivo de la aplicación de este artículo únicamente podrán ser utilizadas como constancias en el procedimiento judicial o administrativo de que se trate, y

3. Rechazar la inscripción de:

- a) lo que no es objeto de protección conforme al artículo 12 del presente Libro;
- b) las obras que son del dominio público;
- c) las obras ya registradas en tanto se resuelva el conflicto de titularidad de la obra;
- d) las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella;
- e) leyes, decretos, resoluciones y otros;
- f) la inscripción de cualquier documento cuando exista alguna anotación marginal, que suspenda los efectos de la inscripción, proveniente de la notificación de un juicio relativo a derechos de autor o de la iniciación de una averiguación previa, y
- g) en general los actos y documentos que en su forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones del presente Libro.

**Artículo 126. Impugnación del registro.**

El registro de una obra podrá ser impugnado por cualquier persona natural o jurídica o por el Estado, si la autoría de quien la tiene registrada quedare en duda. En este caso, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme sobre la autoría, por la Oficina Nacional Competente o en la vía ordinaria civil.

**Artículo 127. Presunción de titularidad.**

Se presume salvo prueba en contrario, que las personas indicadas en el registro son los titulares del derecho que se les atribuye en tal carácter.

**TÍTULO XI  
SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA**

**CAPÍTULO ÚNICO  
SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE AUTORES Y ARTISTAS**

**Artículo 128. Constitución de las sociedades de gestión colectiva.**

- I. Las sociedades de gestión colectiva de autores y titulares de derechos conexos que se constituyan de acuerdo con este Libro, en concordancia con el artículo 58 del Código Civil, serán de interés público.

- II. Las sociedades de gestión tendrán personería jurídica y patrimonios propios de acuerdo a las disposiciones que establece el presente Libro.
- III. No podrá constituirse más de una sociedad para cada rama o especialidad literaria o artística de los titulares reconocidos por este Libro.

**Artículo 129. Reconocimiento.**

- I. El reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva de autores y de artistas, intérpretes o ejecutantes, previo trámite de su personalidad jurídica por los canales correspondientes, será conferido mediante resolución de la Oficina Nacional Competente, a través de la Dirección de Derecho Autor.
- II. Las sociedades de gestión colectiva una vez reconocidas por la Oficina Nacional Competente, serán las únicas con potestad para percibir y liquidar en todo el territorio de la República y el exterior, en virtud de convenios de reciprocidad, los derechos económicos derivados de la utilización por cualquier medio o modalidad de las obras por ellas protegidas.
- III. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras destinatarias finales de los derechos económicos, deberán actuar necesariamente a través de la sociedad respectiva, sin perjuicio de ejercer directamente los derechos que les confiere el presente Libro.

**Artículo 130. Efectos del reconocimiento de la sociedad de gestión.**

- I. El reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva, por parte de la Oficina Nacional Competente a nombre del Estado, las habilitará legalmente para reclamar ante los usuarios o sus representantes, el pago de las regalías y la defensa de los derechos mencionados en el presente Libro.
- II. La Oficina Nacional Competente otorgará a las sociedades un certificado de habilitación de funcionamiento de la sociedad que será exhibido en lugar visible en sus establecimientos.
- III. Las sociedades de acuerdo a su género, deberán otorgar a los representantes y cobradores credenciales autorizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que llevará un registro de los mismos. El cambio de representantes y cobradores, deberá ser comunicado a la Dirección de Derecho de Autor por la sociedad correspondiente.

**Artículo 131. Géneros de sociedades de gestión colectiva.**

- I. Sin perjuicio que nuevos géneros aparezcan en el futuro, se establecen los siguientes géneros de constitución de Sociedades de Gestión Colectiva.
  - 1. Literatos, que incluyen a novelistas, ensayistas, historiadores, científicos, poetas, conferencistas y catedráticos.
  - 2. Autores dramáticos, dramático-musicales y de obras pantomímicas.
  - 3. Autores y compositores, de música incluidos los letristas y los coreógrafos de obras de danza.
  - 4. Artistas plásticos como ser, pintores, escultores, grabadores, arquitectos, dibujantes, escenógrafos, diseñadores gráficos y artesanos.

5. Cineastas, videastas y fotógrafos; productores, directores y guionistas;
  6. Creadores de programas de ordenador o computadora (soporte lógico o software).
- II. Igualmente se establecen Sociedades de Derechos Conexos para los artistas intérpretes o ejecutantes, sean estos:
1. músicos, cantantes o instrumentistas;
  2. actores, mimos, recitadores, y bailarines.
- III. El reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva de autores y de artistas intérpretes o ejecutantes, previo trámite de su personalidad jurídica por los canales correspondientes, será conferido mediante resolución de la Oficina Nacional Competente.
- IV. Solo podrá constituirse una sociedad en cada rama de creación literaria, artística, o de derechos conexos. Una misma persona podrá pertenecer a más de una sociedad.

### **Artículo 132. Facultades de las sociedades de gestión colectiva.**

Las sociedades de gestión colectiva de autores, de artistas intérpretes o ejecutantes tienen las facultades siguientes:

1. Establecer procedimientos de recaudación, administración, liquidación de derechos de autor y conexos, pudiendo coordinar con otras sociedades de distinto género, la forma de aplicarlos.
2. Determinar las condiciones a las que deberán ajustarse los contratos con los usuarios, siempre que no contravengan al presente Libro.
3. Conceder o negar las autorizaciones que se establezcan en los contratos en general y en los contratos en particular que no contravengan el presente Libro. Para el caso de las autorizaciones, las sociedades instrumentarán los medios para garantizar el cumplimiento de la voluntad del autor o intérprete.
4. Fijar los respectivos aranceles de cobranza periódica por cada modalidad de uso, percibiendo y liquidando los mismos de acuerdo a los estatutos de cada sociedad.
5. Firmar toda clase de documentación relacionada con los derechos de autor o intérprete.
6. Exigir a los usuarios el pago de los aranceles que se establezcan, así como la presentación de declaraciones juradas, planillas de ejecución, programas, catálogos, listados de publicaciones y todo otro elemento de verificación que permita y garantice la correcta percepción y liquidación de los derechos.
7. Controlar y verificar la exactitud de las constancias o manuscritos presentados por los usuarios, incluyendo la documentación respaldatoria de las liquidaciones denunciadas por los mismos.
8. Efectuar el control de ingreso de personas, en la venta de obras y de taquillas o de otras formas de contribución, el uso correcto de las obras autorizadas y de todo otro valor resultante o modalidad aplicable, que se determine como base para la fijación de aranceles correspondientes al cobro del derecho de autor y del intérprete.

9. Retener, como establecen las normas y prácticas internacionales un treinta por ciento (30%) de los ingresos totales, para gastos de administración y funcionamiento.
10. Interponer las acciones que crean convenientes ante autoridades administrativas, policiales y judiciales, para prohibir el uso de repertorio y de obras que no estuvieran debidamente autorizadas, sean nacionales o extranjeras.
11. Efectuar a cabo toda otra acción necesaria para lograr el objeto y cumplimiento del presente Libro y de las obligaciones señaladas para las sociedades.
12. Asumir defensa del derecho moral y patrimonial de autor.
13. Representar a sus socios, a los demás autores o artistas de su género y a sus respectivos derecho habientes, ante autoridades administrativas, judiciales y terceros, en todos los asuntos de interés general y particular para los mismos y suscribir contratos en materia de derecho de autor y derechos conexos, en los términos y con las limitaciones impuestas en el presente Libro y los respectivos estatutos.
14. Las sociedades de gestión colectiva serán las mandatarias de los autores e intérpretes para todos los fines de esta materia.
15. Recaudar y liquidar a favor de los autores e intérpretes las percepciones pecuniarias provenientes de los derechos que les correspondan. Para el caso de los asociados, serán retenidos en su favor para el posterior pago, dentro un plazo a ser determinado en los estatutos de la sociedad, que no podrá ser mayor a los cinco (5) años. Vencido el plazo de los referidos fondos se destinarán servicios a favor de socios, ancianos o impedidos, a través del fondo social de la sociedad de gestión.
16. Recaudar y entregar a la Oficina Nacional Competente, las percepciones correspondientes a la utilización de obras pertenecientes al patrimonio nacional y del dominio público.
17. Celebrar convenios con las sociedades de gestión colectiva nacionales de distinto género mencionadas en este artículo y con otras extranjeras de la misma rama o afines, y titulares de derechos conexos, con base a la reciprocidad.
18. Representar en el país a las sociedades extranjeras y ser representada en el exterior, en virtud del mandato específico o de pacto de reciprocidad celebrado por las mismas sociedades.
19. Los demás actos que no contravengan lo establecido por el presente Libro, y por los propios estatutos.

### **Artículo 133. Derechos del autor y titulares.**

- I. Las remuneraciones establecidas en el presente Libro a favor del creador, el intérprete, artista o ejecutante de una obra, serán de concertación directa entre éste y el interesado que desee hacer usufructo de la misma, aunque las sociedades podrán constituirse, a pedido del autor o intérprete, en representantes para dicha concertación.

- II. Las disposiciones del presente título no menoscabarán la facultad de los autores de obras y de sus sucesores, ni de los titulares de derechos conexos, de ejercer directamente los derechos que les confiere el presente Libro.

**Artículo 134. Celebración de contratos.**

Los autores y los titulares de derechos conexos o las sociedades que los representan podrán celebrar contratos con los usuarios y con las organizaciones que los representan respecto a la utilización de sus obras. Las retribuciones concertadas en dichos contratos no podrán ser contrarias a lo que establece el presente Libro.

**Artículo 135. Registros de actos y contratos.**

Las sociedades de gestión colectiva deberán registrar en la Oficina Nacional Competente los nombramientos, y el cese de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos celebrados con asociaciones de usuario y los celebrados con similares extranjeras.

**Artículo 136. Informe a los titulares.**

- I. Las sociedades de gestión colectiva deberán de suministrar a sus socios y representantes una información periódica, completa y detallada de todas las actividades de la organización que puedan interesar al ejercicio de sus derechos.
- II. Similar información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales mantengan contratos de representación en el territorio nacional.

**TÍTULO XII  
PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR  
Y LOS DERECHOS CONEXOS**

**CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 137. Acciones civil, administrativa o penal.**

- I. La violación de cualquiera de los derechos de autor establecidos en este Libro, dará lugar a las acciones civil o administrativa; sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.
- II. Los procesos penales a que den lugar las infracciones al presente Libro son de acción pública y serán de conocimiento de la judicatura penal, de acuerdo con el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley de Organización Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público y el presente Código.

**Artículo 138. Presunción de autor.**

Para que el titular de los derechos de autor y derechos conexos reconocidos en el presente Libro, sea admitido como tal ante cualquier autoridad judicial o administrativa, bastará que el nombre o seudónimo, o cualquier otra denominación que no deje dudas sobre la identidad de la persona individual o colectiva de que se trate, conste en la obra, interpretación o ejecución, producción o emisión de radiodifusión, en la forma usual.

**Artículo 139. Petición del titular afectado.**

- I. En caso de infracción de los derechos reconocidos en el presente Libro, se podrá demandar:
  1. La cesación de los actos violatorios.
  2. El decomiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, así como su destrucción, sin indemnización alguna.
  3. El decomiso definitivo de los instrumentos y medios empleados para cometer la infracción sin indemnización alguna.
  4. El decomiso definitivo de los instrumentos y medios para almacenar copias, sin indemnización alguna.
  5. El lucro cesante o la indemnización de daños y perjuicios.
  6. La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho.
  7. El valor total de las costas procesales.
  8. El derecho de información sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y sobre los circuitos de distribución.
- II. Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en Bolivia, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

**Artículo 140. Prohibición general para autorizar.**

Ninguna autoridad, ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de cualquier otra prestación protegida por este Libro, o prestar apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa y previa del titular del derecho, su representante o la sociedad de gestión colectiva correspondiente. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

**Artículo 141. Responsabilidad solidaria.**

- I. Si la violación de los derechos se realiza a través de redes de comunicación digital, tendrá responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el control de un sistema informático interconectado a dicha red, a través del cual se permita, induzca o facilite la comunicación, reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en este Libro y, siempre que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte.
- II. Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas en esta norma, estarán exentos de responsabilidad por actos y medidas técnicas que adopten a fin de evitar que la infracción se produzca o continúe.

**Artículo 142. Medidas preparatorias.**

- I. El juez o tribunal competente para conocer acciones en materia civil en virtud del presente Libro estará facultado, además de las medidas preparatorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil y en los términos que estime razonables, para:
  1. Expedir requerimientos para prohibir la comisión, o para ordenar el cese, de la infracción de cualquier derecho protegido en virtud del presente Libro.
  2. Ordenar el secuestro de ejemplares de obras protegidas o de fonogramas de las que se tengan indicios que hayan sido reproducidas, realizadas o importadas sin autorización del titular del derecho protegido en virtud del presente Libro, cuando la realización o la importación de los ejemplares estén sujetas a autorización, así como de los embalajes de esos ejemplares, de los medios que puedan haberse utilizado para realizarlas y de los documentos, cuentas o papeles de negocios relativos a dichos ejemplares.
- II. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas al secuestro se aplicarán en lo pertinente a las infracciones de los derechos protegidos en virtud del presente Libro.
- III. Las disposiciones de la Ley General de Aduanas relativas a la suspensión de la puesta en libre circulación de mercancías de la que se tengan indicios que puedan ser ilegales se aplicarán en lo pertinente a los objetos o al material protegidos en virtud del presente Libro.

SECCIÓN ÚNICA  
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

**Artículo 143. Procedencia.**

- I. En caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por el presente Libro, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje o conciliación el cual está regulado conforme a la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación de 10 de marzo de 1997.
- II. La Dirección de Derecho de Autor a través del Órgano Nacional Competente publicará en el mes de enero de cada año una lista de las personas autorizadas para fungir como árbitros en la materia.

**CAPÍTULO II  
PROCESO CIVIL EN DERECHO DE AUTOR  
Y DERECHOS CONEXOS**

SECCIÓN I  
DISPOSICIONES COMUNES

**Artículo 144. Jueces y tribunales competentes.**

- I. Son competentes para conocer las acciones civiles sobre esta materia, de acuerdo a la cuantía, los Jueces de Instrucción en lo Civil y los Jueces de Partido en lo Civil, y los recursos según correspondan, los Jueces de Partido en lo Civil y las Cortes Superiores de Distrito a través de la Sala Civil correspondiente.

- II. Los recursos de casación que se dedujeren en esta materia serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de su Sala Civil respectiva.

**Artículo 145. Competencia.**

- I. La competencia en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos se fija de conformidad con las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil y el presente artículo.
- II. La competencia será determinada, tratándose de transmisiones a través de un satélite, cuando la infracción sea cometida en el lugar en que se iniciare dicha transmisión o bien en el lugar en que la señal se hiciere accesible al público.
- III. En caso de infracciones cometidas a través de redes de comunicación digital, se tendrán cometidas las mismas, en el lugar en que se encuentren los sistemas informáticos o bien en el lugar en que la transmisión se hiciere accesible al público.

**Artículo 146. Facultades de los jueces.**

Con el objeto de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en el presente Libro, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:

1. El cese inmediato de la actividad ilícita.
2. La suspensión de la actividad de la utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda.
3. Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

**Artículo 147. Medidas cautelares.**

Las medidas cautelares relativas al Derecho de Autor y Derechos Conexos, en materia civil, se tramitarán de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 148. Medidas cautelares y presunción de autor.**

- I. El juez ordenará las medidas preventivas y cautelares al conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos de autor y derechos conexos, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.
- II. El juez comprobará si la parte solicitante es titular de los derechos, a cuyo efecto se estará a las presunciones establecidas en este Libro. En defecto de información proporcionada con la demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración jurada que al efecto se incluya en la demanda.

**Artículo 149. Contracautela.**

- I. El juez exigirá al actor, de acuerdo a las circunstancias, que preste fianza o garantía suficiente en preservación de daño posible al demandante, para proteger y evitar abusos.



- II. La garantía no se exigirá cuando el solicitante fuere el Estado, Municipio o un beneficiario de gratuidad.
- III. El monto de la garantía que fije el juez debe guardar relación con el daño emergente o el lucro cesante establecido en la demanda.

#### **Artículo 150. Secuestro.**

- I. El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen el derecho de autor y derechos conexos, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.
- II. La retención se ordenará sobre los valores correspondientes por conceptos de explotación o remuneración.
- III. El arraigo, se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en Bolivia.

#### **Artículo 151. Otras facultades del juez.**

- I. Las medidas adoptadas serán ejecutadas en presencia del juez, si el actor así lo requiere, quien podrá asesorarse de los peritos necesarios o de funcionarios de la Oficina Nacional Competente cuyo dictamen en la propia diligencia constará del acta correspondiente y servirá para la ejecución.
- II. Además de las medidas provisionales y cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Civil, la orden que expida el juez conforme con el artículo precedente implicará, sin necesidad de formalidad ulterior o providencia adicional, la posibilidad de adoptar cualquier disposición necesaria para la plena ejecución de la medida cautelar, incluyendo la apertura de seguridades y sin perjuicio de que al momento de la diligencia el juez ordene otra medida cautelar que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos, sea de oficio o a petición verbal de parte.

#### **Artículo 152. Cese de actividad ilícita.**

La resolución del juez que ordene el cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:

- 1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas.
- 2. Cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor, la resolución que se expida ordenará la clausura provisional del local o establecimiento.
- 3. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial.
- 4. La inutilización de los bienes u objetos materia de la infracción y, en caso necesario, la destrucción de moldes, planchas, matrices, instrumentos, negativos, plantas o partes de aquéllas y demás elementos utilizados en la reproducción o comunicación no

autorizada, o de aquellos cuyo uso predominante sea facilitar la supresión o neutralización de cualquier medio de protección técnica o de información electrónica y que sirvan predominantemente para actos violatorios del derecho de autor y derechos conexos.

5. Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos de autor y derechos conexos atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción.

#### **Artículo 153. Reserva en las medidas cautelares.**

Las demandas que se presenten a fin de obtener una medida cautelar, así como las providencias correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada sino hasta después de su ejecución.

#### **Artículo 154. Reserva en la inspección judicial.**

Si el actor indicare que para la prueba de la violación de los derechos se requiere de inspección judicial previa, el juez la dispondrá sin notificar a la parte contraria y podrá ordenar durante la diligencia las medidas cautelares pertinentes. Para este fin concurrirá con los funcionarios judiciales y policías que deban cumplir y garantizar tales medidas.

#### **Artículo 155. Depósito judicial.**

- I. En caso de obras fijadas electrónicamente en dispositivos de soportes digitales o por procedimientos análogos, o cuya aprehensión sea difícil o pueda causar graves daños al demandado, el juez, previo consentimiento del actor y si lo considera conveniente, podrá ordenar que los bienes secuestrados permanezcan bajo la custodia del demandado, luego de identificados, individualizados e inventariados, sin perjuicio del secuestro de las fijaciones sobre soportes removibles.
- II. El juez deberá poner sellos o señales sobre los bienes identificados, individualizados e inventariados.

#### **Artículo 156. Efectos de las medidas cautelares.**

- I. Cumplida la medida cautelar se proseguirá de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ordinario.
- II. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción del derecho de autor y derechos conexos, el juez competente ordenará al actor, previa petición del demandado, la indemnización de daños y perjuicios.

#### **Artículo 157. Confidencialidad de la información.**

- I. A fin de proteger secretos comerciales o información confidencial, en el curso de la ejecución de las medidas cautelares establecidas en este Libro, únicamente tendrán acceso a la información, códigos u otros elementos, en cuanto sea indispensable para la práctica de la medida el juez, perito designado, demandante o demandado o sus representantes.

- II. Todos los que tengan acceso a tales informaciones, quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que ésta y otras leyes prescriban para la protección de los secretos comerciales y la información confidencial.

**Artículo 158. Peritos.**

En ejecución de las medidas cautelares o en el período de prueba, podrán intervenir como peritos los funcionarios designados por la Oficina Nacional Competente. El juez podrá requerir la intervención pericial de tales funcionarios, a solicitud de parte o de oficio.

También podrán intervenir como peritos representantes de las sociedades de gestión colectiva que corresponda.

**Artículo 159. Destino de copias y embalajes.**

- I. Cuando existan ejemplares cuya realización haya supuesto una infracción de los derechos, las autoridades judiciales, en ejecución de sentencia, están facultadas para ordenar que se destruyan esos ejemplares y sus embalajes o para adoptar otra disposición con respecto a esos ejemplares y embalajes fuera de los circuitos comerciales, con el objeto de evitar perjuicios al titular del derecho, salvo si éste solicita otra cosa.
- II. Esta disposición no se aplicará a aquellos ejemplares ni a sus embalajes cuya propiedad haya sido adquirida por terceros de buena fe.

**Artículo 160. Destino de material.**

- I. Cuando exista el peligro de que se utilice material para cometer, o para seguir cometiendo, actos que constituyan una infracción, las autoridades judiciales en ejecución de sentencias ordenarán, que se:
  - 1. destruya el material;
  - 2. disponga de él de otra manera fuera de los circuitos comerciales, a fin de reducir al mínimo los riesgos de nuevas infracciones; o
  - 3. sea entregado al titular del derecho.
- II. Cuando exista el peligro de que persistan los actos que constituyen en una infracción, las autoridades judiciales ordenarán expresamente el cese de dichos actos y fijarán un importe a pagar por concepto de multa.

**Artículo 161. Sanción por negligencia u omisión.**

- I. Los jueces que no cumplan con lo previsto para las medidas precautorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda o nieguen injustificadamente la adopción de una medida cautelar, serán responsables ante el titular del derecho por los daños causados, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.
- II. Esta norma se hará extensiva a los jueces en lo penal que establezcan medidas cautelares en lo que corresponda al Código de Procedimiento Penal.

**Artículo 162. Prescripción del derecho.**

- I. Las acciones civiles prescriben de conformidad con las normas del Código Civil respectivamente, salvo las acciones por violación a los derechos morales, que son imprescriptibles.
- II. Salvo prueba en contrario y, para los efectos de la prescripción de la acción se tendrá como fecha de perpetración de la infracción, el primer día del año siguiente a la última edición, reedición, reproducción, comunicación, u otra utilización de una obra, interpretación, producción o emisión de radiodifusión.

**Artículo 163. Observancia a tratados y excepción.**

- I. Los jueces observarán adicionalmente los procedimientos y medidas establecidos en convenios o tratados internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en Bolivia, en cuanto sean aplicables.
- II. Los jueces estarán exentos de responsabilidad en los términos del artículo 48 numeral 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

SECCIÓN II  
PROCESO ORDINARIO DE CONOCIMIENTO

**Artículo 164. Procedencia.**

- I. El proceso ordinario para resolver los conflictos de propiedad intelectual referidos a las materias de derecho de autor y derechos conexos, propiedad industrial, protección a las obtenciones vegetales y a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, se sujeta al procedimiento previsto en la presente sección.
- II. La demanda será precedida necesariamente de la conciliación, sin perjuicio de las medidas preparatorias que se hubieren solicitado.

**Artículo 165. Procedimiento.**

- I. Agotada la vía conciliatoria, el proceso se iniciará con la presentación de la demanda, que deberá reunir los requisitos de forma y contenido señalados en el Código de Procedimiento Civil.
- II. Dictada la providencia de admisión de la demanda, en ella se correrá traslado y se ordenará la citación del demandado.
- III. Citado legalmente, el demandado deberá contestar en el plazo de treinta días.
- IV. A tiempo de la contestación, el demandado podrá reconvenir. Se correrá traslado de la reconvencción al actor, para que conteste en el mismo plazo de treinta días.
- V. Si se opusieren a la demanda o la reconvencción excepciones previas, se conferirá traslado al actor o al demandado, según fuere el caso, por un plazo de 15 días.

- VI. Transcurridos los plazos señalados, con contestación o sin ella, se convocará a audiencia preliminar.

**Artículo 166. Rebeldía.**

- I. Si transcurrido el plazo para la contestación, el demandado no compareciere, podrá ser pedida su rebeldía por el actor.
- II. Declarada la rebeldía, se notificará al demandado en su domicilio. Todas las actuaciones y resoluciones posteriores se notificarán en estrados, excepto la sentencia, salvo la pronunciada en audiencia.
- III. La rebeldía del demandado determinará que el juez tenga por admitidos los hechos alegados por el actor, en cuanto no fueren contradicho por la prueba ofrecida, que podrá ser diligenciada en todo lo que el tribunal considere necesario.
- IV. El actor podrá pedir el embargo de los bienes del rebelde u otras medidas cautelares consideradas necesarias, las cuales subsistirán hasta la conclusión de la causa o hasta el levantamiento de la rebeldía, si hubiere lugar.
- V. El rebelde podrá comparecer en cualquier momento del proceso y tomará la causa en el estado en que se hallare.
- VI. Si el actor fuere declarado rebelde, el demandado será absuelto, salvo que mediere reconvencción, en cuyo caso el proceso continuará hasta sentencia.

**Artículo 167. Audiencia preliminar.**

- I. Convocada audiencia preliminar, las partes comparecerán en forma personal, excepto motivo fundado que justifique la comparecencia por representante.

Las personas colectivas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes.

Si hubiere de suspenderse por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, la audiencia podrá diferirse por una sola vez.

- II. La inasistencia no justificada del actor se tendrá como desistimiento de la pretensión, con todos sus efectos.
- III. La inasistencia del demandado facultará al juez o tribunal para dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo contrario.

**Artículo 168. Actividades en la audiencia preliminar.**

En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:

1. ratificación de la demanda y de la contestación, y en su caso, de la reconvencción y su contestación; igualmente, alegación de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio del juez o de las partes;

2. tentativa de conciliación que deberá realizar el juez respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos;
3. recepción de prueba relativa a excepciones, si existieren hechos que, siendo susceptibles de prueba, ésta hubiere sido propuesta juntamente con las excepciones;
4. saneamiento del proceso, pronunciándose sentencia interlocutoria que resuelva las excepciones previas o nulidades advertidas por el juez o acusadas por la parte, incluyendo lo incongruente de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación;
5. prórroga de la audiencia cuando no se hubiere podido producir la totalidad de la prueba o dictar la sentencia de saneamiento. En el primer caso, podrá diferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor de 10 días, y en el segundo caso;
6. fijación definitiva del objeto del proceso; determinación, ordenamiento y diligencia de los medios de prueba admisibles, necesarios y pertinentes; recepción de las pruebas cuya diligenciamiento fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieren producido hasta su conclusión.

Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio del juez, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia.

#### **Artículo 169. Resoluciones y recursos en la audiencia preliminar.**

- I. Las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar admitirán los siguientes recursos:
  1. Las providencias de mero trámite, recurso de reposición proponible en la misma audiencia y definible en forma inmediata por el juez;
  2. La sentencia interlocutoria que resolviere excepciones previas, recurso de apelación con efecto diferido;
  3. La sentencia interlocutoria que resolviere las excepciones de incompetencia del juez, prescripción o caducidad, transacción o conciliación y cosa juzgada, recurso de apelación en el efecto suspensivo, que deberá anunciarse en la propia audiencia e interponerse en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil.
- II. Igualmente, en esta audiencia podrán adoptarse las siguientes medidas:
  1. si la sentencia interlocutoria declarare probada la excepción de litispendencia, se ordenará, según corresponda, el archivo de obrados o la acumulación;
  2. si se acogiere la excepción de demanda defectuosa, el demandante podrá subsanar los defectos en la misma audiencia, en cuyo caso se permitirá al demandado complementar su contestación en mérito de las aclaraciones formuladas por el actor;
  3. si se acogiere la excepción de falta de capacidad, personería o representación, se concederá un plazo de 10 días para la subsanación de lo omitido, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda;

4. si se dispusiere la intervención de un tercero, se procederá a su citación conforme a derecho. En este caso, como en el anterior, se suspenderá la audiencia a sus efectos, por el plazo señalado en el numeral anterior.
- III. Las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas por las partes serán resueltas en una sola sentencia dictada en audiencia para sanear el proceso, salvo que el juez o tribunal se declare incompetente, en cuyo caso no se resolverán otras cuestiones.
- IV. Si el asunto fuere de puro derecho o, siendo de hecho, se hubiere diligenciado totalmente la prueba, o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada, serán oídas las alegaciones de las partes y se pronunciará sentencia definitiva.
- V. Todo cuanto expusiere, declarare u ordenare el juez en la audiencia preliminar no significa prejuzgamiento.

**Artículo 170. Audiencia complementaria.**

- I. Si en la audiencia preliminar no se hubiere podido diligenciar totalmente la prueba, se convocará a las partes para audiencia complementaria que se realizará dentro de los 15 días siguientes, durante cuya vigencia se verificarán necesariamente las diligencias que se hubiere dispuesto realizar fuera de audiencia, como inspecciones, pericias, informes y otras similares, a fin de que estén cumplidas en oportunidad de la audiencia complementaria.
- II. No se suspenderá la audiencia complementaria, ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el único caso de fuerza mayor debidamente comprobada. La audiencia podrá ser prorrogada, por única vez, de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciamiento de alguna prueba que deba cumplirse fuera del asiento judicial, en cuyo caso el juez fijará nueva fecha para reanudación de la audiencia.
- III. La inasistencia de la parte a la audiencia complementaria significa presunción desfavorable para ella.
- IV. En la audiencia complementaria serán recibidos todos los medios de prueba. Los testigos y peritos, una vez oídos por su orden, permanecerán en el acto a efecto de aclaraciones o careos posibles, salvo autorización del juez para su retiro.
- V. Se labrará acta resumida de todo lo actuado y se acumularán al expediente los informes y demás documentos recibidos. En particular, fuera de las aclaraciones o complementaciones de las partes, se harán constar las resoluciones del juez sobre la admisión o rechazo de alguna prueba controvertida, así como sobre la interposición de recursos.
- VI. Los testigos y peritos firmarán el Libro de Asistencia del juzgado, sin que sea necesaria la suscripción del acta.
- VII. El juez oírán seguidamente los alegatos de las partes, a cuyo objeto fijará el tiempo necesario que no excederá de 10 minutos para cada una y que podrá ser prorrogado por un lapso similar. Por excepción, tratándose de asuntos de notoria complejidad, también podrá conceder una ampliación que satisfaga la necesidad de alegaciones adecuadas a dicha situación.
- VIII. A continuación, el juez pronunciará sentencia observando lo dispuesto por el artículo siguiente.

**Artículo 171. Plazos para dictar sentencia.**

- I. Los jueces deberán dictar sentencia al cabo de la audiencia complementaria, en cuya oportunidad se dará lectura a la misma a los efectos de su notificación.
- II. El juez podrá diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia, que se realizará en plazo no mayor de 10 días si se tratare de sentencia interlocutoria y de 20 para la sentencia definitiva. Los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente a la celebración de esta última audiencia.
- III. Tratándose de casos complejos, se podrá prorrogar el plazo para dictar la sentencia con sus fundamentos, por 15 días si fuere interlocutoria y por 30 días si fuere definitiva, procediéndose conforme a lo dispuesto en el parágrafo anterior.

**Artículo 172. Segunda instancia.**

- I. La segunda instancia se abre como efecto de apelación concedida.
- II. Recibido el expediente, será pasado a estudio del juez en forma simultánea.
- III. Finalizado el estudio por el tribunal, si no se hubiere resuelto dictar decisión anticipada, se convocará a audiencia para fines de mejora de la alzada o diligenciamiento de la prueba que el tribunal hubiere dispuesto, de oficio o a petición de parte. Si no fuere necesario el diligenciamiento de prueba, se formulará igual convocatoria a audiencia para dictar sentencia.
- IV. La sentencia será dictada en la forma y plazos previstos en el artículo 171.

**Artículo 173. Casación.**

En los casos en que hubiere lugar al recurso de casación, se procederá conforme a las regulaciones previstas por el Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 174. Ejecución de sentencia.**

Las sentencias se ejecutarán observando las regulaciones del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 175. Multa. Daños y perjuicios.**

- I. Las sentencias condenatorias de las acciones civiles por violación de derechos de autor y derechos conexos impondrán al infractor adicionalmente una multa de tres a cinco veces el valor total de los ejemplares de obras, interpretaciones, producciones, emisiones o de la regalía que de otro modo hubiere percibido el titular del derecho por explotación legítima de éstas u otras prestaciones de derecho de autor y derechos conexos.
- II. Las multas que conforme a estas disposiciones se recauden se destinarán en un tercio (1/3) a la Oficina Nacional Competente, en un tercio (1/3) al titular del derecho infringido y un tercio (1/3) al Tesoro Judicial.
- III. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá el daño emergente y el lucro cesante, causadas por la infracción.



La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;
2. los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
3. el precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y,
4. los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.

#### **Artículo 176. Corresponsabilidad de terceros.**

El propietario, socio, gerente, director o responsable de las actividades de los establecimientos donde se realicen presentaciones de teatro o musicales, responderá solidariamente con el organizador del espectáculo, por las violaciones a los derechos de autor que tengan lugar en aquellos establecimientos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

### **CAPÍTULO III DELITOS Y EL PROCESO PENAL**

#### **SECCIÓN I DELITOS**

#### **Artículo 177. Delito contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos.**

Será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión y multa de sesenta (60) a cien (100) días, quien:

1. en relación con una obra o producción literaria o artística inédita y sin autorización del autor, artista o productor, o de sus causahabientes, la inscriba en el registro o la publique por cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión, como si fuere suya o de otra persona distinta del autor verdadero, o con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado dolosamente;
2. en relación con una obra o producción publicada y protegida cometa cualesquiera de los hechos indicados en el inciso anterior, o sin permiso del titular del derecho de autor, la reproduzca, adapte, transforme, modifique, refunda o compendie y edite o publique algunos de estos trabajos por cualquier modo de reproducción, multiplicación o comunicación al público;
3. reproduzca una obra ya editada, alterando dolosamente en la edición fraudulenta el nombre del editor autorizado al efecto;
4. reproduzca un fonograma o videograma con miras a su comercialización, o los alquile sin autorización escrita de su productor o su representante; asimismo, el que importe, almacene, distribuya o venda las copias ilícitas de un fonograma o un videograma;

constituye un ejemplar ilícito de un fonograma o un videograma, el que imitando o no, las características externas del ejemplar legítimo tiene incorporado el fonograma o el videograma o parte sustancial de él, sin la autorización de su titular;

5. edite, venda, reproduzca o difunda una obra editada o fonograma mencionando falsamente el nombre del autor, del editor autorizado, de los intérpretes y ejecutantes o del productor;
6. presentare declaraciones falsas destinadas, directa o indirectamente a perjudicar los derechos económicos de autor, sea alterando los datos referente al producto económico de un espectáculo, el número de ejemplares producidos, vendidos o distribuidos de una obra, comunicación pública, regalías o por cualquier otro medio;
7. introduzcan al país, fabriquen, almacenen, ofrezcan en venta, vendan arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros aparatos u otros medios destinados a descifrar las señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios técnicos de protección aplicados al titular del derecho;
8. fabriquen o importen, para la venta o el alquiler, un dispositivo o un medio especialmente concebido o adaptado para volver inoperante todo dispositivo o medio encaminado a impedir o a limitar la reproducción de una obra o a deteriorar la calidad de los ejemplares realizados;
9. importen o distribuyan con fines de emisión y comunicación al público, sin estar habilitados para ello, de obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones de radiodifusión, sabiendo que se han suprimido o modificado sin autorización informaciones relativas a la gestión de derechos que se presentan en forma electrónica.

Todo ejemplar en el que se haya suprimido o modificado una información sobre la gestión de derechos, serán asimilados a las copias o ejemplares falsificados de obra.

#### **Artículo 178. Comunicación sin autorización.**

Será sancionado con tres (3) a cinco (5) años de reclusión y multa de sesenta (60) a cien (100) días el que:

1. emita, retransmita o difunda por cualquier medio, obras cinematográficas sin autorización del productor; y
2. retransmita por cualquier medio las emisiones de los organismos de radiodifusión.

#### **Artículo 179. Importación de obras ilícitas.**

Serán sancionados con tres (3) a cinco (5) años de reclusión y multa de sesenta (60) a cien (100) días quienes introduzcan al país, almacenes, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones ilícitas de obras.

#### **Artículo 180. Reproducción ilícita.**

Serán sancionados de tres (3) meses a dos (2) años de reclusión y multa de sesenta (60) días.

quienes:

1. reproduzcan mayor número de ejemplares de los autorizados por el titular del derecho de autor, o sus causahabientes en el respectivo contrato;

2. reproduzcan, difundan, ejecuten, representen o distribuyan una o más obras después de vencido el término de una autorización concedida al efecto.

**Artículo 181. Autor o representante indebido.**

Será sancionado de tres (3) meses a dos (2) años de reclusión y multa de sesenta (60) días quien:

1. sin autorización del titular del derecho de autor sea responsable por la representación o ejecución públicas de obras teatrales o musicales;
2. sin ser autor, editor, causahabiente o representante de uno o de alguno de ellos, se atribuya falsamente una de esas calidades y obtenga que la autoridad suspenda la representación de la ejecución pública de una obra;
3. se apropie indebidamente del derecho de uso de nombres de periódicos, revistas, secciones y columnas de los mismos, programas de radio y televisión, noticieros cinematográficos, de los demás medios de comunicación, de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas y otras publicaciones periódicas o de personajes característicos empleados en actuaciones artísticas o de nombres de grupos y conjuntos, coros, orquestas, bandas y otros elencos artísticos.

**Artículo 182. Alteración de obras.**

Será sancionado de tres (3) meses a dos (2) años de reclusión y multa de sesenta (60) días quien altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables.

**Artículo 183. Sanción a la obstrucción de justicia.**

Serán sancionados con reclusión de seis meses a dos años y multa de cien a cuatrocientos días multa, quienes ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva cautelar emitida por autoridad judicial o administrativa competente.

**Artículo 184. Agravantes.**

Son circunstancias agravantes, las siguientes:

1. que la persona que cometió el delito haya sido apercibida sobre la violación del derecho;
2. que los delitos se cometan respecto de obras inéditas;
3. que los productos materia de la violación de los derechos puedan provocar daño a la salud.

En todos estos casos la pena será elevada en un tercio (1/3) teniendo en cuenta la magnitud del daño.

## SECCIÓN II PROCESO PENAL

### **Artículo 185. Competencia.**

- I. Son competentes para conocer las acciones penales por delitos cometidos contra los derechos de autor y derechos conexos, en primera instancia, los Jueces de Sentencia y los Tribunales de Sentencia, según el delito perseguido tenga una pena máxima que supere o no los cuatro años de privación de libertad.
- II. En Segunda Instancia, son competentes, las Cortes Superiores de Distrito, a través de la Sala Penal correspondiente.
- III. Los recursos de casación que se dedujeren en esta materia, serán conocidos por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal respectiva.

### **Artículo 186. Acción penal pública.**

La investigación y juzgamiento de los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos se regirá por las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal con las consideraciones establecidas en los artículos siguientes.

### **Artículo 187. Medidas cautelares reales.**

Las medidas cautelares reales relacionadas con el Derecho de Autor y Derechos Conexos, en materia penal se tramitarán de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil.

En la ejecución de las medidas cautelares reales, dispuestas para garantizar la reparación del daño y pago de costas o multas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, se preverá también la destrucción de los ejemplares ilícitos o adjudicación al titular del derecho defraudado u otra disposición que no implique retorno al circuito comercial.

### **Artículo 188. Incautación.**

- I. En todos los casos contenidos en este capítulo, durante el proceso, se dispondrá la incautación de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.
- II. La Dirección de Registro, Control y Administración de bienes incautados será la responsable de custodiar los ejemplares de una obra publicada o reproducida en forma ilícita.

### **Artículo 189. Destino de las obras incautadas.**

- I. A fin de que no retornen al circuito comercial, el Juez o Tribunal podrá ordenar en ejecución de sentencia la destrucción de los ejemplares y sus embalajes, o la adjudicación al titular del derecho defraudado de los ejemplares, embalajes o instrumentos que hayan sido utilizados para la comisión del delito.
- II. Esta disposición no se aplicará a los ejemplares, embalajes, ni a los instrumentos cuya propiedad haya sido adquirida por terceros de buena fe para su uso personal.

**Artículo 190. Destino de las multas.**

El producto de las multas determinadas en este capítulo será destinado en un cuarto (1/4) al titular del derecho infringido, un cuarto (1/4) al Fondo de Indemnizaciones del Poder Judicial, un cuarto (1/4) al Ministerio Público y un cuarto (1/4) a la Oficina Nacional Competente, estos últimos destinarán esos fondos en programas de formación y educación sobre propiedad intelectual.

**CAPÍTULO IV**  
**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DERECHO**  
**DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

**Artículo 191. Oficina Nacional Competente, Dirección de Derecho de Autor.**

De la Oficina Nacional Competente depende la Dirección de Derecho de Autor, es la autoridad nacional responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera y en segunda instancia las causas administrativas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.

**Artículo 192. Procedimiento administrativo.**

- I. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, o sus representantes, podrán denunciar la infracción de sus derechos ante la Dirección de Derecho de Autor en su condición de autoridad administrativa competente; no constituyendo esta última, en ninguno de los casos, vía previa.
- II. Las acciones por infracción iniciadas de oficio o a solicitud de parte, se sujetarán al Procedimiento Administrativo General que establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
- III. Agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo ante el Juez en Materia Administrativa.

**Artículo 193. Solicitud de medidas cautelares.**

- I. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en este Libro o sus representantes, sin menoscabo de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su responsabilidad y riesgo, el cese de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos en este capítulo.
- II. Con este fin, la Dirección de Derecho de Autor, tendrá la facultad de ordenar medidas cautelares rápidas y eficaces para:
  1. Evitar una infracción de cualesquiera de los derechos reconocidos en el presente Libro y, en particular impedir la introducción en los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas.
  2. Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

#### **Artículo 194. Medidas cautelares.**

- I. Las medidas cautelares serán entre otras:
  1. La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.
  2. La incautación, decomiso o retiro de los circuitos comerciales de los ejemplares producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad infractora.
  3. La realización de inspección, incautación o decomiso sin aviso previo.
  4. Requerimiento de información.

La medida cautelar de incautación o decomiso, podrá solicitarse dentro de un procedimiento administrativo de denuncia, sin perjuicio de las acciones de oficio.

- II. Las medidas cautelares se tramitarán de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil.

#### **Artículo 195. Requisitos para la medida cautelar.**

- I. El solicitante de medidas cautelares, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que tenga acceso y que la autoridad considere suficientes para determinar que:
  1. el solicitante es el titular del derecho o se presume la calidad de titular o autor;
  2. el derecho del solicitante está siendo infringido o que dicha infracción es inminente;
  3. cualquier demora en la expedición de esas medidas podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o
  4. existe un riesgo comparable de que se destruyan las pruebas.
- II. El solicitante debe proporcionar además, toda la información necesaria para identificar los bienes objeto de las medidas y el lugar donde éstos se encuentran.

#### **Artículo 196. Obligación de informar.**

Cuando se presuma la violación de derechos de autor o conexos, el Director de la Oficina Nacional Competente o el Director de Derecho de Autor podrá requerir a terceros que le proporcionen cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal infracción. Dicha información deberá ser entregada en un término no mayor de 10 días, desde la fecha de la notificación.

#### **Artículo 197. Facultad de la Dirección de Derecho de Autor para ordenar medidas cautelares.**

- I. La Dirección de Derecho de Autor tiene la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud de la solicitud de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho o exista riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.
- II. Las peticiones que se presenten para obtener medidas cautelares permanecerán en reserva hasta luego de ejecutadas y, aun con posterioridad deberán adoptarse por las autoridades las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información no divulgada que haya debido suministrarse en el curso del procedimiento.

**Artículo 198. Reserva de inspección y medidas cautelares.**

- I. Las inspecciones se realizarán por el Director de Derecho de Autor o sus delegados departamentales, entregando copia de la resolución administrativa que la hubiere ordenado y, si fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada.
- II. Si durante la diligencia se comprobare, aun presuntivamente, a primera vista, la violación de derechos de autor o derechos o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violación. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas.
- III. La Oficina Nacional Competente, a través del Director de Derecho de Autor o sus delegados departamentales, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente, de los derechos a que se refiere este Libro, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas. Estas medidas tendrán carácter provisional y estarán sujetas a revocación o confirmación.

**Artículo 199. Prohibición del titular o sociedad.**

Anunciada o de cualquier modo conocida la comunicación pública de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente, el titular de los derechos o la sociedad que los representa podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente que la prohíba, lo cual será ordenado inmediatamente. Al efecto se presume que el organizador, empresario o usuario no cuenta con la debida autorización.

**Artículo 200. Destino de los bienes incautados.**

- I. La Dirección de Derecho de Autor, luego de ejecutoriada la resolución administrativa definitiva correspondiente, podrá ordenar la entrega al titular del derecho afectado a una institución sin fines de lucro, de las obras reproducidas ilegalmente y cualquiera de los materiales e instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, u ordenar la destrucción de los mismos.

Si no se apersonase a la Dirección de Derecho de Autor el titular del derecho afectado después de transcurridos 20 días de la correspondiente notificación, la autoridad podrá disponer del material ilícito.

- II. La determinación y selección de la institución sin fines de lucro, a que se refiere el párrafo anterior, será determinada por Directorio de la Oficina Nacional Competente.
- III. Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

**Artículo 201. Intervención de la policía nacional.**

A requerimiento del titular o representante legal o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, la autoridad policial comprobará de inmediato, la comisión de cualquier acto infractor del presente Libro, entregando copia de constancia al interesado.

**Artículo 202. Denuncia penal.**

- I. Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la Dirección de Derecho de Autor podrá formular denuncia penal y remitir antecedentes al Ministerio Público.
- II. En caso que la Dirección de Derecho de Autor hubiere destruido o dispuesto de los ejemplares que constituían materia de la infracción del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, se acompañará a la denuncia copia certificada de la resolución administrativa correspondiente, así como copias de las actas vinculadas a tales medidas en las que consta la relación de bienes objeto de las mismas, a efectos de su valoración como prueba del presunto delito.

SECCIÓN I  
INFRACCIONES

**Artículo 203. Infracciones en materia de derecho de autor.**

- I. Se considerará como infracción y falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que concurran al menos alguna de las siguientes circunstancias:
  1. La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en el presente Libro.
  2. El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean estos directos o indirectos.
  3. La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares respectivos, autorización supuestamente obtenida, número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por el presente Libro.
  4. La realización de actividades propias de una sociedad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Dirección de Derecho de Autor.
  5. La difusión que haya tenido la infracción cometida.
  6. La reiterada o reincidencia en la realización de las infracciones y faltas prohibidas.
- II. También incurrirá en falta grave aquel que fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas, o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.



## SECCIÓN II SANCIONES

### **Artículo 204. Criterios para determinar sanciones.**

La Dirección de Derecho de Autor tiene facultad para imponer sanciones que correspondan a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a:

1. la gravedad de la falta;
2. la conducta del infractor a lo largo del procedimiento;
3. el perjuicio económico que hubiese causado la infracción;
4. el beneficio ilícito obtenido por el infractor; y
5. otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Dirección.

### **Artículo 205. Clase de sanciones administrativas.**

El Director de la Oficina Nacional Competente y el Director de Derecho de Autor podrán imponer conjunta o indistintamente, las siguientes sanciones:

1. amonestación;
2. multa de hasta cincuenta veces del valor de mercado que deje de percibir el titular;
3. reparación de las omisiones;
4. cierre temporal hasta 30 días del establecimiento;
5. cierre definitivo del establecimiento;
6. incautación definitiva;
7. publicación de la resolución a costa del infractor en órgano de prensa de circulación nacional.

### **Artículo 206. Sanción por inobservancia a resoluciones administrativas.**

El Director de la Oficina Nacional Competente o el Director de Derecho de Autor impondrá igual sanción que la establecida en el artículo anterior numeral 2, a quienes obstaculicen o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por ellos o no enviaren la información solicitada dentro del término concedido en el artículo 196 del presente Libro.

### **Artículo 207. Multas coercitivas sucesivas.**

La Oficina Nacional Competente o la Dirección de Derecho de Autor podrá imponer al infractor multas coercitivas sucesivas, hasta que se cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resoluciones definitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o adulteraciones en que hubiere incurrido, señalando un plazo perentorio bajo apercibimiento de multa, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones y medidas que fueren procedentes.

**Artículo 208. Término para el pago de multas.**

Los montos correspondientes a las multas deberán ser abonados en la Oficina Nacional Competente, dentro del término de cinco días, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva, por la Asesoría de la Oficina Nacional Competente.

**Artículo 209. Publicación de la resolución administrativa.**

La Oficina Nacional Competente o Dirección de Derecho de Autor podrá ordenar de oficio o a solicitud de parte, la publicación de la resolución administrativa correspondiente, en el Órgano de publicación oficial, por una sola vez, a expensas del infractor.

SECCIÓN III  
MEDIDAS EN FRONTERA Y LA ADUANA NACIONAL

**Artículo 210. Competencia de la Aduana Nacional.**

Las medidas cautelares y otras que deban aplicarse en la frontera, se ejecutarán por la Aduana Nacional o por quien tenga delegación expresa al momento de la importación, exportación o tránsito de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

**Artículo 211. Facultades de la Aduana Nacional.**

- I. La Aduana Nacional y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el país, de oficio o a petición de parte tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de autor y derechos conexos.
- II. Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.
- III. Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe con inventario pormenorizado a la Oficina Nacional Competente, Dirección de Derecho de Autor o delegados departamentales, quienes en el término de 15 días confirmarán o revocarán la medida tomada. Confirmada la medida adoptada, los bienes serán puestos a disposición del juez o tribunal en lo penal competente.

**Artículo 212. Suspensión de importación o exportación.**

- I. El titular de un derecho protegido por el presente Libro, que tuviera motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación de productos que infringen ese derecho, podrá solicitar a la autoridad administrativa o judicial competente que solicite a la Aduana Nacional disponga suspender esa importación o exportación al momento de su despacho. Se aplicarán a esa solicitud y a la orden que dicte la Aduana Nacional, las condiciones y garantías aplicables a las medidas cautelares.
- II. Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad administrativa o judicial competente ordenará o denegará la aplicación de la medida en frontera solicitada y comunicará al solicitante.

- III. Quien solicite las medidas de frontera, deberá otorgar a las autoridades de aduanas la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas.
- IV. Ejecutada la medida, por la autoridad competente de la Aduana Nacional, notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante.

**Artículo 213. Duración de la suspensión ordenada con la medida en frontera.**

- I. Dentro de quince (15) días hábiles de la ejecución de la medida en frontera, la Aduana Nacional deberá recibir la notificación oficial de la autoridad administrativa o judicial, indicando que el solicitante de la medida, ha iniciado acción sobre el fondo del asunto. De no ser notificado en dicho término, la Aduana Nacional levantará la medida y se despacharán las mercancías retenidas.
- II. Iniciada la acción sobre el fondo, la parte afectada por la medida, podrá recurrir a la autoridad administrativa o judicial competente para que reconsidere la suspensión ordenada. Se le dará audiencia a estos efectos.
- III. El solicitante de medidas en la frontera, responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantan o fuesen revocadas por acción y omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de autor.

**Artículo 214. Derecho de inspección e información.**

- I. Cuando se trate de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduana, o para sustentar una acción, la autoridad competente permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, la autoridad podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.
- II. Comprobada la existencia de una infracción o comisión de un delito, se comunicará al demandante el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

**Artículo 215. Medidas contra productos piratas.**

Tratándose de productos que ostenten infracciones o violaciones del derecho de autor, que se hubieran incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá que estos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un proceso aduanero diferente.

**Artículo 216. Destino de mercaderías infractoras.**

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a interponer los recursos correspondientes, las autoridades de la Aduana Nacional tendrán en cuenta lo establecido en el artículo 159 del presente Libro teniendo en consideración la proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los intereses de terceros.

---